

R

octubre de 2012 – año 4 número

10

Quito, Ecuador



La batalla electoral / Carta a Alberto Acosta
La misa de los sábados / El “socialismo del buen vivir” /
“Alianza Correa” / Criminalización y buen vivir
Movimiento indígena: Los hijos de los 90

R, revista para un debate político socialista
Año 4, número 10, octubre de 2012
quito, ecuador

Cierre de la edición: 8 de octubre de 2012

Los artículos firmados reflejan el punto de vista de sus autores

Ilustraciones: Fotografías de Elizabeth Rivera, 22 de marzo de 2012, Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos

Correspondencia, colaboraciones, opiniones, críticas, sugerencias, diríjelas a:

R.la.revista@gmail.com

Casilla 17-03-856, Quito-Ecuador

Comité Editorial:

Ellis Bethania

Eduardo Castro

Fernando López Romero

Luis Moreno Sambonino

Elizabeth Rivera

Carlos Rojas Reyes

Floresmilo Simbaña

Mario Unda

Editor: Mario Unda

<http://www.revistar-ecuador.com>



Número 10

Índice

Carta de la R a Alberto Acosta, p. 4

La batalla electoral. **Fernando López Romero**, p. 6

La misa de los sábados. **Carlos Rojas Reyes**, p. 15

El “socialismo del buen vivir”. **Elizabeth Rivera**, p. 18

“Alianza Correa”. **Rosa Lucero**, p. 26

Criminalización y buen vivir. **Mario Unda**, p. 34

Guía práctica para descargar rápidamente (o no tanto) el informe de la Defensoría del Pueblo sobre criminalización de la protesta social, p. 59

Los hijos de los 90, **Marc Becker**, p. 61



Carta de la R a Alberto Acosta



Quito, a 13 de septiembre de 2012
Compañeros de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, Ecuador
En la persona de
Economista y compañero Alberto Acosta
Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Coordinadora
Ciudad

Estimado compañero Alberto Acosta:

El colectivo que edita la Revista “R” ha seguido con interés las asambleas y reuniones para definir el candidato presidencial único por la coordinadora de Izquierdas, hecho que saludamos con verdadero agrado, es que se haya logrado en consenso y con amplio apoyo de sectores políticos y sociales comprometidos con el proceso de construcción de una verdadera democracia, y mecanismos efectivos de

participación para los movimientos sociales y los representantes de los sectores populares.

La Revista “R” ha venido contribuyendo activamente en el análisis del carácter del gobierno del Economista Correa, y desde hace mucho tiempo ha tenido una posición crítica respecto al tipo de alianzas sociales, y las políticas públicas que éste implementa. Nuestro convencimiento es que no se trata sino de un fortalecimiento del Estado que va junto de una modernización de los instrumentos para el funcionamiento explotador del capital y los dueños de éste.

Vemos en su candidatura una seria alternativa al nefasto proyecto político económico del Economista Correa, y en esa medida queremos contribuir con todos nuestros esfuerzos a construir un polo de oposición en defensa de los sectores populares y sus movimientos sociales. De esta manera, y por medio de esta misiva, le ofrecemos nuestro respaldo y le pedimos nos incluya formalmente en las reuniones, debates y trabajos que la campaña político electoral, y la construcción de este polo de oposición, a más de la consolidación de una propuesta de gobierno popular requerirán.

Sin más, le quedamos agradecidos por haber decidido encabezar y enfrentar este reto, que dará muy satisfactorios frutos.

Atentamente,

Redacción de la Revista “R”

R

La batalla electoral

Fernando López Romero



Aunque se trata de un escenario desigual y trucado, la campaña y las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero del próximo año constituyen una posibilidad extraordinaria para que los movimientos sociales y las fuerzas de la izquierda política y social desarrollemos una propuesta unitaria para enfrentar al proyecto dominante. En esta batalla electoral se expresan los intereses de las distintas fuerzas políticas y sociales, y se extenderá hasta el año 2014 cuando se realicen las elecciones seccionales.

¿Qué está en juego?

El alineamiento, la organización y la expresión de todas las fuerzas políticas de la izquierda y de la derecha se están produciendo en torno al proyecto político y económico en curso; por ello no son unas elecciones más, son la batalla en la que se definirán las fuerzas para un período histórico fundamental, en un momento en el cual está en curso una crisis general e integral del sistema capitalista mundial.

El proyecto de la Revolución Ciudadana no es una reforma democrática que modifique las relaciones entre las fuerzas sociales y económicas a favor de los sectores populares, y mucho menos una alternativa de transición pos capitalista. En nombre de “eliminar los corporativismos” y la “politiquería” se ataca a todas las expresiones de organización política y popular autónomas, mientras fomenta el clientelismo con aquellos sectores que se subordinan a la política gubernamental. El propio Rafael Correa ha definido a su gestión de gobierno como hacer lo mismo pero mejor,¹ y ha señalado a la lucha contra la pobreza como el objetivo del período; para lograrlo se deben explotar los recursos naturales, especialmente mineros.

La Revolución Ciudadana es la forma que adopta en Ecuador la modernización Capitalista en el marco del nuevo escenario geopolítico mundial. Todas las experiencias históricas de modernización han significado la expropiación de la propiedad pequeña y comunitaria y el atropello de los derechos de los pueblos ancestrales, y se han consumado sobre la explotación de los trabajadores y de los de los recursos naturales. En este proyecto se han asociado los capitalistas nativos con el capital extranjero, y para consolidarlo es imprescindible la derrota histórica de las clases y pueblos trabajadores. Ecocidio, etnocidio, nacionalismo, ideología del progreso (en cualquiera de sus variantes, desde el desarrollismo burgués hasta el socialismo burocrático estatista) han sido los ingredientes de todas las recetas modernizadoras.

En estas modernizaciones han jugado un papel muy importante los líderes políticos provenientes de la pequeña burguesía que se han aprovechado de las luchas populares.² Ellas se han realizado siempre en nombre de los pobres, de la sociedad y de la nación para beneficiar la acumulación de capital de un bloque dominante, en el cual se han reciclado parte de las viejas élites burguesas y terratenientes con nuevos sectores emergentes, tradicionalmente una fracción interesada en la industrialización o un grupo económico articulado a las necesidades de acumulación del capital internacional, todos ávidos de riqueza y de poder, que han utilizado al Estado (tecnócratas y militares) como administrador de los negocios comunes, como instrumento de acumulación, y como herramienta principal para extender el consenso y controlar o reprimir a las clases subordinadas.

Cuando las fracciones de la clase dominante modernizadora han carecido de la fuerza suficiente, han sido los caudillos militares o civiles, quienes, al frente del Estado, se han desempeñado como unificadores y representantes del conjunto de la clase dominante. Los casos del Varguismo en Brasil, del Peronismo argentino, o del Nacionalismo Revolucionario de Velasco Alvarado en Perú entre 1968- 1975, y de Rodríguez Lara entre 1972-1975 en Ecuador, son extremadamente claros. La experiencia boliviana de la Revolución del 52, o la del Panamá de Torrijos en los años 70 requieren un tratamiento distinto. En el primer caso, hay una similitud con el mexicano por cuanto el nuevo régimen político fue resultado de revoluciones desde abajo, de los campesinos en México, y de los campesinos, indígenas y mineros

¹ Una entrevista reveladora es la que Correa concedió al diario *El Telégrafo* el 15 de enero de este año, y el artículo de Decio Machado que publicamos en nuestro número anterior. En entrevista a la Revista

² Para citar algunos: Obregón, Calle y Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, Juan Velasco Alvarado en el Perú, Rafael Correa en Ecuador.

en Bolivia; pero en México, la modernización fue más extensa y profunda y se consolidó con el PRI como un partido-Estado, profundamente corrupto y represivo, mientras el MNR boliviano derivó hacia el populismo burgués, sin alcanzar a liquidar al estado de origen colonial.

En Ecuador, los políticos y economistas neoliberales, que representaban a los viejos sectores agroexportadores aliados con los emergentes señores de la banca, fracasaron en su intento de modernización.³ La aguda confrontación entre los empresarios por apropiarse de los bienes nacionales y sus políticas antipopulares, provocaron la activa resistencia de los sindicalistas públicos, de los campesinos y de los indígenas, y un mar de luchas sociales, que fueron decisivas para que este proyecto, y sus distintas expresiones políticas partidarias, ahogado en su carácter excluyente y antidemocrático, y en su extendida corrupción, haya sido derrotado a mediados de la década pasada.

El gobierno de Correa se erigió sobre la cresta de la ola de una década y media de luchas sociales contra este modelo de modernización neoliberal, en un momento en el cual América Latina, especialmente sus inmensos recursos naturales, desempeñan un papel relevante en los procesos de acumulación capitalista a escala mundial. Muchos sectores sociales y políticos, que vieron en la candidatura de Álvaro Noboa la expresión del viejo estado que representaba a los agroexportadores y financieros, apoyaron en las urnas a Rafael Correa, como la posibilidad de una derrota de ese proyecto y de abrir un camino de reformas en el cual el movimiento popular organizado desempeñe un papel importante.

Pero en los primeros pasos de Rafael Correa para organizar el nuevo gobierno a finales del 2006, y en los primeros discursos del nuevo presidente, comenzando con el de asunción del mando el 15 de enero del 2007, en el cual dedicó un espacio especial a los “infiltrados” y a los “ecologistas infantiles”,⁴ comenzó a develarse el carácter de su proyecto político y económico.

Buena parte de la izquierda política y social, desde dentro y fuera del gobierno, levantó entonces la tesis de que se trataba de un “gobierno en disputa”, sin identificar esta disputa como una confrontación entre clases o sectores de clase, sino como una lucha de posiciones en el interior del gobierno, y especialmente dentro del círculo íntimo del Presidente, entre los derechistas comandados por Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia de la República, con los izquierdistas, cuya figura más visible era Ricardo Patiño. Lo que se ha visto es que “derechistas” e “izquierdistas” coinciden en lo fundamental del proyecto gubernamental, y que éstos últimos son verdaderos perros de presa en el ataque a la izquierda y las

³ El gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik (1992-1998), quienes triunfaron en las elecciones de 1992 aprovechando la inmensa frustración que representó para los sectores populares la demagogia del cambio del gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), levantó como tesis programática la modernización del Estado. Para Durán-Dahik, modernizar al Estado significaba privatizaciones de las áreas estratégicas y del área social, especialmente de la seguridad social, para que el Estado se reduzca a garantizar el proceso de acumulación de capital y las condiciones de sometimiento y de explotación. Este gobierno fue derrotado en las urnas en la consulta popular de octubre de 1995.

⁴ Los cuadros políticos provenientes de partidos que habían sido parte del período anterior, algunos de ellos integrantes del gabinete de ministros, los asesores, los políticos locales y regionales aliados o parte del nuevo régimen, no recibieron nunca ese tratamiento de “infiltrados”.

organizaciones sociales.⁵ Con ingenuidad más parecida a la estupidez, muchos antiguos militantes de izquierda ratifican con auténtica fe de peregrinos su confianza en “Rafael”, en su ideología revolucionaria, en sus condiciones de liderazgo, reviviendo el culto del mesianismo, y el viejo cuento de que el problema son los “malos asesores del presidente”, como se dijo en los gobiernos de Velasco Ibarra.

Muchos izquierdistas de la primera hora han terminado, más tarde o más temprano, afuera del gobierno, por deserción o echados, y las fuerzas de izquierda perdieron un tiempo valioso en corregir su error inicial de apoyar casi unánimemente y sin ningún beneficio de inventario al gobierno de Correa.⁶ Si existe algo en común entre estos ahora opositores a Correa, y que debe ser reconocido en justicia, no solo es su reconocimiento de errores sino que todos proceden de una larga militancia política y social, y que ninguno aparece implicado en escándalos de corrupción. La tardanza de la izquierda en identificar el carácter del proyecto de Correa dio un margen de tiempo y de maniobra decisivo para que ese supuesto “gobierno en disputa”, se consolide cada vez con mayor claridad como un gobierno del gran capital emergente, en asocio con las transnacionales, y en el cual el Estado “de regreso”, ha jugado el papel de sujeto político fundamental.⁷

La izquierda que se juega por transformaciones profundas es un estorbo: hay que cooptarla, quitarle sus banderas históricas o eliminarla cuando sostiene su autonomía organizativa e independencia política, si no se vende ni se disciplina. Si el de Correa fuese un gobierno reformista la posición de la izquierda debería ser impulsar esas reformas. Pero se mantiene el monopolio sobre la tierra y el agua, sin que exista en el horizonte político ninguna perspectiva de reforma agraria que entregue la tierra de los terratenientes a los campesinos y que modifique las relaciones sociales en el campo, elemento central de toda revolución democrática. Hasta en el último mensaje presidencial el pasado 10 de agosto, Rafael Correa ha sostenido que impulsará el Plan Tierras entregando propiedades que están en manos del Estado. La mayor parte del agua permanece en manos privadas. El Estado, imponiendo su concepto de autoridad única sobre el agua, disputa y despoja a las organizaciones sociales y comunidades indígenas la administración del recurso y de los canales que lo distribuyen, muchos de ellos contruidos por los campesinos. Lo que el gobierno considera redistribución de la riqueza se ha reducido al cobro del impuesto a la renta, que afecta sobre todo a los trabajadores asalariados con ingresos fijos y a los consumidores, y políticas sociales, muchas de ellas originadas en directrices del Banco Mundial, las que se aplican con nombres distintos en países de signo político diferente como Venezuela, Colombia y Brasil.

⁵ La Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) es el objetivo principal de los ataques más encarnizados, para los que la densa propaganda oficial utiliza el calificativo de “falsa dirigencia indígena”, que debería recordar a desmemoriados y desmemoriadas la expresión “ponchos dorados” a la que recurrieron a su turno los gobiernos de “la larga y triste noche neoliberal”.

⁶ El MPD, al comienzo del gobierno, llamó a “transformar la Revolución Ciudadana en Revolución Socialista”.

⁷ La expresión “regreso del Estado” ha sido utilizada por los medios de comunicación y los analistas políticos para caracterizar al gobierno de Correa. Pero lo que resulta revelador de la inconsistencia ideológica y teórica de buena parte de la izquierda de formación marxista, es que ha olvidado que el Estado no es un aparato neutro colocado por encima de los intereses de clase.

La participación social es controlada por el gobierno, y las organizaciones sociales autónomas son estigmatizadas como representantes de intereses “corporativistas”, se criminaliza sus luchas y se persigue a sus dirigentes. La retórica socialista del gobierno ha sido concretada en una fórmula: “socialismo del buen vivir”, concebido como el objetivo de la Revolución Ciudadana, que se logrará por un acuerdo entre los empresarios y el Estado para erradicar la pobreza. El primer paso para aquello es dejar de ser mendigos sentados sobre montañas de oro.⁸

El mensaje del 10 de agosto fue un clarísimo acto de fe programática para defender el modelo extractivista,⁹ y el arranque oficial de la campaña electoral con un llamado directo a los empresarios a una alianza con el gobierno para unidos cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza con los recursos obtenidos de la explotación minera realizada por las transnacionales, pero sin tocar, ni con una pluma, la propiedad privada de los grandes medios de producción.

Los proyectos de modernización capitalista no han solucionado los problemas estructurales de las sociedades latinoamericanas: la pobreza estructural, las vergonzosas desigualdades entre pobres y ricos, el subdesarrollo, la dependencia, y la destrucción de los recursos naturales. Han servido para consolidar las estructuras de dominación debilitando a las organizaciones sociales y a sus representaciones políticas autónomas, y a su sombra y amparo ha surgido una gran cantidad de nuevos ricos, y se han acomodado dirigentes traidores a su clase e intelectuales arribistas.

La situación concreta

Son seis años de gobierno de Rafael Correa, favorecido por el segundo boom petrolero,¹⁰ que podrían transformarse en diez si triunfa en las elecciones presidenciales del 2013.¹¹ En este período pueden distinguirse con claridad varias etapas para comprender que la situación que vivimos se ha creado en un período largo de confrontación política.

El momento de ascenso de la expectativa de amplios sectores y organizaciones sociales sobre la posibilidad de cambios profundos transcurrió entre el 15 de enero del 2007 y la aprobación de la Constitución de Montecristi el 28 de septiembre del 2008. Pero también fue cuando Rafael Correa consiguió el control de los resortes del poder y arregló sus cuentas con el sector participacionista liderado por Gustavo

⁸ Se atribuye la frase originariamente al naturalista Alejandro Humboldt, quien visitó el territorio de lo que luego sería el Ecuador a comienzos del siglo XIX. Rafael Correa la utilizó en su Informe a la Nación del 10 de agosto pasado, para justificar la minería a gran escala y atacar vigorosamente a quienes se han opuesto al modelo extractivista, recibiendo sonoros aplausos del público asistente.

⁹ En el Perú, en este momento existen 254 conflictos sociales por la resistencia a la minería, con saldos elevados de víctimas de la represión. El más grave es el del Departamento de Cajamarca, en el norte del país. Uno de los componentes más explosivos de la guerra colombiana es la disputa por los recursos y las regalías provenientes de la actividad minera.

¹⁰ En seis años las exportaciones de petróleo han significado aproximadamente 120 mil millones de dólares, el doble de los ingresos del período 1972-2006.

¹¹ De ocurrir así, Correa sería el Presidente que más tiempo ha gobernado de corrido en el siglo XX y en lo que va del XXI. En el siglo pasado, solo Velasco Ibarra, pero en cinco períodos distintos entre 1934 y 1972, como Presidente Constitucional o como dictador, llegó a gobernar un poco más de una década. En el siglo XIX, quienes más tiempo gobernaron fueron Juan José Flores, en dos períodos, García Moreno, entre 1860 y 1875, e Ignacio de Veintimilla entre 1876 y 1883.

Larrea.¹² Dayuma,¹³ la salida de Alberto Acosta, la figura más relevante de los neo constitucionalistas y el símbolo del movimiento, a mediados del 2008, y el inicio de aprobación de las Leyes orgánicas,¹⁴ marcaron y determinaron el final de este período.

Desde octubre del 2008 hasta el “Treinta aquel...”¹⁵ del año 2010, los sectores populares, especialmente indígenas y campesinos, asumieron la resistencia a los intentos de imposición de la Ley de aguas y del modelo extractivista. El fracaso de la revuelta militar y policial, que cerró el período, permitió al gobierno una mayor concentración de poder, fortaleciendo su carácter de representante de los grandes grupos económicos, profundizó el distanciamiento con los sectores populares organizados, pero les dio a las Fuerzas Armadas mayor peso político, en tanto dejó heridas abiertas y un distanciamiento con la Policía Nacional.

Desde el “Treinta aquel...” hasta este momento, los campos políticos se han definido en el marco de la confrontación entre proyectos políticos distintos. Ha sido fundamental la lucha popular independiente expresada en la Consulta Popular del 7 de mayo del 2011 y en la Marcha por la Vida de marzo pasado. Entre la euforia del poder y la paranoia de perderlo, Correa y el círculo gobernante han ido precisando cada vez con mayor claridad lo que entienden por socialismo, explicando cada vez que no se trata de afectar la propiedad de las clases dominantes y redistribuir la riqueza. Lo que revela la situación política presente es la desaparición del centro político y una clara presencia de fuerzas de derecha y de izquierda, y que por primera vez desde el año 2006 el campo de la izquierda está en abierta disputa, lo que incomoda a una Alianza País que hace cosas de derecha que pretende justificar utilizando una retórica de izquierda.

Más que una fuerza política e ideológica organizada, Alianza País es una marca posicionada e identificada con la figura de Rafael Correa, y cuyo principal apoyo electoral se origina en el reconocimiento de la obra estatal, las prácticas clientelares, y la intensa propaganda gubernamental.¹⁶ La existencia de Alianza País

¹² Todos los sectores y organizaciones sociales elaboraron propuestas que presentaron en la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. La inclusión de derechos, incluidos los de la naturaleza, fueron recibidos con entusiasmo.

¹³ En diciembre del 2007, el mismo día en que se instalaba la Asamblea Constituyente en Montecristi, en Dayuma, una pequeña población petrolera de la región amazónica, el ejército reprimía a pobladores acusados de sabotaje. Esto determinó la salida del entonces Ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, y la prisión de la Prefecta de la Provincia de Orellana, Guadalupe Llori.

¹⁴ Alberto Acosta cuenta que una vez aprobada la Constitución, Alexis Mera, el principal asesor jurídico de Correa, habría dicho que las leyes orgánicas debían rebajar los derechos; el propio Rafael Correa se ha reconocido hace poco como un grave error personal el haber cedido a los izquierdistas que hicieron una Constitución “tan garantista”.

¹⁵ Luego de que se ha patentado la propiedad del término 30S por parte del Gobierno, lo que significa que no puede ser usado sin el permiso respectivo, que no pienso pedir, por lo menos yo voy a usar el equivalente de “Treinta aquel...”. No pretendo volverlo mi propiedad privada, así que si a alguien se le ocurra utilizarlo, en buena hora.

¹⁶ Para propiciar la apertura económica exportadora, los gobiernos de Velasco Ibarra y de Camilo Ponce llevaron adelante en los años 50 una intensa modernización de las vías de comunicación con la construcción de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos financiados, como ahora, con créditos internacionales, provenientes entonces del Banco Mundial, mientras que ahora el principal acreedor es la China. Gobiernos como el de Alberto Fujimori modernizaron también la estructura de transporte.

expresa precisamente la inexistencia de un proyecto de cambio con una perspectiva programática profunda y de largo aliento. Es un movimiento político en el que la “izquierda” (Patiño y compañía) le hace el trabajo a la derecha cuando persigue a la izquierda de dentro y de fuera del movimiento, del Estado y del Gobierno;¹⁷ será lo que quiera Correa; hace lo que dice Correa que se haga.

En el último período, la iniciativa para la batalla electoral la ha mantenido el gobierno. Solo la candidatura de la Coordinadora Plurinacional ha escapado, parcialmente, a esta capacidad de iniciativa,¹⁸ mientras que una serie de eventos han configurado un escenario propicio para la candidatura de Rafael Correa: aprobación del Código de la Democracia, que establece un control a los medios de comunicación durante la campaña electoral mientras el gobierno disfruta de las ventajas del poder; la estructuración del nuevo Consejo Nacional Electoral; la aprobación del método para establecer ganadores en las elecciones, que favorece a las fuerzas políticas más grandes; los acuerdos con fuerzas políticas regionales lideradas por nuevos caciques; la depuración del Movimiento y la designación únicamente de candidatos cuya principal característica sea su lealtad al Presidente; la intención de eliminar a fuerzas políticas aprovechando el escándalo de las firmas falsas.

La gran apuesta de Correa es ganar en una primera vuelta y conquistar mayoría en la Asamblea. Si acaso no consiguiera esta mayoría, le queda el recurso de la muerte cruzada. Sin embargo, todos estos recursos significarían un desgaste cada vez mayor de su proyecto. En el interior de Estado el “Treinta aquel...” es todavía una herida abierta, mientras que en la sociedad crece cada día el número de damnificados por el gobierno: maestros, estudiantes, profesionales, campesinos, policías, médicos y enfermeras, burócratas despedidos, campesinos e indígenas, ambientalistas, pequeños comerciantes, comunidades ancestrales.

Entre ilusiones, riesgos, desconfianzas y dudas

Existe la ilusión, sostenida en consideraciones aritméticas, de que la candidatura de la izquierda parte con posibilidades, no solo de pasar a una segunda vuelta con Correa, sino hasta de ganar la Presidencia: que se trata de hacer una campaña inteligente, con buenas propuestas y alianzas locales. No faltarán quienes sostengan que para cumplir este objetivo será necesario eliminar del programa los temas fundamentales para una transformación revolucionaria: modelo económico que garantice cambios estructurales y progresivos para eliminar la horrorosa brecha de desigualdad social que está en la base de la violencia social, agua, tierra, estado plurinacional, soberanía alimentaria, derechos de los trabajadores, democracia radical, reforma de la policía y de las fuerzas Armadas, redistribución de la riqueza más allá de las políticas sociales asistencialistas, para no asustar a los potenciales electores de los sectores medios, y para ganar votos entre la derecha y los

¹⁷ La salida del Gobierno de Diego Borja, echado de su cargo en Relaciones Exteriores por Ricardo Patiño, y acusado de haber entregado más de 200.000 firmas falsas a Alianza País, es el suceso más reciente de una larga cadena que comenzó con Gustavo Larrea y continuó con Alberto Acosta, Manuela Gallegos y tantos otros.

¹⁸ La obligación antidemocrática de salir a la calle a recoger más firmas, en medio de una campaña hostil desatada desde el gobierno, condiciona la actividad de Pachakutik y del MPD, pero es también la posibilidad de un temprano contacto con los sectores populares, y de iniciar la campaña.

empresarios. Renunciar desde el comienzo a hacer de la campaña electoral, momento de elevada politización, una posibilidad de educación política de millones de personas sobre los problemas de nuestra sociedad y la posibilidad de resolverlos. No se considera que una eventual victoria de estas características, como resultado de una política de frente amplio con un programa reducido a las conquistas constitucionales del 2008 y a eliminar el hiper presidencialismo, caracterizaría de entrada al supuesto gobierno de la izquierda como un gobierno débil; se menosprecia también el olfato de clase de la burguesía.

Existe el riesgo de que muchos oportunistas, mafias y grupos de poder, se sumen a la candidatura de la izquierda, sobre todo si esta adquiere fuerza y posibilidades de gobernar. Pero el riesgo mayor es que no se sumen los sectores fundamentales de la sociedad y especialmente los sectores de avanzada de los movimientos sociales, los centenares de miles de jóvenes, hombres y mujeres, urbanos y rurales, de las capitales y de las pequeñas poblaciones, que quieren un cambio verdadero. Si logramos esta articulación de un frente único de los más amplios sectores populares, cualquier resultado electoral contará con el apoyo del pueblo movilizado.

Hay amplios sectores que han desarrollado una gran cantidad de dudas y desconfianzas, que expresan su resistencia a prácticas burocráticas, oportunistas y sectarias de las fuerzas que componen la Coordinadora. No se trata de negar el pasado sino de superarlo, pero esta no es una tarea que será el resultado de las buenas intenciones sino de una práctica política democrática en la cual las decisiones no se tomen a espaldas de las clases trabajadoras y de los pueblos del Ecuador. La Coordinadora no es una agrupación de santos, decía Alberto Acosta, y podemos agregar que no hay nadie, individuo u organización social o política que no tengamos “cadáveres en el armario”. Nuestra diferencia moral estará en la capacidad de no esconderlos, de ventilar nuestros errores, de aprender de ellos. De reconocer que se han cometido en el marco de la lucha, como resultado de debilidades teóricas, desorientación ideológica y programática, de debilidades e incapacidad política. De ninguna manera las legítimas desconfianzas y dudas deben inmovilizarnos.

Las tareas de la izquierda y el campo popular

El escenario electoral no ha sido definido solamente desde las maniobras del poder, sino también desde las múltiples resistencias, cuya característica más destacada y valiosa es la experiencia y la claridad obtenida sobre el proyecto de dominación en curso.

La candidatura unitaria de Alberto Acosta a Presidente de la República es un paso importantísimo en la dirección correcta. Es la primera vez en nuestra historia que las fuerzas de izquierda coinciden en un candidato único y surgido de sus propias filas. La unidad electoral de la izquierda es una respuesta defensiva ante la ofensiva gubernamental, pero tiene también la fortaleza de plantear una alternativa para disputar el gobierno desde la Izquierda de Alianza País y con total independencia de la derecha.¹⁹ La unidad electoral debe ser vista solo como el

¹⁹ En 1944, la izquierda en su totalidad coincidió en apoyar a un mismo candidato, pero se trataba de José María Velasco Ibarra, y los costos de haberle dado ese apoyo fueron inmensos. En 1996, el naciente Pachakutik apoyó la candidatura del centroizquierdista Freddy Elhers; para las elecciones

primer paso para construir, con firmeza y paciencia, una alternativa de unidad estratégica incluyente en la que todos los sectores y organizaciones se representen por sí mismos, y que se articule en un programa alternativo a la modernización capitalista, que contribuya para la unidad y el desarrollo de la fuerza social y política que pueda detener y derrotar a las políticas anti populares.

Ese programa alternativo no puede ser un conjunto de concesiones que solo permitan construir una fuerza electoral, sino una herramienta para profundizar los cambios conquistados por los sectores populares (indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres, capas medias, intelectuales y artistas, ambientalistas y ecologistas, trabajadores urbanos, comerciantes minoristas, jornaleros agrícolas) en décadas de lucha, que han permitido avanzar en la democratización de la sociedad y el desarrollo de derechos sociales y políticos; en la derrota de las políticas neoliberales; en la lucha por la defensa y rescate de los recursos naturales; en la lucha por la tierra y territorios.

La candidatura de la izquierda debe desarrollar una política que coloque al gobierno a la defensiva. Ello solo será posible a través de la movilización permanente desde las bases sociales y sectores populares.

18 de septiembre de 2012

R



del 2003, la CONAIE y Pachakutik apoyaron a Lucio Gutiérrez, quien traicionó al movimiento indígena; en las elecciones del 2006, especialmente en la segunda vuelta, la inmensa mayoría de la izquierda dio su apoyo a Rafael Correa.

La misa de los sábados. Religión y política

Carlos Rojas Reyes



Estamos acostumbrados a pensar la religión y la política como ámbitos separados. Más aún, solemos juzgar el grado de modernidad de una sociedad por su grado de secularización. Sin embargo, el problema radica en que las formas y los contenidos de la religión se trasladan subrepticamente a la vida social, provocando en ella distorsiones poderosas (Agamben).

En el caso del Ecuador, podríamos preguntarnos por el peso de la religión en nuestra realidad actual. Ciertamente que ya no influye directamente en la magnitud que lo hacía cuando había una confusión entre las corrientes conservadoras y la Iglesia Católica. Por otra parte, el catolicismo ha ido perdiendo peso frente a las iglesias cristianas –de tipo pentecostal–; y su desgaste también se produce por una cierta práctica libre de las creencias por parte de muchos católicos, que viven su fe al

margen de la institucionalidad eclesiástica. (Estudios rigurosos hacen falta para comprender a cabalidad estas hipótesis provisionales.)

Lo que quiero mostrar son algunos elementos religiosos que han sido secularizados y que se trasvasan a la práctica política que, por cierto, datan de una larga tradición, especialmente por las tendencias mesiánicas de los populismos y de algunas corrientes guerrilleras.

[Culpa, castigo, perdón]

Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita son dos periodistas que saltaron a la fama al escribir *El gran hermano*. No se trata de discutir el valor de sus contenidos en este momento, sino de las dos posiciones que se enfrentaron.

Luego de un largo juicio los periodistas son sentenciados a cárcel y a pagar una suma cuantiosa por ofensas al presidente. Presiones de diversa índole, incluyendo la inminencia del período electoral, le llevan al gobierno a desistir de la sanción.

Es aquí en donde entran los contenidos religiosos secularizados: los periodistas son, en el discurso gobiernista, *culpables*. Como tales merecen la sanción que les fue impuesta. Sin embargo, la culpa está unida a la posibilidad del perdón. Más aún, sin culpa no hay perdón posible. El gobierno deja de insistir en el arrepentimiento. Como autoridad generosa que se coloca por encima de los culpables, decide perdonarles.

La estructura religiosa está por demás clara en esta serie de eventos. La posición de lo más correcta y digna de los periodistas dice: No queremos perdón, queremos justicia. No aceptamos perdón, sino que queremos ser absueltos legalmente.

Se ve como en la acción del gobierno colapsa el mundo jurídico en el religioso: ese desliz que va de la justicia al perdón. Desde luego, el perdón se representa judicialmente que, a su vez, no es aceptado por los culpables. Por ahora, el juicio sigue, en la medida en que el gesto religioso del “padre generoso y benevolente” ha sido rechazado. ¿Qué otra cosa podría hacer este padre sino resentirse en extremo por la *ingratitude* de los hijos?

Entonces, como han rechazado el perdón generoso, todo el peso de la ley tiene que caer sobre ellos, porque han cometido una doble ofensa: ofender al gobierno, y lo que es peor, negarse a recibir el perdón.

[El sacerdote, los fieles y los infieles]

El otro caso que quiero mencionar es el de las cadenas de los sábados. Ciertamente que hay allí un ejercicio retórico, construido desde estrategias de persuasión bastante elaboradas que pretenden ideologizar a las masas.

Nuevamente, más allá de este plano estrictamente de estrategia política, la eficacia de las cadenas tiene otro componente: aspectos religiosos secularizados. Hay un oficiante, un sacerdote que lleva única y exclusivamente la ceremonia, que no puede ser delegada a otros, que le corresponde de manera exclusiva.

En esta ceremonia tenemos muchos elementos de una misa típica: un sermón en donde acoge a los fieles y condena a los infieles, a tal extremo que muchos de ellos son inmediatamente sometidos a la justicia o a la sanción que les

correspondería. Allí igualmente se señala a los que están dentro de la doctrina correcta – la revolución ciudadana– y los que son herejes, del tipo que fueran.

Allí se enseña a amar y a odiar; allí los que están con el gobierno se salvarán y los que no, se condenarán. También hay espacio para el perdón, para la magnanimidad, que es cada vez menos frecuente.

No se puede olvidar la estructura simbólica que atraviesa toda la cadena sabatina: la apelación a los símbolos patrios –por ejemplo, a Patria, tierra sagrada–, al largo y detenido recuento de las acciones “salvíficas” realizadas por el gobierno que van directamente hacia el bienestar de los ciudadanos.

Me parece que mucha gente pone en la radio o en la televisión la cadena sabatina como un sustituto de la misa a la que no asiste, como un reemplazo del sermón que ya no oye; en fin, como parte de su tarea semanal de superación personal y encuentro con la *verdad*.

Uno de los aspectos que con más insistencia se resalta en las cadenas es el de la verdad: “Nosotros decimos la verdad, los demás mienten.” La verdad no es algo que venga de una demostración, de unos argumentos que son en último término irrelevantes. La verdad es algo que le pertenece de modo inherente al gobierno, que por ser tal no puede equivocarse y si lo hace, está imposibilitado de reconocer su error, porque su infalibilidad se vendría abajo.

La adhesión emocional de capas de la población ecuatoriana al gobierno – como pasa en otros países de América Latina– se da porque los gobiernos no sostienen que tienen la verdad sino que son la verdad. (Por eso no resulta extraño que los partidos comunistas estén tan felices con este tipo de gobierno, que encarnan el máximo del culto a la personalidad en un marco de una pretendida burguesía revolucionaria.)

Una verdad que va tan lejos que se funde ya no con el gobierno sino con el Estado, en ese camino perverso del hiperpresidencialismo; desde allí, ya no se trata solo de administrar la sociedad sino regular el Buen Vivir.

Ciertamente que todos estamos a favor de vivir bien; sin embargo, lo peor que nos puede pasar es que el Estado defina y decida, para todos los ámbitos de la existencia humana, en qué consiste el buen vivir.

Lejos de ser una característica exclusiva de este gobierno, la penetración de las estructuras religiosas en la sociedad y en la política es una constante en nuestras sociedades; lo que hacen a lo largo de los años, es cambiar de forma.

También hay que señalar que no solo la práctica del gobierno está penetrada por este tipo de secularización que mantiene y realiza lo religioso, sino que la política como tal tiende a estar determinada de esta manera.

Así se busca otro líder carismático, otro salvador que nos libre del presente; otra verdad indudable que oponer a la que sostiene el gobierno actual; e incluso, la aparición algo desgastada de otro tipo de mesianismos.

Viejos mecanismos de dominación ahora reciclados, para que sirvan a la tarea fundamental: la reproducción ampliada del capital, especialmente del capitalismo financiero.

R

El “socialismo del buen vivir” según Rafael Correa

Elizabeth Rivera



En el informe presidencial del 10 de agosto²⁰ de este año, Correa apuesta a construir imaginarios sociales de cara a las elecciones de febrero de 2013 en tres direcciones: 1) sus contendores; 2) mayores definiciones de su programa de gobierno; y 3) su marco conceptual ideológico. Ahora se sitúa discursivamente en el “socialismo del buen vivir”, dejando en segundo plano el “socialismo del siglo XXI”, bajo el cual se cobijaba anteriormente.

Extractivismo y desarrollo

Desde este “nuevo escenario”, quiere convencer a los ecuatorianos que la única respuesta a todos los males creados por el capitalismo –entiéndase pobreza y desigualdad, profundización de la estratificación social, mundialización y

²⁰ Cada 10 de agosto el presidente del Ecuador rinden un informe anual a la nación sobre la situación del país, este 10 de agosto fue el último informe del actual período presidencial de Rafael Correa.

discriminación cultural- es la actividad extractivista; este es el núcleo fuerte de su propuesta:

...la distribución del capital social, del acervo social es fundamental para mayor igualdad, para disminuir la pobreza; ejemplos de las mejoras del acervo social son los nuevos contratos petroleros, que nos dan al menos el 80% de la renta petrolera...

Además, el 12 % de las utilidades petroleras, privadas o implícitamente en las empresas públicas, quedan para desarrollo local...

Los nuevos contratos mineros nos dan al menos el 52% de la renta minera, el porcentaje más alto del mundo, esos modelos de contrato están sirviendo para muchos países que nos los han pedido; además que el 60% al menos quedan para desarrollo local en las comunidades, para que nunca pase lo del petróleo, que la riqueza se vaya a otros lados y quedaba ahí solo contaminación y pobreza. Y de hecho yo no tengo problema que quede ahí el 100% en regalías para desarrollo hasta erradicar la pobreza [por] que deberían ser, y lo serán, los más prósperos.

Otro ejemplo del acervo social es el plan tierras, por el cual planeamos entregar cerca de 90 mil hectáreas de tierras que están en manos del sector público a asociaciones campesinas, legalizar 595 mil hectáreas de tierras ancestrales y la titulación masiva de 215 mil predios de pequeños campesinos; todo esto hasta abril del 2013.

...no es el acervo social público solo el que debe distribuirse, [...] una de las mayores inequidades ha sido la concentración en poquísimas manos de la propiedad privada, ¿cuántos ecuatorianos son propietarios de empresas? Un 2%. Por ello no hemos caído en el simplismo de la reprivatización de empresas incautadas a banqueros deudores, sino que hemos logrado que con financiamiento de la banca pública las empresas sean compradas por los trabajadores, y no nos temblará la mano en el momento que tengamos que afectar latifundios improductivos para dárselos a campesinos necesitados.

El Estado ecuatoriano no optó por una sola estrategia de venta frente a las empresas incautadas, como afirmó el Presidente, tres son los mecanismos: vender a empresarios privados²¹, a los accionistas²² y, a los trabajadores. Por ejemplo, el caso del Ingenio la Troncal, la empresa más grande de las incautadas, se prevé un 12,4% para los trabajadores²³, y se vendió el 70% al Grupo peruano Gloria.

La democracia

Rafael Correa propone un modelo de democracia y un rol para cada "ciudadano": los expertos gobiernan y el resto debe confiar en la buena voluntad y capacidad de los gobernantes. Este discurso reduce la política a un asunto de expertos en el desarrollo y vuelve la democracia prescindible, de acuerdo a las

²¹ Caso del ingenio La Troncal en manos del Grupo peruano Gloria (el 70%), o de la empresa Maxigraf, incautada a los hermanos Isaías y ahora en manos de la Unidad de Gestión y Derecho Público (Ugedep), Maxigraf se venderá a Salvatore Anza, un empresario italiano de PM Packaging, que tiene previsto primero administrarla y después realizar la compra. <http://www.eluniverso.com/2012/09/07/1/1355/empresa-incautada-mantiene-sesenta-empleados-tercerizados.html>.

²² En la revista Vistazo se detalla cómo va a ser la venta de las 165 empresas que pertenecían a los banqueros Isaías. <http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3424>

²³ También vender a trabajadores un porcentaje de acciones, caso ingenio la Troncal (12,4% en manos de 1.976 trabajadores). <http://www.heraldodelcanar.com/2012/09/17/trabajadores-de-ecudos-reciben-124-de-acciones/>

“prioridades de desarrollo”. Una democracia sujeta a la personalidad del gobernante y alejada de la necesaria construcción de consensos, niega lo aprobado en la Constitución del 2008²⁴. En ese marco de entendimiento de lo que implica la democracia para Correa, no sorprende que el consentimiento previo –ejemplo de democracia directa– le resulte una “barbaridad” y un “disparate”:

...con el consentimiento previo había la intención de parar la XI ronda petrolera, pero debemos lograr estos consensos mínimos, tal vez yo no sea el mejor para lograr esos consensos mínimos por mi personalidad, pero superando las limitaciones del presidente, los grupos sociales en el país debemos lograr consensos mínimos, contra estos disparates que perjudican a los que dicen defender.

Se acercan elecciones, y cualquiera que sea el próximo gobierno, con barbaridades así tendría un país inmanejable. Tengamos claro que sin nuestros recursos naturales no venceremos a la pobreza o nos tomará mucho más tiempo, o mucho más sufrimiento, hacerlo. Recuerden: vencer la pobreza será la prioridad, incluso, de ser necesario, excluyente.

Nuestra estrategia de desarrollo es muy clara, y sabemos lo que hablamos, somos expertos del desarrollo. Los llamados tigres asiáticos, para muchos ejemplo de desarrollo acelerado ante la ausencia de recursos naturales – ¡cómo quisieran ellos tener nuestros recursos naturales!–, debieron permitir la explotación brutal y general de la fuerza laboral [...].Y por ello, al tener que reprimir la tensión social general que esto provocaba no podían tener regímenes democráticos...

Planteamientos de este tipo tienden a sacar a la sociedad de la política, convencerla de que su rol es elegir entre uno u otro candidato, entre una propuesta y otra, participar sin decidir. La política como un asunto de “expertos”, esa es la propuesta de democracia de la revolución ciudadana, y como dice el Presidente: “...si algo he descubierto o verificado en estos años es que todo están en función del poder, no de la lógica ni de la justicia”.

Refiriéndose a la primera experiencia de consulta comunitaria, realizada en Quinsacocha²⁵ el 2 de octubre del 2011, plantea: “...para defender sus vanidades se erigen como heraldos de la democracia participativa y lo único que hacen es romper las normas elementales de una democracia”, y la califica como espuria.

Los “expertos en desarrollo” y “nuestros hermanos indígenas”

En el discurso, Correa reconoce que los pueblos y nacionalidades indígenas son los actores centrales en conflicto y les dedica palabras como: “...el haber sido objeto de graves injusticias, no hace a nadie ejemplo del buen vivir, no hace a nadie más sabio que el resto...”; les acusa de “etnocentrismo” y, si bien plantea que viven situaciones de explotación y discriminación, les da un lugar: el de “víctimas

²⁴La Constitución de 2008 incluye dos elementos que determinan un cambio en la democracia, pues amplían la participación y la capacidad de toma de decisiones de la sociedad: se trata del reconocimiento del Estado ecuatoriano como Plurinacional y de la inclusión del derecho a la consulta previa, cuyo sentido se encuentra en disputa.

²⁵Quinsacocha, parroquia rural de Cuenca, donde se realizará la primera explotación minera a gran escala y a cielo abierto, con una proyección de procesar 3.000 toneladas de oro al día, cuenta con el contrato firmado.

victimizadas” con lo que les niega su condición de sujetos históricos centrales en nuestro país:

...nuestro país ha sido el país de la injusticia, pero la simpatía con las víctimas hace idealizarlas y asumimos que, por víctimas, tienen supremacía moral sobre los no victimizados, tienen todas las respuestas para el buen vivir, y asumimos que no tienen ninguna responsabilidad sobre su situación...

Repite casi textualmente el discurso que hiciera en la 42 Asamblea General de la OEA, realizada en Cochabamba, Bolivia, el 4 de junio de 2012, sobre “la victimización de la que son objeto los indígenas”, y dice que esa es la razón del apoyo de sectores sociales hacia las tesis de los pueblos y nacionalidades indígenas y no el rechazo al modelo extractivista. Este apoyo político de sectores de la sociedad a nivel nacional se evidenció en la gran “Marcha por el agua, la vida y la dignidad”, en marzo de este año, cuando, según estimaciones de los movimientos sociales, participaron de 30 a 40 mil personas (y de acuerdo con los cálculos del propio gobierno estuvieron presentes de 15 a 20 mil personas).

Rafael Correa se propone como el “experto en desarrollo” que sabe cómo ayudar a “los indios”, o “hermanos indígenas”, como los llama indistintamente a lo largo de su discurso, a salir de la pobreza en la que viven:

...si queremos ayudar, hay que saberlo hacer; esta victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales y probablemente es la peor forma de racismo, porque tiene que ver mucho con paternalismo, subestimar a nuestros pueblos ancestrales, y esperamos que todo cambie sin cambiar nada y eso es sencillamente imposible.

Y promete:

En las elecciones no permitiré mientras sea Presidente que se sacrifique lo más importante de la Pachamama, el ser humano; no vamos a ser mendigos sentados en sacos de oro, y utilizaré con absoluta responsabilidad social y ambiental nuestros recursos naturales, como lo han hecho los más ricos del mundo, que no tienen calidad moral en cuestiones ambientales.

Está en la memoria de la gente cómo los mega-proyectos del gobierno han beneficiado a grandes empresas y a gente vinculada a lo que él llama “la partidocracia”, y las consecuencias que han tenido: desplazamiento de campesinos y de pueblos tanto indígenas como afroecuatorianos, e incluso la muerte de personas que resistieron. Un caso concreto es el Proyecto Multipropósito Baba, calificado por gente del propio gobierno como un “proyecto de abusos múltiples”.

En su intervención el presidente reconoce a la Constitución del 2008 como la más avanzada, pero desconoce que el centro más progresista de esa Constitución son los conceptos propuestos, creados, amasados –en los largos procesos de lucha contra la colonia, y la conformación del Estado-nación– por los pueblos y nacionalidades indígenas: Estado Plurinacional, Sumak Kawsay, economía comunitaria; todos ellos aportan con alternativas para salir del capitalismo y de sus ciclos de crisis que son la mayor amenaza actual contra la vida en el planeta.

Sus contendores y sus aliados

Cerca de 35 minutos de su intervención la dedicó Correa a construir argumentos y lecturas sobre los pueblos y nacionalidades indígenas como objeto de otros, usados por otros; el fin de ese discurso, justificar el modelo de acumulación extractivista que propone de cara a las elecciones del 2013.

...qué difícil es la lucha contra la pobreza, sobre todo con nuestros pueblos ancestrales, con tanta desinformación. Antes era la derecha que quería tener a los **indios** sumidos en la ignorancia... no les interesaba... [que] se sepa **cuántos indígenas tenemos**. Ahora es una pseudo izquierda que hace lo mismo... Ahora es la consulta previa, donde ciertos irresponsables están envenenando a nuestros hermanos de pueblos ancestrales para que ni siquiera dejen entrar a los socializadores. ¿Cuántos muertos buscarán?, rechazemos estas barbaridades.

Quieren impedir con esto la **XI Ronda Petrolera**, supuestamente para evitar impactos a la naturaleza y culturas ancestrales. La verdad es que la Ronda comienza con exploración, la cual tiene mínimo impacto ambiental; se niegan hasta a saber lo que tenemos para tomar decisiones informadas. Esta es la mayor muestra de ignorancia: negarse a saber, y con ello sumen en la pobreza a los que dicen proteger.²⁶

La “XI Ronda Petrolera” provoca fuertes conflictos y rechazo por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas, en especial de la Amazonía, porque afecta directamente los territorios de las nacionalidades Shuar, Achuar, Shwiar, Wao y Zápara, a través de la concesión de 21 bloques petroleros en las provincias de Orellana, Pastaza y Morona Santiago, que el Estado pretende entregar a empresas privadas trasnacionales en octubre del presente año.

Los pueblos indígenas amazónicos saben lo que implican los procesos, tanto de “exploración” como de explotación petrolera; están en su memoria todos los procesos vividos al norte de la Amazonia con las nacionalidades Aí, Cofanes, Sionas, Secoyas y Kichwas; el más reciente en la memoria fue la **exploración** en territorio del pueblo de Sarayaku por la empresa CGC, actividad acusada de causar daños irreparables a los territorios ancestrales y por la cual la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sancionó al Estado ecuatoriano.

La exploración sísmica de la empresa CGC en el pueblo Sarayaku implicó la colocación de aproximadamente 1.433 kilogramos de explosivo pentolita, y un conjunto de acciones que violaron los derechos colectivos de dicho pueblo. El problema que se agudizó en los años 2002 y 2003, pero el gobierno actual no dio respuesta, ni consultó al pueblo Sarayaku los términos en los que el año 2010 dio por terminado el contrato, cuando, con sus firmas, el Estado y la empresa “aceptan y ratifican que **no existe ningún pasivo ambiental** en el área de concesión atribuible a la contratista”.²⁷

En su exposición, muy hábilmente responsabiliza a la izquierda, denominada por él “pseudo izquierda”, por la violencia estatal con la que se ha respondido hasta ahora y por la que se usará en adelante para enfrentar el conflicto social. “*La revolución ciudadana avanza*” a punta de represión y de acciones judiciales en contra de dirigentes sociales; no es un proceso pacífico, rompe con todos los imaginarios, se apropia de los discursos, crea realidades a través de conceptos:

²⁶ Las negrillas y corchetes son de la autora del texto.

²⁷ El 19 de noviembre de 2010, por escritura pública, PETROECUADOR firmó con la empresa CGC un Acta de Terminación por mutuo acuerdo del contrato de participación para la exploración y explotación de petróleo crudo en el Bloque 23 [...]. El Pueblo Sarayaku no fue informado de los términos de la negociación que sostenía el Estado con la empresa CGC ni de las condiciones en las que se celebró el Acta. Este documento está en la Sentencia de la CIDH frente a la demanda presentada por el Pueblo Sarayaku: <http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm>

...somos 12 países en el mundo que tienen pueblos en aislamiento voluntario y en lugar de recibir felicitaciones por esto, tenemos una demanda de genocidio en la corte interamericana, puesta por grupos extremistas nacionales; somos el mayor país de bosque primario y quieren que nos muramos de hambre sin explotar nuestros recursos naturales, ¿acaso lo mejor era destruir todo desde un inicio?, ya basta de tanta doble moral.

En su discurso, Correa se juega por crear imaginarios de cambios profundos que se llevarán a cabo en **otro período**, y en una alianza entre los trabajadores y los empresarios, mediada por lo que él llama Estado.

Y algo importante: estamos pulverizando la teoría ortodoxa, y todos estamos aprendiendo de esto, incluso el sector empresarial, porque la teoría dice mientras mejores salarios, más estabilidad, pago al seguro social, etc., menos empleo, porque se encarece el salario, somos menos competitivos; pero dignificando el salario en Ecuador ha sucedido exactamente lo contrario: [la] tasa de desempleo, de un 9,1% en el 2004 pas[ó] en el 2012 a 5,2%, la más baja de la historia del país y de la región. Creo que hemos aprendido que haciendo vivir bien a nuestros trabajadores viven también bien los empresarios, porque van a tener a quién vender, perpetuar el proceso de crecimiento, dinamizar la economía.

En fin, caracteriza al Estado ecuatoriano como una nueva institucionalidad, un “Estado popular” e “integral”, y lanza una conclusión: quien puede garantizar la continuidad de todo lo alcanzado es “su revolución ciudadana”:

Esa es la esencia de la revolución ciudadana: el cambio en las correlaciones de poder en favor de las grandes mayorías, y que se expresa en superar ese Estado burgués y convertirlo en un Estado integral, como lo llamaba Zavaleta, pensador boliviano, Estado integral, como lo llamaba Gramsci, o Estado popular, representando a todas y a todos.

Programa de Gobierno

Según Correa, los temas transversales en las próximas elecciones serán:

...prioridad excluyente para remediar por lo menos 4 cosas: lograr equidad y eliminación de la pobreza; que los más ricos paguen más impuestos y que ese ingreso sirva para financiar, a través de un adecuado gasto público, la igualdad de oportunidades; [...] nunca más permitir que la educación y la salud se conviertan en simple mercancía [...] tercero, gobernar los mercados en función de los objetivos sociales [...] y, cuarto, adecuada distribución del acervo social, tanto público como privado.

Las propuestas concretas: plan de tierras, no reforma agraria; se dará por terminada la pesca de arrastre; aumento de la explotación de hidrocarburos con la “XI ronda petrolera”; explotación minería a través de empresas trasnacionales; y venta de bonos de carbono. Todas estas propuestas se enmarcan en la “economía verde” que defendió en RIO+20²⁸.

Un ejemplo de este tipo de políticas es el programa “Socio Bosque”, al que el presidente califica como “un éxito completo”, porque es “totalmente costo efectivo, donde le pagamos a las comunidades para que mantengan el bosque en pie”.

²⁸ Discurso del Presidente Correa en la Cumbre de Rio+20: <http://www.youtube.com/embed/VPuF3qWFCmE> frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

El programa “socio bosque” ha ocasionado fuertes conflictos internos en las comunidades, como sostiene una dirigente de la nacionalidad Zápara²⁹. La nacionalidad Zápara firmó dos contratos con el programa Socio Bosque, en los que involucra casi la totalidad de su territorio, quedándose sin espacios en los que realizar sus actividades de subsistencia:

...son contratos firmados por unos pocos, sin consultar a la comunidad [...] nos deja sin territorio donde cazar, nos impide cortar árboles para hacer nuestras casas, ni para sembrar [...] nos convierte en empleados del Estado, dejan de ser nuestros territorios ancestrales [...] ¿qué vamos a decirles a nuestros hijos cuando nos pregunten por qué perdimos nuestro territorio?

Pero el presidente, en su discurso a la nación, sostiene que los opositores son los fundamentalistas; otra vez presenta los fines del desarrollo como justificación de cualquier acto; *sí* a la conservación para venta de carbono a toda costa, incluso limitando o poniendo en riesgo la subsistencia comunitaria e irrespetando el derecho comunitario, *no* para la conservación de la vida humana y del planeta:

Muchas veces, por infantilismos y fundamentalismos, caemos en el otro extremo, el de satanizar cualquier progreso humano y pretender una humanidad, un país, pueblos ancestrales, que retornen al estado de naturaleza originario. Si antes se pensaba que lo único importante en la naturaleza era el ser humano, error más grave aún son esas posiciones extremistas en la que se considera al ser humano poco menos que un estorbo en la naturaleza. Para nuestra revolución, el ser humano no es lo único importante, pero sigue siendo lo más importante de nuestra Pachamama.

[...] ahora se habla mucho de conservación, pero escúchenme bien: no podemos tener conservación sostenida con los niveles de pobreza del país. Yo no le puedo decir a una familia sin ingreso, sin trabajo que viva junto a un bosque, que no tale el bosque [...] Para que la conservación sea fuerte, nuestra gente debe sentir beneficios claros y directos de esa conservación, por eso programas como socio bosque –un éxito completo–, totalmente costo efectivo, donde le pagamos a las comunidades para que mantengan el bosque en pie.

Hay peligros más claros derivados de la pobreza que perjudican al medio ambiente. El principal peligro para nuestra selva y bosque [...] primarios no es ni de lejos la explotación petrolera, como algunos quieren hacernos creer: es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, y no es posible a la gente que necesita trabajo decirle que ya no tenga ganado, que no cultive para así proteger la selva [...] Solo la verdad nos hará libres, basta de engaños.

Otra mentira: el principal peligro para el agua dulce del país no es ni de lejos la minería [...]: es la carencia de servicios básicos, fundamentalmente el inadecuado tratamiento de las aguas servidas de los asentamientos urbanos [...] y para remediar esto se necesita millones y centenares de dólares [...]

El país necesita de agua, pero también de diamantes, no como joyas inservibles sino para transformarlos en tractores, carreteras, colegios, hospitales para alcanzar el buen vivir, para servicios sanitarios, para procesar el agua servida, especialmente para nuestros pueblos ancestrales, la mayor víctima de la pobreza [...]

La minería moderna no perjudica el agua, es una falacia; por ejemplo, ya no utiliza químicos y recicla el agua; necesita mucha agua, capta el agua y la recicla. Además que nuestros contratos mineros establecen que se debe devolver el agua a su cauce natural en iguales o mejores condiciones [...]

²⁹ En una entrevista realizada en el marco del diagnóstico impulsado por la CONAIE sobre la situación de las mujeres de las nacionalidades indígenas en este año 2012.

Conclusiones

Para concluir, se puede decir que el discurso armado para el 10 de agosto se ha convertido en una acción política de apertura de las elecciones presidenciales del 2013, en donde el mejor escenario planteado desde Correa es la inexistencia de opositores de izquierda, borrarlos del escenario de disputa de sentidos, deslegitimarlos.

La contienda política en el período actual, amén de cómo quede el escenario electoral, está enmarcada dentro de un conflicto de propuestas. Una propuesta de transformación que se ha ido construyendo luego de la derrota del TLC en el 2006, que abrió un escenario para someter al neoliberalismo y cuyo núcleo duro fue y es el cuestionamiento profundo a la economía capitalista y al modelo de Estado autoritario que se debatió en la Constitución del 2008. Frente a una propuesta de modernización capitalista, hoy impulsada por “la revolución ciudadana”, o, como la bautizó Correa el 10 de agosto, de “socialismo del buen vivir”.

El país vuelve a moverse, estamos frente a un conflicto central; es el momento de la unidad programática de las izquierdas.

Los temas centrales son: modelo económico anti capitalista; edificación de la democracia desde la sociedad; construcción del Estado Plurinacional; cambio de las relaciones sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos con el resto de la nación, es decir la deconstrucción del Estado colonial.

R

“Alianza Correa”.

La evolución política de Alianza País

Rosa Lucero



La evolución política de Alianza País muestra que está constituido por varias “facciones” que buscan el apoyo de la figura con más popularidad electoral y legitimidad política, el Presidente Correa. Este factor le ha permitido al presidente acumular poder, y en ausencia de un contrapeso partidario organizado, ha causado la transformación de Alianza País, desde su pretensión de ser un vehículo al poder de los movimientos sociales a convertirse en un “partido correísta”.

1.

El ahora presidente “Rafael Correa (...) ha sustentado su campaña electoral y su gobierno en la premisa populista clásica de “quitarle el poder a los políticos para

devolvérselo al pueblo”.³⁰ (De la Torre, 2009: 85) Y “Debido a la necesidad de ganar elecciones, su política social, en lugar de basarse en criterios universalistas, sigue asentándose en el clientelismo y en la transferencia de recursos a los sectores más pobres. Al igual que otros populismos ha promovido la participación política. Pero, a su vez, su gobierno se ha sustentado en el carisma de un outsider poco interesado en crear un partido político.” (De la Torre, 2009: 85) Esto se nota en el fuerte tono anti-partido que tiene su discurso, él teme que Alianza País se convierta en un partido más, pero a la vez, se incrementa su poder personal y toma todas las decisiones importantes en sus manos³¹. Correa no solo es el jefe del Ejecutivo, es también la primera autoridad, tácita, de Alianza País, y es además su vocero, y la única voz autorizada para hablar del rumbo y las políticas del gobierno ecuatoriano³².

Correa ganó la primera elección en medio de una fuerte crisis del Sistema Político de Partidos, que se explica en parte “por el sistema político ecuatoriano que promovió el personalismo y la fragmentación partidistas³³. Los partidos funcionaron como maquinarias clientelares que representaban el poder de caciques y elites regionales.” (De la Torre, 2009: 86) Además ganó en medio de la crisis de los más importantes movimientos sociales ecuatorianos. “Las señales de crisis más frecuentemente mencionadas son el desprestigio y la división interna por la aventura política con Lucio Gutiérrez, la falta de participación indígena en las jornadas de abril de 2005 (...)” (Ospina, 2009 b, 124), que dejó a la CONAIE y al Movimiento Indígena desprestigiado y desmoralizado, y con los vínculos rotos con sus aliados urbanos.

En este contexto “(...) cabe destacar que la alta votación alcanzada por Rafael Correa (en las elecciones del 2006) en la primera vuelta no se tradujo en votos para dignidades locales de Alianza País. El voto fue por él no por su movimiento político que no presentó candidatos para el congreso.” (De la Torre, 2009: 87)

2.

Estas votaciones se hicieron tras haber fracasado los diálogos con la CONAIE para conformar una lista de unidad “Correa-Macas”, iniciativa que fracasó, no solo por el mal momento político y la crisis que atravesaba la CONAIE, sino porque el anti-partidismo de Correa lo hizo imposible. Identificada la CONAIE con el gobierno de Gutiérrez, debió temer el candidato Correa la contaminación que esta alianza podría acarrearle. Además la CONAIE no debió estar de acuerdo con la posición anti-partidista de Correa de no presentar listas de candidatos al Congreso Nacional, lugar donde principalmente la CONAIE y el MUPP-NP habían tenido sus mejores

³⁰Canovan, Margaret, *The People*, Polity Press, Cambridge, 2005, p1; Citado en De la Torre, 2009: 85

³¹ Al decir de Ospina, “El gobierno, mientras tanto, está pugnando por construir su propia estructura orgánica al calor del trabajo de gobierno y desde el Estado. Esa estructura en proceso de forja es todavía un enigma, pero cuenta con gran capacidad de convocatoria política.” (Ospina, 2009: 59)

³² Así se podría interpretar la orden que dio a sus ministros de no conceder entrevistas a la prensa privada (junio-julio de 2012), dejando al presidente dueño de la comunicación del gobierno en las cadenas sabatinas, donde se delinea la política del gobierno y se hacen los anuncios de las decisiones a tomar.

³³Pachano, Simón, *La Trama de Penélope. Procesos Políticos e Instituciones en el Ecuador*, FLACSO, Quito, 2007; Citado en De la Torre, 2009: 86

éxitos. Posición que además dejaba a la CONAIE y al MUPP en la condición de comparsas y acompañantes de Correa en el recorrido de la campaña electoral.

Después de los resultados de esa votación se acentuó la convicción de Correa en su arrastre electoral y debió felicitarse por las decisiones tomadas de separarse de los movimientos sociales, que lo habrían “obligado con agendas políticas y reivindicaciones movimientistas” que se venían trabajando desde la Constituyente de 1998, por lo menos. También aquí tuvo que nacer la convicción de las otras figuras de PAIS de prescindir del apoyo del Movimiento Indígena representado por la CONAIE³⁴.

Así, la estrategia de Correa en la primera vuelta fue neo-populista, arremetió contra los partidos políticos, y presentó la campaña como una lucha la partidocracia y la ética y la “ciudadanía encarnada en su persona. Para dar coherencia a su propuesta anti-partidos rehusó presentar candidatos al Congreso”. (De la Torre, 2009: 92) “(...) los políticos eran vistos (por los ecuatorianos) como responsables de la corrupción, la pobreza y el trabajo indigno en condiciones de precariedad laboral. La campaña de Correa dio forma y sentido a este rechazo y presentó la Asamblea Constituyente como la alternativa a la partidocracia y la panacea que resolvería los problemas políticos, sociales y económicos de la nación.” (De la Torre, 2009: 92)

Al decir de De la Torre, “Si bien suavizó su retórica neopopulista en contra de la partidocracia no dejó de manifestar su ambivalencia ante las instituciones de la democracia liberal y su fe en la democracia entendida como actos plebiscitarios y manifestaciones en las calles.”³⁵ (De la Torre, 2009: 93) Descalificó la competencia del organismo electoral y llamó a vigilar la votación. “Esta descalificación de las instituciones del estado ilustra su actitud ante las normas e instituciones del estado de derecho. Esto es aceptar los procedimientos y las normas que le convengan y cuestionar las que no le favorezcan apoyándose de la presencia del pueblo en las calles, en los mítines y en las marchas a su favor.” (De la Torre, 2009: 93)

3.

Es decir su desconfianza institucional no se limita a los partidos políticos, sino que se extiende al sistema político de partidos, del cual el Tribunal Electoral hacía parte. Esta desconfianza le ayudó a capitalizar el desprestigio de los políticos y los partidos a su favor, y también rebelaría, a mi entender, su propósito de, “(...) formular, enmendar y descartar las constituciones con los cambio de gobierno se hacía parte integral de la cultura política hispanoamericana , igual que ciertas premisas y preceptos que, con sus variaciones regionales y nacionales, formarían un legado de instituciones y prácticas políticas que perdurarían hasta los inicios de la década del 2000.” (Loveman, 2003:293)

³⁴ “(...) varios líderes de Alianza País y personalidades del gobierno han manifestado (...) que los movimientos sociales están en crisis y que su agenda ha sido corporatizada sus liderazgos no tiene representatividad. Ya que el presidente ha ganado varias elecciones con mayorías absolutas y de que goza de niveles altos de popularidad no necesita de los liderazgos de los movimientos sociales.” (De la Torre, 2009: 99)

³⁵ Cosa curiosa, tomando en cuenta que en el 2011-2012 se discute fuertemente sobre su iniciativa de criminalización de la protesta social.

Desconfianza revelada también en la disolución del Congreso nacional y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, en la cual Alianza País tuvo la absoluta mayoría, y construyó una Carta Constitucional que otorga amplios poderes al Ejecutivo, y escenificó, una vez más, su alejamiento de los movimientos sociales, a quienes considera representantes de intereses corporativos³⁶.

“La política ecuatoriana se ha basado en la construcción de los adversarios políticos como enemigos irreconciliables y en la política como una lucha maniquea entre opciones éticas. (...) “los enemigos se caracterizan por una serie de rasgos que los marcan como la encarnación del mal y de la inmoralidad y por lo tanto como un riesgo continuo.”³⁷” (De la Torre, 2009: 94)

En suma, los movimientos sociales se convirtieron en enemigos del gobierno de Correa, enemigos que se debe alejar del régimen y quitarles toda influencia, pues “(...) un Estado con legitimidad democrática, tal como lo entiende el presidente de la República, es una serie de instituciones liberadas de la influencia y la presencia de intereses particulares.” (Ospina, 2009:62) Y, como quedo anotado, Correa entiende que los movimientos sociales tienen “intereses particulares”. Para él, “la legitimidad proviene exclusivamente del voto y una vez que se lo recibe, se abandonan las ataduras con sectores sociales específicos y se representa a “la Nación”. No hay duda: su concepción política del Estado es plena y clásicamente liberal.” (Ospina, 2009:63)

El desencuentro entre gobierno y movimientos sociales organizados está dado, “Aunque ambos se necesitan, el gobierno ciudadano es el que menos entendimiento tiene de su necesidad. Un proceso político de cambios profundos, como quiere ser el ecuatoriano, para ser duradero, tendría que disponer de redes organizativas lo suficientemente fuertes para vencer las resistencias que genera.” (Ospina, 2009:64)

En todo caso, parece ser que el gobierno de Correa medra entre la debilidad de los partidos políticos ecuatorianos y la crisis de los movimientos sociales organizados; cuenta con una oposición dispersa, producto de la crisis de los partidos políticos, y con un movimiento indígena que “(...) sufrió el peso del desprestigio interno y externo. Como resultado el movimiento indígena dejó de estar en el centro del proceso político ecuatoriano.” (Ospina, 2009 b: 142)

4.

“Para entender el gobierno de Correa hay que partir de la constatación de que está embarcado en una “campaña permanente”. Esta categoría ha sido utilizada por periodistas y analistas de los medios para describir situaciones en los cuales los artes de hacer campaña y de gobernar han perdido su especificidad. Las campañas

³⁶ “(...) en opinión de varios estrategas e ideólogos de Acuerdo País, en el movimiento indígena, así como prácticamente en todas las organizaciones populares y sindicales, predomina una visión particularista y “corporativa” de la política y el Estado. De ahí su insistencia en apelar al discurso ciudadano.” (Ospina, 2009: 63)

³⁷ Edelman, Murray, *Constructing the Political Spectacle*, The University of Chicago Press, Chicago, 1988, p. 67; Citado en De la Torre, 2009: 94

electorales se basan en el “lenguaje de la guerra³⁸ -los oponentes deben ser destruidos-. Los gobiernos usan el lenguaje de la negociación -los adversarios de hoy pueden ser los aliados del futuro³⁹”. (De la Torre, 2009: 95)

Y el lenguaje de la guerra del gobierno “cambió (de objetivo) sus ataques, y ahí vino el conflicto. Dejó de combatir a la banca, por ejemplo, dejó de acometer a los poderes imperiales y pasó a impugnar a los maestros, a los trabajadores y a los pueblos indios. ¿Cómo entender que un Gobierno que se declara socialista del siglo XXI, esté enfrentando a las fuerzas fundamentales que deberían soportar un proyecto de transformaciones sociales? ¿Cómo?” (Moreano, 2011:170)

Si en campaña Correa llamaba a la movilización de las masas para defender sus conquistas, en el gobierno prohíbe esta movilización y la considera indeseable, así, el presidente Correa dijo que “el enemigo de su Gobierno ya no era la derecha que, en sus palabras, estaba debilitada, casi liquidada;” (...) declaró que el peligro viene⁴⁰ “De nosotros mismos -insistió- de nuestras contradicciones internas”. El peligro central es “el ecologismo infantil, el indigenismo infantil, el izquierdismo infantil”. Cabe señalar que los pueblos indios, los maestros, los trabajadores siempre fueron excluidos del Gobierno, siempre fueron primero adversarios y ahora enemigos. La expresión “De nosotros mismos, de nuestras contradicciones internas” era para consumo interno.” (Moreano, 2011:171)

En esta línea Correa “Estaba diciendo que esa es la dinámica política central; que, para que su gobierno siga su curso y pueda aplicar su política, es necesario derrotar al indigenismo, al ecologismo y a la izquierda calificados de infantiles... Creo que en esa visión se expresa claramente la definición social actual del gobierno.” (Moreano, 2011:171)

Puedo entonces decir que el desencuentro entre el gobierno de Correa y los movimientos sociales tiene como poco carácter de duradero, sino de definitivo. También puedo arriesgar aseverando que el tratamiento que el gobierno va a dar a los sectores populares y las organizaciones sociales lo va a llevar por dos caminos, la cooptación, y el asistencialismo; que son dos formas de relación del populismo con la sociedad.

Esto, a decir de Moreano, porque el gobierno en su gestión ha ido abandonando tanto el nacionalismo desarrollista, a favor de una política minera que es la principal carta de la política gubernamental a favor de las grandes corporaciones transnacionales, sin mantener ni el desarrollismo, que una vez conseguidas las reformas básicas no ha buscado un proyecto de desarrollo agroindustrial, sustitución de importaciones e integración sudamericana en un mercado común. “(L)a fase desarrollista caducó hace unos dos años” (Moreano, 2011: 173), además que “la explotación minera es uno de los dos grandes problemas que oponen a los pueblos indios y campesinos con el gobierno de Correa.”

³⁸ A propósito de esto Moreano hace notar que lo lenguaraz de Correa “en un país de gran tradición de insultadores como Montalvo, esa actitud de Correa, mantenía la polarización social, agitaba a la sociedad, y tenía aciertos interesantes. El ataque a la prensa, a los banqueros, a los pelucones en general, era un elemento al cual la sociedad adhería por completo.” (Moreano, 2011: 169)

³⁹ Ornstein, Norman J. y Mann, Thomas E., “Conclusion: The Permanent Campaign and the Future of American Democracy”, en Blumenthal, Sydney, ed., *The Permanent Campaign*, Simon and Schuster, New York, 1982, p. 225; Citado en De la Torre, 2009: 95

⁴⁰ En entrevista en Venezuela con Telesur, Citado por Moreano, 2011:171

(Moreano, 2011:175) A más que “la riqueza de las empresas mineras, sean chinas o canadienses, no se acumularía en nuestro país, (...) y provocaría (...) la ruptura de la unidad interna del organismo (económico ecuatoriano) que queda al arbitrio de los feroces huracanes del mercado mundial.” (Moreano, 2011: 175)

Es decir que la integración social no se lograría tampoco por la construcción de un dinámico mercado interno de consumo, lo que anuncia volver a los vicios de las economías extractivistas, enriquecimiento del sector social relacionado con la explotación, y pobreza para el resto de la población: “masiva concentración de rentas en grupos oligopólicos. Estos sectores y amplios sectores empresariales contagiados por el rentismo no encuentran alicientes (tampoco los crean) para sus inversiones en la economía doméstica”. (Acosta, 2009:28) Lo que implica, que en el mejor de los casos, el Estado contará con los impuestos que logre cobrar a las compañías extractoras para redistribuirlos, incrementando el gasto corriente, que hasta hoy ha significado incrementar el tamaño del estado, y el pago de sueldos a los nuevos funcionarios, y la construcción de infraestructura.

Lo que por otro lado implicará el tratamiento clientelar a las capas empobrecidas de la población, que verán en el estado la única fuente de recursos, lo que reforzará las ya fuertes tendencias al tratamiento populista de la política social del gobierno correísta. A decir de Moreano, “Siempre he considerado que la categoría “populismo” era ambigua y confusa. Empero, es la que mejor le calza al actual Gobierno: minería, dólares, bonos clientelares, aumento de las importaciones⁴¹, ruina de todo proyecto nacional y latinoamericano.” (Moreano, 2011:176)

5.

Además, todo esto se ha hecho desde la iniciativa del presidente Correa, pues en este proceso se va dejando de lado “(...) no solo la participación orgánica de la ciudadanía, incluso dentro del propio movimiento PAIS cuyas posibilidades de evolucionar hacia un partido han sido dinamitadas por el propio Presidente (...)” (Vega, 2011:182) ya hice notar la negativa del presidente Correa a formar un partido organizado, o permitir que PAIS se convierta en uno, por su desconfianza a los partidos políticos; y porque “Entre el carisma omnipotente y omnipresente del líder caudillo y la propuesta constitucional a favor de los principios y las instituciones, se elige lo primero.” (Vega, 2011:182) Es decir, prima la voluntad del presidente por encima de las ventajas institucionales de tener un partido organizado, con estructura y mandos internos, y mecanismos de discusión y diálogo, y comités disciplinarios, con procesos internos de resolución de diferencias y conflictos. Hasta ahora se ha visto la decisión del mandatario impuesta en PAIS, él ha decidido quién se queda y quien se va del “movimiento”, sin apelar a procedimientos de resolución de diferencias o de formación de tesis de grupos de minoría al interior de PAIS.

⁴¹ Esto podría parecer contradictorio en julio de 2012 cuando el gobierno ha restringido las importaciones de celulares, y electrodomésticos y artículos manufacturados de lujo, pero habría que considerar que esta medida solo se tomó por la caída del precio del petróleo, en casi 40 dólares, por la crisis europea. Lo que quiere decir que a menos ingresos por las exportaciones se hacen menos compras por importaciones, y lógicamente, viceversa.

En otras palabras, él manda dentro del movimiento PAIS, como manda en el gobierno ecuatoriano, es decir todo el poder de decisión y designación en sus manos, sin posibilidad de disensión, ni respeto a las posiciones minoritarias al interior. Esto se vio muy claro en la exclusión al presidente de la Asamblea Constituyente, una separación sin discusión interna ni derecho a la defensa.

‘Es decir el Presidente Correa actúa sin escuchar a los movimientos sociales, tampoco escucha a una organización política partidaria, más bien y “(...) desde la campaña electoral este gobierno ha usado los sondeos de opinión pública y grupos focales para constantemente medir su popularidad y actuar de acuerdo a los temas que ayudan a subir en las encuestas⁴².” (De la Torre, 2009: 95) razón por la cual, su secretario de comunicación, Alvarado, tiene mucha más influencia que todos los movimientos y sindicatos. Es decir este gobierno actúa “(...) sin un partido político del gobierno y bajo el liderazgo carismático del presidente Correa.” (De la Torre, 2009: 100)

Esto se debe entender en la “(...) necesidad de ganar elecciones para acumular hegemonía, (...) los actos de gobierno deben entenderse desde esta lógica. Siguiendo con las tradiciones populistas de la política ecuatoriana Correa se embarcó en una lucha en contra de los partidos políticos tradicionales: la partidocracia. Luego apuntó a los medios de comunicación y a la élite de Guayaquil. Su retórica ha sido exitosa y le ha funcionado para ganar elecciones.” (De la Torre, 2009: 96) Pero al mismo tiempo, ha dejado de lado importantes aspectos del “(...) programa de gobierno de Alianza País (...) (como) construir “una democracia activa, radical y deliberativa” (...) que propiciará “un modelo participativo a través del cual todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el poder, formar parte de las decisiones públicas y controlar las actuaciones de sus representantes políticos”.⁴³” (De la Torre, 2009: 96) Lo que, es evidente, no se ha cumplido hasta la fecha.

6.

Así, aunque “Correa ha propuesto la construcción de ciudadanías como alternativa al clientelismo en que se asentaba el sistema de partidos. La búsqueda de elecciones sin la mediación de partidos, los llamados a la creación de espacios deliberativos y de planificación democrática se basan en este proyecto de revitalizar al ciudadano.” (De la Torre, 2009: 103) “(...) el problema es que en ausencia de instituciones sólidas, estos llamados a la ciudadanización puedan transformarse en la creación de mecanismos de apoyo incondicional al líder.” (De la Torre, 2009: 104), pues “(...) en el populismo no existe un campo reconocido para expresar la disensión pues está basado en “la unión y la identidad total entre un representante y aquellos que buscan ser representados⁴⁴”. Quienes no son parte de los seguidores que aclaman al líder pueden ser silenciados, no tomados en cuenta y pueden ser

⁴²Estos puntos son desarrollados con mayor profundidad en Catherine Conaghan y Carlos de la Torre, “The permanent Campaign of Rafael Correa: Communications and politics in Ecuador”, Press and Politics, (en prensa); Citado en De la Torre, 2009: 95

⁴³Plan de Gobierno de Alianza País, 2007-2011, p.19, Citado en De la Torre, 2009: 96

⁴⁴Plotke, David, “Representationis Democracy”, Constellations, vol. 4(1), 1997, p. 28; Citado en De la Torre, 2009: 104

reprimidos pues en el populismo un caudillo se asume como la encarnación de la voluntad popular vista “como un dato moral y homogéneo⁴⁵”.

Al final se debe decir que no solo los movimientos sociales que vieron en el gobierno de Correa la posibilidad que sea una vía para llegar al poder, o al menos un canal abierto para receptar sus propuestas, han sido alejados del gobierno y han sido colocados en el campo enemigo, sino que al interior del gobierno se ha boicoteado conscientemente la organización partidaria de los militantes del movimiento PAIS, dejando como único referente y único actor político legitimado al Presidente Correa, quien acumuló en sus manos todo el poder del gobierno, y es, de hecho, el referente máximo de su gobierno, sin ningún tipo de sombra, o paralelo político, ni dentro del gobierno ni en los círculos políticos cercanos a él: Alianza PAIS, y las facciones que se agrupan alrededor del gobierno de Correa

Bibliografía

Acosta, Alberto, *La Maldición de la Abundancia*, Ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2009

De La Torre, Carlos, *Rafael Correa: Entre el populismo y la revolución ciudadana*, en Santander Joo, Carlos Ugo, “*Los Desafíos de la Democracias y Elecciones en América Latina*”, Ara Editores, Lima-Perú, 2009

Loveman, Brian, *El Constitucionalismo Andino, 1808-1880*, en “*Historia de América Andina*, vol. 5 Creación de las Repúblicas y Formación de la Nación”, Maiguashca, Juan, Editor, Editorial Libresa, Quito-Ecuador, 2003

Moreano, Alejandro, *¿Esperanza o Pesimismo?*, en “*Cuatro Años de Revolución Ciudadana, Entre la Propuesta y la Realidad*”, editorial Universidad Central del Ecuador, Quito, 2011

Ospina Peralta, Pablo (b), “*Nos vino un huracán político*”: *La crisis de la CONAIE*, en Ospina Peralta, Pablo y otros Editores, “*Los andes en movimiento, identidad y poder en el nuevo paisaje político. ...*”, Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2009

Ospina Peralta, Pablo, *Ecuador en la encrucijada: entre movimiento, liderazgo y revolución ciudadana*, en Coscione, Marco, “*América Latina desde Abajo, experiencias de luchas cotidianas...*”, Editorial Abya-Yala, Quito-Ecuador, 2009

Vega, Fernando, *Avances, Retrocesos y Perspectivas en el Proceso de Cambio*, en “*Cuatro Años de Revolución Ciudadana, Entre la Propuesta y la Realidad*”, editorial Universidad Central del Ecuador, Quito, 2011

R

⁴⁵Urbinati, Nadia, “*Democracy and Populism*”, *Constellations*, vol. 5(1), 1998, p. 110-125; Citado en De la Torre, 2009: 104

Criminalización y buen vivir

El tratamiento a la conflictividad social en la era de la “revolución ciudadana”

(Con una cronología de enero de 2010 a abril de 2012)

Mario Unda



1. Una introducción necesaria

Un debate ¿sorpresivo?

En marzo de 2012, el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar dio a conocer el *Informe sobre Derechos Humanos. Ecuador 2011*⁴⁶. En mayo, el gobierno desató la tormenta. Se sucedieron cadenas de la Secretaría de Comunicación (Secom) y enlaces sabatinos de Rafael Correa, a más de pronunciamientos de otros altos funcionarios. En las cadenas de la

⁴⁶ Programa Andino de Derechos Humanos (compilador). *Informe sobre derechos humanos. Ecuador 2011*. Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador, Quito, 2012 (<http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/Actividadespadh/Informedhvimpresso.pdf>).

Secom se aseguraba que los planteamientos del informe “no tienen ninguna base investigativa”, que “no son más que una recopilación de un boletín de prensa de la Conaie, de unas cuantas páginas de un sindicalista petrolero despedido por sus abusos” (“abusos”, que, por cierto, no se explican), “de un periodista informante de la embajada norteamericana que defiende la empresa como medio de comunicación”, “y de un informe del ex defensor del pueblo, que se refiere a temas particulares”. “Una nueva vergüenza para la universidad ecuatoriana”, concluía⁴⁷.

Por su parte, la prensa gubernamental presentó así a los coautores del libro en la edición del sábado 12 de mayo: “DD.HH. vistos por actores políticos”, decía un titular. El subtítulo ponía: “Un ex dirigente de un partido político de centro-derecha, un ex sindicalista de la estatal Petroecuador y un miembro de Acción Ecológica, ONG que fuera suspendida temporalmente en 2009, son coautores de informe sobre Derechos Humanos en el país”; luego especificaba: “Entre los académicos que participaron en la elaboración están un ex miembro de la Democracia Popular, (hoy de Pachakutik) y profesor universitario, Julio César Trujillo; un ex dirigente sindical de Petroecuador, que fue despedido, Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010. Otro coautor es Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica, que en 2009 fue suspendida, de la cual es parte Alberto Acosta, opositor al régimen”⁴⁸.

El mismo sábado 12, en su “enlace ciudadano”, Correa afirmó: “Lo que dice ese informe y la fuente en la que se basa... ¡qué vergüenza!”, y, fiel a su estilo, añadió: “Senescyt [refiriéndose a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación]: ¡tome cartas en el asunto! No podemos tener estos fraudes académicos”⁴⁹. El sábado 19 aún va a insistir: “compilación de pasquines sin ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al Gobierno”⁵⁰. En seguida dirigió sus dardos sobre el rector de la universidad: “Señor rector Ayala Mora, usted puede decir que esto no es en contra del gobierno pero ni usted mismo se lo cree, esto es una conspiración de pasquines sin ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al gobierno. [...] Que esto lo auspicie una universidad es una verdadera vergüenza, esto es deshonestidad académica, esto es un fraude académico. Incluso voy a revisar si nos podemos quejar con la Comunidad Andina porque la Universidad Andina Simón Bolívar es una universidad de la Comunidad Andina y no podemos tener una universidad que se dedique a hacer politiquería barata en vez de hacer academia”⁵¹.

El motivo de tanta ira fue la referencia en el *Informe a la criminalización de la protesta social*. La tesis correísta es que no puede hablarse de criminalización porque “en Ecuador se persiguen delitos, no personas”, como tituló una nota de *El*

⁴⁷<http://www.youtube.com/watch?v=ITIVNTIPIow> (publicado el 14 de mayo).

⁴⁸http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39126&Itemid=2. Y el domingo 13 de mayo insistía, casi repitiéndose: “Entre los académicos que participaron están un ex miembro de la Democracia Popular, Julio César Trujillo; el ex dirigente sindical Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010; Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica y el opositor Alberto Acosta” http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39203&Itemid=2.

⁴⁹http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32495:presidente-critica-informe-sobre-dd-hh-de-universidad-andina-video&catid=40:actualidad&Itemid=63

⁵⁰<http://www.ecuadorenvivo.com/2012051991822/politica/correa-informe-sobre-ddhh-de-universidad-andina-es-una-compilacion-de-pasquines.html>

⁵¹http://www.elcomercio.com/sociedad/Resumen-Tabacundo-Enlace-Presidente-Rafael_0_703129724.html.

*ciudadano*⁵² reseñando un discurso de Correa el 31 de marzo. “En Ecuador no hay acusaciones (contra dirigentes indígenas), no hay juicios, no hay nada [...]”, dijo Correa y, de acuerdo a la reseña, “precisó que de los 42 casos receptados en los órganos de justicia, 38 permanecen en investigación. El Mandatario precisó que solo hay cuatro casos judicializados: dos por parte de instituciones privadas, donde el gobierno no tiene nada que ver; y dos casos por parte del Estado, que están en etapa de juicio. «Uno ya lo perdió el Gobierno contra un dirigente indígena que cerró las carreteras cortando árboles», agregó. El otro juicio que lleva adelante el Estado es por el asesinato del dirigente indígena Bosco Wisuma, ocurrida en septiembre de 2009. «¿Ustedes creen que un asesinato es protesta social?», se preguntó [Correa]; y respondió: «En un Estado de derecho, un asesinato no puede dejarse de judicializar»”. El 26 de mayo volvió a insistir en el mismo tema⁵³.

Mucho habría que discutir sobre esta argumentación, pero, por ahora, señalemos solamente que, si la hemos entendido bien, la posición oficial sostiene que no existe *criminalización de la protesta*, sino *persecución de delitos*. Sin embargo, aunque parezca fuerte y contundente, esa es una aproximación formal, apenas superficial. Porque ocurre que los “delitos” no son entidades abstractas, construidas fuera de la historia, que hayan aparecido de la nada ni que estén allí desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién y por qué define qué conducta es un delito, cómo vigilarla y cómo por qué castigarla? Todo esto queda en las sombras. Pero también otro presupuesto de la versión oficial se queda en las sombras, y presenta como única prueba su propia enunciación: el presupuesto de que por *criminalización* hay que entender *exclusivamente* lo que el gobierno dice que es. Así que la pregunta resulta obvia: ¿acaso esa, la versión oficial, es la única manera de entender la criminalización, o por lo menos la más ajustada a los procesos en marcha? En diciembre de 2011, al término del período de Fernando Gutiérrez –un reconocido defensor de los derechos humanos–, la Defensoría del Pueblo dio a conocer un informe que muestra una perspectiva bastante distinta⁵⁴. El documento no tuvo la circulación que merecía, y el nuevo defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, procuró ponerlo rápidamente a un costado, afirmando que “hay conclusiones que ciertamente son fuertes en tanto se plasma en un momento en donde tenemos que fomentar el diálogo y no ayuda a fomentar el diálogo ciertas afirmaciones que hace el informe”⁵⁵.

El informe de la Defensoría del Pueblo (y algunos comentarios)

Como el gobierno ha dicho que el informe de la Defensoría del Pueblo se refería a hechos particulares [¿?], conviene revisar lo que este informe en realidad dice al respecto. Desde la perspectiva del documento, la *criminalización* engloba (p. 5) un conjunto de acciones desplegadas por “actores estatales y otros” encaminadas a

⁵²http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-persiguen-delitos-no-personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63

⁵³http://www.nodo50.org/opcion/02/la_sabatina_del_26_de_mayo.php

⁵⁴ Ver: Defensoría del Pueblo: *Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un Estado constitucional de derechos*, DPE, Quito, 2012. Puede consultarse en la página de la Defensoría: http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=82&view=viewcategory&catid=14; también las de Inredh: http://www.inredh.org/archivos/pdf/escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf y Cedhu: http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=116:informe-de-criminalizacion-a-defensores-y-defensoras-de-ddhh-y-de-la-naturaleza&catid=30:criminalizacion-de-la-protesta-social&Itemid=7.

⁵⁵http://www.ecuadorenvivo.com/2011122283662/politica/informe_sobre_criminalizacion_de_la_protesta_social_sera_revisado_dice_defensor_del_pueblo.html

“la deslegitimación y sanción de ciertas conductas” que, añadimos nosotros, son cultural y socialmente propias de las expresiones de protesta social. De acuerdo con esto, son igualmente mecanismos de criminalización el discurso deslegitimador (p. 22 y ss.), las normas administrativas de control (pp. 14 y ss.), las reformas legales de “tipificación de conductas” y “aumento de penas” (pp. 20 y ss.), la represión policial y militar (pp. 42 y ss.) y los procesos judiciales (pp. 30 y ss.). Vale decir: atender al *proceso* en su conjunto y no únicamente a los *sucesos* (tal o cual discurso, tal o cual norma, tal o cual reforma legal, tal o cual acción represiva, tal o cual enjuiciamiento).

El discurso deslegitimador no es un componente puramente retórico; en cierto sentido resulta ser el punto de partida de la criminalización. El discurso establece (por ejemplo en los “enlaces ciudadanos” de cada sábado), de manera estereotipada, el campo de los enemigos del poder y, por lo tanto, de la sociedad. Señala al odio público los “enemigos” de “los cambios”, de “los avances”, del “desarrollo”, de “nuestra revolución”, etc. De esta manera, aquellos sectores y organizaciones que reciben el anatema oficial⁵⁶, son excluidos de la legitimidad reconocida, vista como única y universal; el efecto es que se lanza sobre ellos el desprecio y la animadversión social, legitimando, por lo tanto, toda acción represiva, sea esta pasada, presente o futura. Hay sobrados ejemplos.

Las normas administrativas se generan para colocar las organizaciones y la acción social bajo la supervisión, el control y la pesquisa del Estado. Recuérdesse, a título de ejemplo, el reglamento de las “organizaciones de la sociedad civil” presentado por la Secretaría de Pueblos en diciembre de 2010: allí se ponía la existencia misma de las organizaciones bajo la decisión personal de presidente de la república. Pero en este mismo rubro debería incluirse la reinterpretación correísta sobre la participación, rebajada a consulta, y la consulta reducida a “socialización” de la política gubernamental⁵⁷.

Las reformas legales que tipifican y penalizan conductas de protesta social (o el recurso a legislación anterior en el mismo sentido) son, de un modo más directo aún, instrumento de criminalización, pues es el acto en que, desde el gobierno, se impulsa la identificación de acciones que histórica y culturalmente se han desarrollado como parte de la movilización social con delitos graves, como el terrorismo y el sabotaje o el atentado contra la seguridad del Estado, y se les fija una muy dura punición. Pero en este punto es ineludible aludir al origen anticomunista de esta concepción. En efecto, la presencia de las figuras de terrorismo y sabotaje en el código penal está ligada a la “ley de seguridad nacional”, vinculada a su vez a las

⁵⁶<http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm>: “**anatema**. (Del lat. *anathēma*, y este del gr. ἀνάθημα). 1. amb. **excomunió**n (lacció)n y efecto de excomulgar). 2. amb. Maldició)n, imprecació)n. 3. amb. En el Antiguo Testamento, condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldició)n atribuida a Dios. 4. m. Persona o cosa anatematizada”. ()

⁵⁷Correa lo ha expresado en varias ocasiones, por ejemplo, en el “enlace ciudadano” del sábado 28 de abril de 2012. Así lo reseña la agencia oficial *Andes*: “La consulta previa, mandato constitucional para los proyectos de desarrollo nacional, somete a las poblaciones de las zonas de influencia a procesos de socialización y busca promover acuerdos con esas comunidades, pero sus resultados «no son vinculantes», dijo Rafael Correa, presidente del Ecuador, desde el cantón amazónico Cascales, donde desarrolló el enlace ciudadano 269. «La consulta previa no es consulta popular», explicó el presidente, «es buscar consensos, es socializar». «Las ong buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante, eso significa que para dar cualquier paso vamos a tener que pedir permiso a la comunidad, eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías sino de la unanimidad, sería imposible gobernar así». El artículo 398 de la constitución ecuatoriana dicta que “toda decisión deberá ser consultada a la comunidad, el sujeto consultante será el Estado, (...) el Estado valorará la opinión de la comunidad (...) si el referido proceso de consulta resulta en una oposición, la decisión de ejecutar el proyecto será adoptada por la instancia administrativa superior, de acuerdo con la ley” (<http://andes.info.ec/pol%C3%ADtica/1928.html>).

dictaduras genocidas y cuasifascistas de las décadas de 1960 y 1970 impulsadas por el Departamento de Estado Norteamericano y por la CIA. ¿Un gobierno “progresista” recurriendo a una legislación reaccionaria?

La represión policial y militar es ya el ejercicio de la represión directa sobre las acciones de protesta e inconformidad. El régimen actual ha utilizado, en varias ocasiones, una represión desmedida, que no tenía relación con las protestas ni con la cantidad de manifestantes (por ejemplo, en Las Naves, en Río Grande, etc.).

Habría que añadir aquí, a nuestro modo de ver, aquellas acciones de ejercicio estatal de espionaje (por ejemplo, en marzo de 2012, durante la marcha por la vida, denunciadas en su momento por la dirigencia indígena⁵⁸; o en octubre de 2011, vinculadas a las “renuncias obligatorias” de miles de trabajadores públicos⁵⁹). En ambos casos, el espionaje, y el anuncio de su utilización, han llegado acompañados de claros discursos de deslegitimación (la marcha indígena fue presentada como “desestabilizadora”, los trabajadores despedidos, como “corruptos” y “vagos”, etc.⁶⁰). El espionaje como herramienta de control no es, obviamente algo nuevo, pero sí corresponde a este gobierno la jactancia pública de utilizarlo.

Finalmente, la judicialización, las acusaciones formales, el inicio de indagaciones fiscales, causas penales y juicios resulta la consecuencia lógica de una política represiva como la señalada. Implica, finalmente, que el conjunto del aparato estatal es puesto al servicio de la criminalización de la protesta: la Asamblea, por la aprobación de leyes; el Ejecutivo, con el ejercicio de la represión militar, policial y simbólica; el sistema judicial, asegurando el envío de los rebeldes a la cárcel.

La conclusión a la que llega el informe de la Defensoría del Pueblo no se presta a interpretaciones: *“La Defensoría del Pueblo, a través de esta investigación, ha determinado la existencia de una política de criminalización que surge desde diferentes actores, tanto estatales como privados, frente a las omisiones del primero”*⁶¹.

2. La cronología

Anotación metodológica

La cronología que se presenta a continuación recoge los hechos de criminalización de la protesta social, entendida como ha quedado señalado más arriba, en el período que va de enero de 2010 a abril de 2012. Ha sido realizada tomando como base el seguimiento de la conflictividad social que mantiene el Observatorio Social de América Latina (OSAL). Es necesario tomar en cuenta que no se trata de un recuento exhaustivo, por el mismo carácter de la fuente utilizada: los periódicos de mayor circulación nacional. Por una parte, como se sabe, los periódicos no son meros intermediarios

⁵⁸ Reportes periodísticos, remitiéndose a documentos oficiales, muestran que la Unidad de Gestión de Seguridad Interna, adscrita a la presidencia de la República realizó “actividades de inteligencia relacionadas con la movilización” (ver: <http://www.elperiodicodeecuador.com/?p=14972>; <http://www.eluniverso.com/2012/05/15/1/1355/operativos-inteligencia-grupos-politicos.html>).

⁵⁹ Correa, durante uno de sus “enlaces ciudadanos”, reveló complacido que la oleada de despidos fue “fruto de meses de investigación”, que le permitieron al gobierno comprobar la presencia de empleados “que no querían trabajar las horas completas, que marcaban tarjeta y se iban a trabajar en otro lado, que trataban mal a los pacientes” (<http://www.eluniverso.com/2011/11/02/1/1355/inteligencia-policial-infiltracion-hospitales-definir-despidos.html>).

⁶⁰ <http://www.eluniverso.com/2011/11/02/1/1355/inteligencia-policial-infiltracion-hospitales-definir-despidos.html>, cit. Los despidos, según Doris Solíz, se habrían producido porque los trabajadores estaban ya en edad de jubilarse, por “actitudes de corrupción o por negligencia e ineficiencia, lo cual perjudicaba al sector” (íbid.); ver también: http://www.elcomercio.com/negocios/debate-despidos-enciende-Corte-silencio_0_583741784.html. En febrero de 2012, antes de iniciarse la marcha, Correa afirmó que “Tratan de desestabilizar al Gobierno. Es su última oportunidad, se les pasa esta vez y ya nadie nos para en las elecciones del próximo año” (ver: <http://www.safiq.org/noticias/5745-indigenas-de-ecuador-convocan-a-marcha-de-protesta-contra-correa-el-8-marzo.html>).

⁶¹ Defensoría del Pueblo, ob. cit., p. 53.

de información, sino actores ellos mismos, de modo que hay que contar siempre con ese sesgo; no se puede evitar recurrir a ellos, pues son los que traen mayor volumen de noticias sobre conflictos, pero se ha procurado minimizar el riesgo recurriendo a otras fuentes (en este caso, la prensa oficial) y procesando la presentación de los hechos (es decir, buscando eludir en lo posible la transcripción textual de la noticia). Por otra parte, hay muchos sucesos, o momentos de un proceso, que no “saltan” a la prensa; de este modo, la conflictividad real resulta subvalorada. De manera que la cronología tiene necesariamente un carácter aproximativo, pero indicativo⁶².



Cronología mayo 2010-mayo 2012

2010

Mayo

Martes 4

Las principales organizaciones indígenas y campesinas realizan una manifestación en Quito y rodean el palacio legislativo, donde se inicia el segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos. Estudiantes del Colegio Mejía apoyan las acciones del movimiento indígena. Por su lado, el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, suspende el debate para neutralizar la presión de los grupos indígenas y decide desalojar a los manifestantes. “A la fuerza no podemos debatir, ni tampoco sintiéndonos secuestrados”, dice Cordero. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Santi, ordena a las bases permanecer en vigilia en las afueras de la Asamblea. En el mismo contexto, miembros de las Juntas de Agua de Azuay, cierran las vías que unen a Cuenca con Loja y el Oro. La dirigente Inés Guartambel afirma que la protesta busca frenar la

⁶² La cronología se realizó a partir de la información aparecida en la prensa. Se tomaron como referencia los periódicos El Comercio y El Universo, excepto en donde se indica lo contrario. Fue realizada por Mario Unda, Hugo González y Santiago González. Puede consultarse en <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=>. Sobre esa base se ha realizado la cronología que se presenta a continuación, tomando en cuenta los hechos que se refieren a la criminalización de la protesta social.

aprobación de la Ley de Aguas⁶³. El gobernador de esa provincia ordena a la policía la habilitación del paso bloqueado; los campesinos se niegan a retirarse y la policía utiliza gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. Esto desencadena enfrentamientos que dejan diez detenidos entre ellos el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), Carlos Pérez Guartambel, que es acusado de sabotaje y terrorismo.

Sábado 15

Durante su “enlace ciudadano”, realizado en Sígsig (Azuay), Correa arremete contra la dirigencia indígena: “Lo que hacen no es resistencia. Es agresión. Debemos rechazar este tipo de manifestaciones anticonstitucionales. Como terrorismo y sabotaje se puede llamar a lo que hacen los indígenas”. Dice que los grupos que realizaron protestas durante la semana “violaron la Constitución”, pues agredieron a la Policía y al pueblo⁶⁴, y asegura que la dirigencia manipula y presiona a las bases: “Tienen que amenazarlos con multas a ver si salen unos cuantos comuneros a cerrar vías. El pueblo indígena está con el gobierno. Lo que no lograron en las urnas quieren lograrlo con cierres de vías con piedras y palos”.

Junio

Miércoles 30

La CONAIE fue acusada en la fiscalía de Otavalo de atentar contra la seguridad interna del Estado, luego de la marcha realizada mientras se llevaba a cabo la cumbre de la ALBA. La denuncia habría sido presentada por un policía que asegura haber perdido las esposas de dotación durante la manifestación. El presidente de la CONAIE, Marlon Santi, afirma que “pese a que la CONAIE ha hecho un proceso pacífico, se nos acusa de ser desestabilizadores de la patria, y de terrorismo y sabotaje. Muestra que es una persecución política del Gobierno”.

Julio

Lunes 5

El presidente de la Ecuarrunari, la principal organización indígena de la sierra ecuatoriana, Delfín Tenesaca, declara en la Fiscalía de Otavalo su versión en el proceso de indagación previa que se le sigue por los supuestos delitos de sabotaje y terrorismo. En la declaración Tenesaca solicita a la Fiscal de Asuntos Indígenas de Otavalo, Dora Mosquera, ser juzgado por la justicia indígena. En ese sentido el presidente de la Federación de Pueblos Quichuas de las Sierra Norte (FICI), Marco Guatemal, dice que este es un derecho que cubre a todos los indígenas del país, por lo que “los dirigentes de la CONAIE deberían ser procesados por las autoridades indígenas de Otavalo”. Además Guatemal manifiesta que esta indagación y la que se sigue por presuntos delitos de sabotaje, terrorismo y sustracción de una propiedad del Estado, en contra de él y otros dirigentes de Imbabura, son una represalia tras las movilizaciones realizadas el mes anterior en contra de la Ley de Aguas.

Sábado 10

En su enlace sabatino el presidente Rafael Correa denuncia que ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son brazos ejecutores de centrales internacionales. Correa critica que las movilizaciones indígenas privan de los servicios públicos a los demás ciudadanos; en este sentido, cita el artículo 158 del Código Penal, insertado en la sección de los delitos de sabotaje y terrorismo, que castiga con 8 años de reclusión “a quien destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos”. “Le pasan plata a los indígenas y les hacen decir cosas que no tienen fundamento. Yo actuaré con la ley en la mano porque cada vez que haya estos actos tendrán un juicio”, enfatiza el primer mandatario. Por su lado el dirigente de la Ecuarrunari, Delfín Tenesaca, manifiesta que las

⁶³ La ley de Recursos Hídricos (conocida también como “ley de Aguas”) busca regular el acceso y el control del agua, que en la propuesta queda bajo la égida del Estado (y, dentro de él, del Ejecutivo). Los puntos polémicos son varios: por un lado, los grupos empresariales han reclamado que cargan impuestos a actividades como las camaroneras, y que se impide la presencia del sector privado en la explotación turística y en el embotellamiento del agua. Por otro lado, las organizaciones campesinas e indígenas plantean que la autoridad única del agua debe residir en un consejo participativo, y reclaman una redistribución del acceso al agua, fuertemente concentrado en la actualidad.

⁶⁴<http://confirmado.net/archivo/nacionales/20888-protetas-indigenas-son-%E2%80%98agresion-y-sabotaje%E2%80%99-dijo-correa.html>

ONG que colaboran con las comunidades indígenas no condicionan al movimiento para que adopte alguna posición política.

Martes 13

Los representantes del movimiento indígena se reúnen con el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Philip Alston. En el encuentro el presidente de la CONAIE presenta un informe verbal sobre los 65 dirigentes indígenas procesados por terrorismo. “No podemos aplicar el derecho a la resistencia, creo que estamos en un estado dictatorial y de violación de derechos y un Estado que criminaliza la lucha social”, manifiesta Santi.

Sábado 24

Fue liberada en Esmeraldas la concejala Rosaura Bastidas, que había sido detenida por los incidentes registrados en La Concordia, y acusada de terrorismo contra funcionarios públicos. Bastidas interpuso el recurso de habeas corpus, que fue favorablemente atendido por un juez de Esmeraldas, considerando que se habían “violado preceptos constitucionales”. El gobierno reacciona de inmediato por boca del presidente Correa y del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien afirma que el Consejo de la Judicatura “tiene que destituir y sancionar a esos jueces”.

Lunes 26

En entrevista con diario El Universo, Rosaura Bastidas, concejala de la Concordia, rechaza la acusación de terrorismo que se le hace, y da su versión: “Cuando entraron los miembros de la guardia presidencial yo ingresé al recinto ferial en medio de la confusión, faltaban 20 minutos para las 8 de la noche. El Presidente, cuando habló, nos insultó al pueblo de La Concordia. Dijo que afuera había 40 matones, y afuera estaba el pueblo, maestros, amas de casa, estudiantes universitarios. Yo fui detenida antes de que lancen la bomba. Fui maltratada, golpeada y vejada. [...] El jefe de la Policía de La Concordia, Marcelo Vaca, aprovechándose de su condición de uniformado y de varón, me pegó algunas bofetadas y me dijo: ‘Te voy a detener por terrorista’, y yo le contesté que no me podía detener porque no había ninguna boleta. Y al pedirle que me lea mis derechos, me pegó otra bofetada y ordenó que me metan a un patrullero. Yo forcejeé por mi libertad y en esa pelea los policías me quitaron la blusa, me quedé en prendas íntimas y así me metieron al patrullero delante de decenas de testigos. Pedí que me permitan hacer una llamada telefónica para avisar que estaba detenida, pero los policías me dijeron que yo no estaba detenida y que no tenía derecho a ninguna llamada”.

Septiembre

Jueves 2

En La Concordia, provincia de Esmeraldas, un grupo de personas realizan una marcha de apoyo al comunicador Juan Alcívar. La Fiscalía acusa al periodista de terrorismo, argumentando que Alcívar causó los incidentes del 19 de julio pasado en La Concordia y de detonó una bomba lacrimógena durante la concentración encabezada por el Primer Mandatario. En la movilización la concejala por el MPD, Rosaura Bastidas, dice que el periodista es acusado injustamente y que es una represalia del alcalde de La Concordia, Walter Ocampo. Por su lado el Alcalde, representante de Alianza País, rechaza la versión de Bastidas y afirma que se “está victimizando a una persona que no tiene título de periodista, que ha tergiversado la verdad”.

Miércoles 8

El presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador (FISCH), José Acacho, es acusado de haber cometido actos de terrorismo y sabotaje, por las transmisiones de radio Arutam, en septiembre de 2009, en contra de la Ley de Aguas. El juez primero de Morona Santiago, Hitler Beltrán, argumenta que Acacho promovió actos violentos y las manifestaciones indígenas, las cuales terminaron con la muerte del profesor Bosco Wisuma. Otros diez dirigentes Shuar también son imputados por el mismo delito. Por su lado José Acacho sostiene que el proceso es una persecución política y que se ha emitido por parte del fiscal un informe que trata solo de hacer entender que “los seres humanos son los policías y tienen derecho y no así los indígenas... A los heridos policías los llevaban en ambulancias y a los Shuar, en camionetas”.

Jueves 9

La primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia niega los recursos de nulidad, apelación y sustitución de la prisión preventiva al representante de la FEUE, Marcelo Rivera, quién está detenido desde el 8 de diciembre del 2009, y al que se le imputan cargos de terrorismo e intento de asesinato, por los incidentes registrados en la Universidad Central. La Corte dice que la Fiscalía ha determinado que no hay sentido en los pedidos del dirigente estudiantil.

Lunes 13

El Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé (Esmeraldas), Cléber Samaniego, resuelve sustituir la orden de prisión que afronta el periodista Juan Alcívar, acusado de un supuesto acto de terrorismo ocurrido el 26 de julio. El Juez sustituye la orden de prisión, con la condición de que Alcívar se presente cada 15 días en su oficina. Por su lado el abogado defensor, Ramiro Román, dice que en este caso se violaron preceptos constitucionales.

Octubre

Domingo 17

Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) se declara en huelga de hambre para exigir su libertad. Rivera se encuentra detenido en la cárcel 2 de Quito desde el 8 de diciembre de 2009 acusado de terrorismo por liderar una violenta incursión en el rectorado de la Universidad Central durante una sesión de Consejo Universitario que debatía la gratuidad de la enseñanza universitaria. “Mi caso”, dice, “es la demostración del autoritarismo gubernamental que soporta el Ecuador, y de manera particular las organizaciones populares y sus dirigentes”. Dice que en el país hay 152 personas que están siendo investigadas por terrorismo y sabotaje.

Jueves 21

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca se declara en huelga de hambre en rechazo al juicio por terrorismo que se le sigue al presidente de la FEUE, Marcelo Rivera. Rivera había encabezado el año pasado un grupo de estudiantes que trató de interrumpir violentamente una sesión de Consejo Universitario, causando destrozos y agrediendo al rector.

Lunes 25

La jueza tercera de garantías penales, Gladys Terán, declara culpable de terrorismo a Marcelo Rivera, presidente de la FEUE.

Noviembre

Lunes 8

El ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) es sentenciado a tres años de prisión. La presidenta del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, lo halla culpable por agresión terrorista. A Rivera se lo responsabiliza por los desmanes que se produjeron el 8 de diciembre de 2009 en la Universidad Central. Según el acta de sentencia Rivera también deberá pagar 298.665 dólares por los daños y perjuicios en la infraestructura de la Universidad Central. El abogado del dirigente universitario, Ramiro Román, presenta ante el Tribunal un recurso de ampliación y aclaración. Román sostiene que la sentencia es un intento del gobierno para establecer un precedente jurídico en caso de terrorismo y así poder juzgar otros procesos como el que se sigue en contra de los implicados en la sublevación del 30 de septiembre pasado. “Se ha tomado un recurso de la dictadura para sancionar a los subversivos y mi cliente no lo es”, enfatiza.

Jueves 18

La defensa de Marcela Rivera, presidente de la FEUE apela a la sentencia que por terrorismo le impuso el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Rivera había encabezado meses atrás un intento de toma violenta del local donde se reunía el Consejo Universitario de la Universidad Central. Tanto el abogado defensor, Ramiro Román, como los abogados Pedro Saavedra y Ramiro Aguilar consideran que la sentencia permitirá criminalizar la lucha social. La figura legal de terrorismo se tipificó en 1974, durante el gobierno militar de Rodríguez Lara, cuando en América Latina predominaban las dictaduras y la ley de seguridad nacional. Pero, dice Aguilar, ni siquiera los

miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC), fueron procesados por terrorismo, sino por delitos comunes. Saavedra dice que es extraño que el régimen y la jueza utilicen la tipología de terrorismo, cuando el gobierno se ha negado a dar ese calificativo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por su parte, las autoridades de la Universidad Central también apelan a la sentencia, e insisten en que la pena se amplíe a 25 años de prisión.

En Unión Base (Puyo, provincia de Pastaza) se reúne la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para discutir su posición frente al gobierno ante acercamientos realizados por la Secretaría de Pueblos. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, dice que la organización pone tres condiciones para un diálogo: que se revisen los decretos que anulan la autonomía de instituciones indígenas del estado, como la educación bilingüe, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), Salud Indígena, y otros; que se revisen las leyes de minería, hidrocarburos y soberanía alimentaria; y que se suspendan 72 demandas y juicios por terrorismo contra dirigentes indígenas. “Lo que pretende el Gobierno, a través de sus dádivas que ofrece a las bases”, dice, “es dividir al movimiento indígena”. Por su parte, Luis Contento, vicepresidente de Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuador Kichwa Llaktakunapak Jatun Tantanakuy, antes Ecuador Runakunapak Rikcharimuy), dice que la organización indígena no debe aceptar el diálogo con el gobierno, sino impulsar la construcción de un estado plurinacional en tres ejes: pluriculturalidad, derechos colectivos y defensa de los recursos naturales. El gobierno, dice, “no entiende la propuesta indígena de defensa del *sumak kawsay*”. “Si el Gobierno quiere dialogar”, añade Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, “hay muchas cosas que tratar primero y subsanar las heridas que ha causado a las organizaciones indígenas, eso no es tan fácil de olvidar”.

2011

Enero

Viernes 28

Se realiza en Quito la audiencia preliminar del juicio que se le sigue al dirigente de la Federación Shuar, José Acacho, a quien el gobierno acusa por homicidio, sabotaje y terrorismo. El juez, Villamagua Ortega, no encuentra méritos para dictar la orden de prisión solicitada por la fiscalía. Sin embargo, el juicio continúa, y Acacho deberá hacer frente a las acusaciones de terrorismo y sabotaje.

Febrero

Martes 1

En Macas-Morona Santiago la Policía detiene al ex presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, quien está enjuiciado por supuesto sabotaje y terrorismo organizado. La acusación se inicia por liderar la protesta de septiembre del 2009 contra la Ley de Aguas y la explotación minera, en la cual muere el maestro indígena, Bosco Wisuma. Además son detenidos el presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santiago, Pedro Mashian, y el principal acusado de homicidio del profesor Wisuma, Fidel Kaniras. El presidente de la Federación Shuar, Francisco Shiki, declara a las tres personas como “desaparecidas en manos del Estado”. El abogado de Acacho, Julio Sarango, manifiesta que la policía que detiene al dirigente indígena no presenta ninguna boleta de captura, por lo que eso constituye un “secuestro”. De su lado el Ministerio del Interior informa que “los uniformados proceden a la detención con respaldo de los oficios nro. 13-PCPJMS, de fecha 1 de febrero del 2011, firmada por el juez Ángel Villamagua”. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) dice que la detención de Acacho es una represalia del gobierno, porque “no ha podido callarnos” y hace un llamado a las comunidades y pueblos indígenas que se movilicen para exigir la liberación. La Comisión Ecuémica de Derechos Humanos (CEDHU) condena la captura. “Esta detención se enmarca dentro del proceso de criminalización que se sigue contra dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo, ello pese a que durante el proceso judicial aún no se ha podido probar nada en contra de Acacho”. El organismo hace referencia a los cerca de 70 juicios por supuesto terrorismo y sabotaje abierto contra indígenas.

Jueves 3

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus regionales de la Costa, Sierra y Amazonía anuncian el inicio de movilizaciones pacíficas en el país. Esto como rechazo a la detención de los dirigentes shuar Pepe Acacho, Pedro Mashian y Fidel Kaniras. El movimiento

indígena considera que la captura corresponde a una persecución política del Gobierno. La CONAIE también anuncia acciones legales. A través de Pachakutik, presentará el lunes un pedido de amnistía para los detenidos y para otros 189 dirigentes procesados por el delito de sabotaje y terrorismo. Además la CONAIE resuelve presentar una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado y del presidente Correa con el argumento de que el Gobierno ha violado los derechos indígenas.

Domingo 6

En Ambato se posesiona el nuevo Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT). Al acto asisten la asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán, el presidente de la CONAIE, Marlon Santi y delegados de los pueblos y nacionalidades de la Sierra y Amazonía. Mediante comunicado la CONAIE informa el inicio de movilizaciones y se manifiesta que las nacionalidades y pueblos indígenas viven “la persecución y criminalización con falsas acusaciones de fiscales, jueces, policías y militares”. En el mismo contexto, mediante comunicado, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, menciona que la actuación de la justicia en este caso tiene fallas. El delegado de la Defensoría, Franco Lituma, dice que la medida cautelar dispuesta por el juez primero de Garantías Penales de Morona, vulnera lo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 169. Además, Lituma afirma que se ha llamado a juicio por terrorismo organizado, delito distinto al de homicidio a Bosco Wisuma que era el que se perseguía en primera instancia. También aduce que el traslado de los detenidos es un abuso de la fuerza pública.

Viernes 11

Se realiza la audiencia sobre el pedido de amnistía de las siete autoridades y dirigentes del cantón Nabón, provincia del Azuay, sentenciados a ocho años de prisión, acusados de terrorismo y sabotaje por destruir un campamento minero en el sector de Zhingata, Parroquia Cochapata. El hecho ocurre el 23 de marzo de 2008, día en que un grupo de indígenas se toma un campamento de una empresa que supuestamente pretende explotar materiales dentro de una reserva natural de 57.000 hectáreas. En la denuncia se acusa a Vinicio Jaya (concejal), Plutarco Patino y Manuel Capelo (ex concejales), Ángeles Quezada (Junta Parroquial de Cochapata), Celso Patino (teniente político) y a los hermanos Luis y Segundo Olmedo. La sentencia es emitida el 3 de enero por la Corte Nacional de Justicia.

Marzo

Jueves 3

Los dirigentes del movimiento indígena Marlon Santi (CONAIE) y Delfín Tenesaca (ECUARUNARI), acusados de sabotaje y terrorismo por los incidentes del 21 de junio de 2010 en Otavalo, mientras se realizaba la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), rechazan las imputaciones ante la fiscal de esa jurisdicción, Dora Mosquera. Los dirigentes argumentan que llegaron a Otavalo para participar en las celebraciones del Inti Raymi.

Mayo

Jueves 19

El vicepresidente de la CONAIE, Pepe Acacho, entabla una demanda por daño moral contra el presidente Rafael Correa: “Queremos una reparación económica por habernos hecho tanto daño y por habernos exhibido ante la sociedad nacional e internacional como personas peligrosas que hemos destruido, causado daño que hemos matado, mostrándonos como delincuentes peligrosos cuando nosotros no fuimos responsables”. Acacho y otros dirigentes fueron detenidos y acusados de terrorismo, sabotaje y homicidio.

Junio

Viernes 24

En Cuenca, finaliza el “Encuentro Continental de los Pueblos de la AbyaYala por el Agua y la Pachamama”. Durante el mismo se conformó un tribunal ético para realizar recomendaciones a los poderes del Estado, entre otras, corregir las declaraciones del presidente Correa que menosprecia a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y derogar los artículos del código penal que se utilizan para acusar de terrorismo y sabotaje a dirigentes sociales y manifestantes. Participaron delegados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Guatemala, México y

Canadá. El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, presente al encuentro, afirma que “es falso decir que existe minería responsable, que no afecta a la naturaleza”, y agrega que “el presidente de la República debería preguntar en una consulta si queremos una minería metálica a gran escala, a cielo abierto; esos son los temas de fondo que se hubieran debido preguntar en la consulta, no cosas intrascendentes como gallos y toros”.

Julio

Jueves 1

A través de un comunicado, la CONAIE rechaza la actitud de la Fiscalía, que ha iniciado de oficio indagaciones previas y juicios a dirigentes indígenas de Azuay y Morona Santiago por participar en cuatro movilizaciones de protesta contra la minería, y de Imbabura por encabezar una movilización que pretendió entrar a la fuerza a un coliseo de Otavalo para entregar un documento a Evo Morales, que allí se hallaba reunido con Correa y Chávez.

Agosto

Martes 9

Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, explica que la organización indígena junto a otras organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, mujeres, barriales, preparan una movilización conjunta. Esta es una de las resoluciones adoptadas durante el I Encuentro de los Movimientos Sociales por la Democracia y la Vida, que se realiza en Quito. Alrededor de 350 personas acuerdan rearmar un frente de oposición al Gobierno. Uno de los temas que agrupa a estos sectores es la criminalización de la protesta, pues según estimaciones de las organizaciones, existen 199 personas con procesos penales acusados de sabotaje de servicios públicos, destrucción de edificios, terrorismo organizado, atentado contra la propiedad privada y asociación ilícita.

Martes 23

Magali Orellana, asambleísta de Pachakutik por la provincia de Orellana, denuncia que el gobierno presiona a la justicia para “retomar la persecución” a Guadalupe Llori, prefecta de la provincia. Llori fue acusada de terrorismo y sabotaje en 2007 luego de las protestas de la población de Dayuma que reclamaba la desatención del Estado. Al ser absuelta, el gobierno la denuncia por presunto peculado en la adquisición de semillas. Un fiscal suplente anula el proceso y vincula nuevamente a Llori. La denuncia dice que en ningún momento se respetó el debido proceso y que no existe informe de Contraloría que señale indicios de responsabilidad de la prefecta.

La acusación de sabotaje y terrorismo ha sido una de las herramientas utilizadas por el Régimen para aplacar la protesta social en el país. Según un informe del Centro de Derechos Económicos y Sociales, durante este Gobierno, 189 indígenas han sido acusados por este delito. No obstante, la aplicación de esta no se ha dado solamente contra líderes comunitarios quienes encabezaron las protestas en rechazo a la Ley de Minería y de la Ley de Aguas. Ahora, el grupo de 13 ciudadanos que irrumpió en el edificio de los medios públicos el 30 de septiembre del 2010, también fue acusado por la Fiscalía de sabotaje y terrorismo. Elsie Monje, presidenta de la Comisión Ecuatoria de los Derechos Humanos (CEDHU), dice que el objetivo de esa criminalización de la protesta ciudadana es “infundir miedo para impedir que la gente común se manifieste”. El jurista Santiago Guarderas va más allá y dice que el Régimen está utilizando el sistema judicial como elemento de represión contra la protesta ciudadana.

Octubre

Martes 25

Marco Guatemal, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta-FICI, o FICI) fue detenido en Ibarra cuando visitaba la gobernación para gestionar un espacio donde puedan realizarse normalmente ferias agroecológicas. Guatemal fue acusado de actos de terrorismo y sabotaje cuando en 2009 participó en una manifestación de protesta en las afueras del coliseo de Otavalo, donde se realizaba un acto oficial en el que participaban los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales. “Los líderes sociales somos perseguidos por la justicia y ahora vemos como se manejan con tanta agilidad algunas cosas. Hacemos un llamado a la población indígena de Imbabura a movilizarnos por esto que no es un tema personal, sino de todo el pueblo”, dice Guatemal.

Lunes 31

Continúan las vigiliyas y marchas indígenas en Ibarra para exigir la liberación de Marco Guatemal, acusado de terrorismo y sabotaje. En la comunidad de Caluquí (Otavalo, Imbabura) se reúnen dirigentes de la CONAIE, del ECUARUNARI y de la FICI para resolver las medidas que implementarán.

Noviembre

Domingo 13

En entrevista al diario El Comercio, el dirigente de la FICI, Marco Guatemal, liberado de cargos por supuestos actos de sabotaje y terrorismo, anuncia que pensaba retirarse de la política, pero con su detención y posterior liberación, dice que seguirá luchando por los derechos colectivos de los indígenas. La Fiscalía no pudo sostener la denuncia puesta en su contra por el ex gobernador de Imbabura, acusándole de sabotaje y terrorismo. “Jamás hemos usado armas, no atentamos contra el Estado. Hemos hecho movilizaciones de lucha pacífica y de demanda por el respeto de los derechos de los pueblos”, declara el dirigente.

Diciembre

Sábado 10

En la Plaza del Teatro, en Quito, como parte de un acto en conmemoración de los 63 años de la Declaración de los Derechos Humanos, grupos sociales denuncian la represión a la protesta social. En la actividad se exhibe un cartel con la consigna “No a la criminalización de la protesta social”. Además el cartel resalta los nombres de 180 campesinos e indígenas procesados bajo la acusación de supuestos actos de terrorismo. “Estos procesos se dan desde el 2008, por defender a sus comunidades y al medio ambiente de la explotación minera y petrolera”, dice el representante del Centro de Derechos Económicos y Sociales, Francisco Hurtado. Campesinos procesados por terrorismo ocuparon la tarima para relatar sus casos. Pero poco tiempo después de empezar los testimonios, el sistema de amplificación fue desconectado. La Fundación Nacional Sucre afirma que la plaza es para impulsar la cultura y no para realizar actos de corte político.

Jueves 15

El exsubsecretario del Ministerio del Interior y exconsultor de la Secretaría Nacional de Transparencia, Ramiro Rivadeneira, es posesionado como Defensor del Pueblo en la Asamblea Nacional. En su intervención Rivadeneira manifiesta su deseo de modificar el código penal. “En el Ecuador no se practica el terrorismo. Lamento mucho que en la normativa actual se incluya una norma sin sentido que tiene que ver con la protesta social en un capítulo de terrorismo. Sin embargo no podemos ser conductuales en la violencia de la protesta social”, enfatiza.

Domingo 18

Un estudio de la Defensoría del Pueblo revela que el gobierno utiliza de modo sistemático la figura de terrorismo y sabotaje para criminalizar las movilizaciones de comunidades, pueblos y movimientos sociales. Entre 2007 y 2008 se detectaron 42 casos de personas acusadas de estos delitos, que recibieron la amnistía por parte de la Asamblea Constituyente. Entre 2008 y 2010 se registraron otros 21 casos, cuyos casos continuaban abiertos. Se añade que Correa utiliza sus enlaces radiales, cadenas y actos públicos para deslegitimar las luchas sociales.

2012

Enero

Jueves 5

En entrevista al diario El Universo, el secretario del Movimiento Alianza País, Galo Mora, manifiesta que “se habla con facilidad de la criminalización de la protesta social, pero hay que ser claros, mucha dirigencia política perdió el destino y se acostumbró a luchar contra los representantes del Estado, sean quienes sean sin reconocer los avances de esta revolución. Aquí no se trata de criminalizar la protesta sino de no boicotear al Estado ni sabotear la revolución”. Así mismo acusa a ciertos dirigentes indígenas de la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de

estar arropados tras los intereses de organizaciones no gubernamentales extranjeras que son “claramente antirrevolucionarias”, como la Hans Seidel.

Martes 10

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Humberto Cholango, rechaza el operativo policial por el cual “unos 15 o 20 policías ingresan a las instalaciones donde se reunía el Consejo de la organización, para tratar las acciones que emprenderán por las leyes de Aguas, Tierra y Comunas”. El líder indígena señala que “con el pretexto de que en su sede había una bomba llegaron los policías en un sorpresivo e inexplicable operativo”.

Lunes 16

El presidente Correa, a través del Decreto Ejecutivo 619, declara área reservada de seguridad 3.000 hectáreas de terrenos donde se tiene previsto construir la nueva Refinería del Pacífico.

Martes 24

Unos 70 extrabajadores de Petroecuador, despedidos en 2010 por ser accionistas de Gaspetsa, una empresa que realizaba servicios para Petroecuador, realizan una manifestación frente a la Corte de Justicia de Esmeraldas para exigir justicia. Ellos son parte de un grupo que emprendió un reclamo legal contra la empresa, obteniendo fallo favorable en primera instancia. La mayoría de los 600 trabajadores que fueron despedidos entonces llegaron a un acuerdo para ser recontractados, pero renunciando a realizar reclamos legales y a percibir los sueldos no cobrados.

Febrero

Sábado 18

En su enlace semanal, el presidente Correa anuncia que el gobierno prepara contramarchas para enfrentar la marcha indígena que se iniciará en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Según Correa, la marcha indígena busca desestabilizar a su gobierno. “No se preocupen, nos encontrarán bien parados, más firmes que nunca. El 8 de marzo hemos convocado por el Día de la Mujer, pero en defensa de la democracia, un encuentro multitudinario en la Plaza de la Independencia [frente al palacio de gobierno]”, dice, y llama a sus partidarios “A estar movilizados, preparados, de aquí hasta el 22, 23 de marzo, para que nos encuentren más firmes que nunca, defendiendo nuestra democracia, defendiendo la revolución ciudadana”.

Jueves 23

La CONAIE anuncia que, junto a por lo menos otras 19 organizaciones sociales de trabajadores, ecologistas y campesinas realizará en próximo 8 de marzo la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. El dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, dice que las contramarchas anunciadas por Correa pretenden intimidar a la población: “El pueblo tiene temor de salir a las calles a reclamar, porque el Gobierno inicia juicios o acusa de terrorismo a quienes protestan”.

Sábado 25

El tribunal primero de garantías penales de Pichincha condena al ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) a un año de prisión por agresión al exdiputado del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), Oswaldo Flores. Los hechos se produjeron el 8 de marzo de 2007, durante manifestaciones estudiantiles en contra de los diputados que se oponían a la consulta popular que impulsaba el presidente Correa para convocar a una Asamblea Constituyente. Pero poco después se produciría el distanciamiento entre Correa y el Movimiento Popular Democrático, que por entonces controlaba la presidencia de la FEUE. Rivera se encuentra cumpliendo una pena de tres años de cárcel por “agresión terrorista” contra el rector de la Universidad Central. Hace poco tiempo, la Comisión Técnica para la Reducción de Penas, organismo del ministerio de Justicia le negó la posibilidad de acogerse a una reducción del 50% de la pena, a pesar del informe favorable del director de la cárcel de Sucumbíos, donde se encuentra recluso.



Marzo

Sábado 3

El Presidente de la República, en su enlace de los sábados, advierte que la marcha convocada por las organizaciones sociales para el ocho de marzo tiene como objetivo desestabilizar al Gobierno. Por eso hace un llamado a los militantes de Alianza País a sumarse a la ‘contramarcha’ ese mismo día en la Plaza de la Independencia en Quito. Agrega que “varios dirigentes indígenas están convocando con mentiras a los pobladores”. Pide a los indígenas que no se dejen ‘utilizar’ por la extrema izquierda de Pachakutik y el MPD, quienes unidos a la oposición de derecha quieren ‘desestabilizar’ su gobierno.

Dirigentes indígenas cuestionan lo que llaman el modelo extractivista del Gobierno, mientras que en el campo se esperan obras para mejorar la distribución del agua para riego y garantizar la seguridad alimentaria en manos de los campesinos. Por otro el presidente de la Conaie, Humberto Cholango, en entrevista al diario El Universo, manifiesta que “es una irresponsabilidad del Gobierno que se organicen contramarchas” y advierte que no caerán en provocaciones, pues “nuestra marcha es pacífica y legítima en un país democrático”. Los principales temas que motivan a los indígenas a salir a las calles es: La Ley de Aguas, la Ley de Tierras, los enjuiciamientos a dirigentes sociales, defender la libertad de expresión como derecho de los ecuatorianos, defender a los trabajadores, a los estudiantes, a todos los que se han visto afectados por este Gobierno, señala el dirigente.

Domingo 4

Los organizadores de la marcha indígena popular del 8 de marzo se reúnen en Zamora para dar los últimos detalles de su organización. Desde la provincia amazónica de Zamora (zona minera), arrancará la movilización el 8 de marzo y culminará el 22 en Quito. El prefecto de Zamora, Salvador

Quishpe (Pachakutik), quien estará al frente de la marcha, explica que el objetivo principal de la misma será exigir rectificaciones al Gobierno en materia ambiental, minera y de libertades. Otro de los organizadores manifiesta que “la marcha será pacífica y no buscamos desestabilizar al Régimen”. En el resto de provincias por dónde pasará la movilización, los dirigentes locales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), afinan los preparativos, el presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua, Manuel Ainaguano, dice que se realizan visitas a las comunidades indígenas para socializar la propuesta. Por otro lado, el Gobierno busca deslegitimar esta movilización, y anuncia la realización de una concentración paralela para el 8 de marzo en Quito. Betty Tola (ex vicepresidenta de Pachakutik) Ministra Coordinadora de la Política, descalifica a los protagonistas de la marcha y advierte que hay una motivación de corte proselitista en la misma. “El Movimiento Popular Democrático y sectores de derecha están buscando protagonismo que les permita tener una mejor posición en el proceso electoral” dijo.

La Policía detiene a once miembros del MPD por atentar contra la seguridad. La detención se realizó en un operativo realizado el sábado en la noche en un departamento ubicado al sur de Quito. Según boletín de prensa de la Policía Nacional, los detenidos en el operativo llamado ‘Sol Rojo’, son líderes provinciales de la célula insurgente Grupo de Combatientes Populares (GCP) y que al momento del operativo mantenían una reunión clandestina. El director nacional del MPD, Luis Villacís, manifiesta que los detenidos son militantes y simpatizantes del MPD y que se los pretende acusar de supuesto terrorismo y sabotaje. Afirma que todo “es parte de la estrategia del Gobierno para debilitar la movilización del 8 de marzo. Explica el dirigente que la reunión del sábado - interrumpida por la policía- era de coordinación de la marcha. Mientras tanto los detenidos niegan las acusaciones hechas en su contra y siguen en la Unidad de Vigilancia de Carapungo hasta ser investigados.

Lunes 5

La era de la minería a gran escala en el Ecuador se inicia con 8 mujeres detenidas. El primer contrato minero a cielo abierto se firma en la Presidencia, entre el Régimen y la empresa china Ecuacorriente en el proyecto Mirador ubicado en la provincia de Zamora. El contrato permitirá a Ecuacorriente explorar, extraer y exportar minerales (cobre, oro) durante los próximos 25 años. El país tiene reservas por USD 185.400 millones. La firma del contrato se vio empañada por la detención de ocho mujeres ambientalistas en la Embajada de China de Quito. En medio de enfrentamientos, 60 policías arrestaron y trasladaron a las manifestantes hacia la Policía Judicial. Alexandra Almeida representante de Ecologistas en Acción manifiesta que las mujeres ingresaron con la autorización de la Embajada y era parte de una protesta pacífica contra la actividad minera de Ecuacorriente. Las activistas fueron liberadas en la noche por no haber ninguna denuncia en su contra.

La Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) que agrupa alrededor de 200 comunidades participará en las movilizaciones convocadas por la Conaie. Sus dirigentes anuncian que participarán tanto en las concentraciones del 8 y del 22 de marzo. Por otro lado, el Gobierno anuncia que existen confirmadas 70 organizaciones para la movilización que anuncian para el 8 de marzo, a través de la Ministra Coordinadora de la Política, advierte que nada tiene que ver en la realización de esta marcha, y agradecen el respaldo de las organizaciones, ante las supuestas intenciones desestabilizadoras que vienen tanto de sectores de la izquierda como de la derecha. El Movimiento Popular Democrático (MPD), denuncia un supuesto plan del Gobierno donde se detallan las actividades de las ‘contramarchas’, hicieron público un documento donde se detalla el supuesto plan. El Gobierno niega que tenga tal participación.

El MPD solicita el recurso de hábeas corpus para los jóvenes detenidos en días anteriores vinculados al GCP, y sobre los cuales se indaga posibles actos de subversión. Según el Ministerio del Interior, los detenidos pertenecerían a una célula del GCP y supuestamente planeaban actos de desestabilización contra el Régimen para este 8 de marzo. El informe de la policía dice que en el lugar de su detención se encontraron equipos de comunicación y material de propaganda y cheques presuntamente con la firma del MPD. El director nacional de esta organización, Luis Villacís, descarta la acusación de atentar contra la seguridad del Estado que ha planteado la Fiscalía. “Las acusaciones contra los jóvenes son falsas, todo es para atemorizar a los grupos que están organizando las marchas pacíficas del próximo jueves”. No es la primera vez que los jóvenes que pertenecen al movimiento se reúnen para debatir políticamente, dijo el dirigente. El MPD ha solicitado el recurso de hábeas corpus

para los detenidos. La Fiscalía tiene treinta días para investigar la supuesta vinculación de los jóvenes con el GCP.

Jueves 8

En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El Pangui, cientos de indígenas, estudiantes y dirigentes sociales, realizan un acto dando inicio a la marcha en Defensa de la Vida, organizada por la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, integrada por varias organizaciones sociales y políticas (Pachakutik, Conaie, MPD, Montecristi Vive, Participación). Antes del inicio de la marcha Lourdes Tibán (asambleísta de Pachakutik) y Salvador Quishpe (prefecto de Zamora), se pronuncian en contra de la minería y la contaminación de las fuentes de agua, dos de las principales demandas de la marcha, la misma que recorrerá varias provincias de la Sierra y el 22 de marzo culminará en Quito. Así mismo se realizan marchas de oposición en varias urbes de la sierra y el oriente (Cuenca, Ambato, Latacunga, Puyo, Guaranda, Riobamba). Estas no fueron violentas y no se registraron incidentes, todas en defensa del agua y contra la minería. Por otro lado, seguidores del Gobierno marcharon desde el Parque El Arbolito hasta llegar a la Plaza de la Independencia, para mostrar su respaldo al Régimen y participar de la “vigilia por la democracia” que se inició como celebración por el Día de la Mujer y terminó en un apoyo multitudinario a Correa y pidiendo su reelección. Simpatizantes que llegaron de varias provincias del país, recibieron desayuno y almuerzo. En una de sus varias intervenciones el Primer Mandatario advierte sobre la marcha de las organizaciones sociales, “Dicen que se tomarán Quito el 22 de marzo; aquí estaremos no pasarán, ya el país no es el de antes”.

En la tarde en Quito trabajadores, maestros, estudiantes, integrantes del Seguro Social Campesino, la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, activistas políticos de Montecristi Vive, Participación y MPD, agrupados en la Coordinadora por la Unidad de las Izquierdas, participan de una concentración en El Ejido y posteriormente realizan una marcha a la Asamblea Nacional, con el fin de entregar un pliego de peticiones de estos diferentes sectores, así mismo, como diría uno de sus dirigentes “Buscamos una alianza entre movimientos sociales, indígenas y fuerzas políticas”.

Viernes 9

La “marcha por la vida y el agua y la dignidad de los pueblos” llega a Loja, y sigue sumando más personas de diferentes comunidades rurales. En la salida de Zamora y en el ingreso a Loja, la Policía ha controlado la documentación de conductores y vehículos que son parte de la marcha antiminera. En Loja fueron recibidos por indígenas y representantes de varias organizaciones sociales, una de ellas dijo que “el respeto al agua y a la naturaleza debe motivar a los participantes, hizo la entrega de un queso redondo de cinco libras”. Como símbolo de solidaridad, los marchantes utilizan un monigote en forma de vaca, “es una alcancía donde reciben donaciones de alimentos y dinero”. En una de las localidades de la provincia lojana, aparecieron alrededor de 70 personas lideradas por los concejales de Alianza País, quienes lanzaban consignas a favor del Gobierno. La policía estuvo presente y no hubo enfrentamientos. La caravana llega al Parque Bolívar de Loja, donde se realiza un mitin con discursos de sus Salvador Quishpe, prefecto de Morona, y Humberto Cholango, presidente de la CONAIE.

Sábado 10

Gobierno y oposición miden fuerzas en Cuenca. Por un lado, la marcha convocada por el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, convoca a miles de manifestantes quienes utilizan varias expresiones para protestar contra la explotación minera (zanqueros, afiches, máscaras, etc.). El prefecto se une a la movilización, indicando que respeta el mandato del presidente Correa, pero que es imperativo que escuche al pueblo. “Esta movilización no pretende desestabilizar al Gobierno. Es la voz de los habitantes que quiere ser escuchada”. A pocas cuadras del lugar por donde pasaba esta marcha, se presenta la feria ciudadana impulsada por el Gobierno. En medio de la oferta de comida típica, juegos para niños, etc., diferentes ministerios exhibían los avances de su gestión. Por ejemplo, Esteban Albornoz, titular de Electricidad y Energía Renovable, señala que el Gobierno “trabaja en soluciones reales por el medio ambiente, como el Plan Renova”, el mismo que cambia las neveras usadas, por nuevas. Así Cuenca la tercera ciudad más importante del país, se aprestaba a recibir a la marcha de las organizaciones sociales, que en días pasados salió de Zamora hacia Quito, la misma que llegaba al

cantón indígena de Saraguro. Aquí se produjo un ligero incidente entre el prefecto Salvador Quishpe y el Comandante de la Policía. Esta quiso impedir el ingreso de la marcha a la Plaza Central, finalmente los marchantes rompieron el cerco e ingresaron pacíficamente.

En su enlace de todos los sábados, el Primer Mandatario, manifiesta que el 95% del impacto ambiental del proyecto Mirador firmado esta semana, será recuperado. Agrega que “la renta que tenga el Estado se reflejará en obras para las comunidades como vías, escuelas del milenio, hospitales y hasta un velódromo”. Así mismo Correa, tilda de fracaso a la marcha convocada por los sectores sociales, y critica a Pachakutik y MPD (principales impulsores de la movilización) de estar respaldados por medios de comunicación, encuestadoras que mienten, y de recibir apoyo extranjero para desestabilizarlo. Advierte que “estaremos preparados para recibirlos el 22 de marzo”, día previsto para la llegada de la marcha de las organizaciones sociales a Quito.

Lunes 12

La marcha Plurinacional de la Conaie y otras organizaciones toma fuerza en Azuay. En efecto, las parroquias cuencanas de Tarqui y Victoria del Portete, donde el discurso antiminero se mantiene desde hace más de cinco años, se sumaron masivamente a la movilización convocada por las organizaciones sociales. En la zona se encuentra el proyecto minero Quimsacocha, concesionado a la canadiense Iam Gold. Es uno de los cinco proyectos más grandes que busca impulsar el Gobierno. Por la cantidad de participantes, las fuerzas militares también se hicieron presentes, mientras tanto los dirigentes indígenas advertían a los cientos de movilizados a no caer en provocaciones. El prefecto del Azuay también se hace presente para respaldar a la marcha, junto a él el prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, hace declaraciones en relación a los posibles intentos del Gobierno de frenar a la movilización. En la tarde se unen a la marcha estudiantes universitarios agrupados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y de alumnos independientes. Mientras tanto en la gobernación azuaya, se agrupan decenas de simpatizantes del Régimen, el gobernador Humberto Cordero, ordenaba la presencia de militares y policías por los rumores que existían sobre un supuesto ‘plan golpista’. “No he dicho que es un intento de golpe de Estado, sino un atentado a la democracia porque se quiere caotizar con falsa información a las bases indígenas sobre la minería”. Por otro lado el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, declara que “el intento desestabilizador sale desde el Gobierno, sus funcionarios de confianza y las transnacionales mineras que buscan llevarse los recursos naturales”.

Miércoles 14

La ‘Marcha por la vida, el agua y la dignidad’, que partió el pasado 8 de marzo desde Zamora Chinchipe llega a la provincia de Chimborazo, en medio de acusaciones del Gobierno de que “el licor sigue siendo parte de las movilizaciones indígenas”. El diario oficialista El Ciudadano publicó ayer que 520 años después de la época colonial el alcohol continuaba siendo el “motor para los indígenas que se dicen de la oposición”. Esto, a propósito del gesto que tuvo el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, hacia su homónimo de Zamora Chinchipe y cabeza de la movilización, Salvador Quishpe, cuando llegó a Cuenca: le entregó una porción de mote y una botella con licor como símbolo de la fuerza que espera le dé a los marchantes. El artículo resume que esta práctica era común en la colonia, cuando el trabajo de los indígenas en los campos era pagado con alcohol. Los dirigentes indígenas han minimizado el hecho, pues lo consideran parte de la campaña de desprestigio que ha montado el Régimen contra la protesta de las organizaciones sociales. Así mismo los dirigentes han dado a conocer un manifiesto de 19 puntos que será entregado al presidente Correa. En dicho documento, exigen al Gobierno el respeto a la Constitución, la aprobación de una Ley de Aguas para el buen vivir, la no firma de acuerdos de libre comercio y la suspensión de las negociaciones con la Unión Europea, entre otras solicitudes. Este mandato fue enviado a Quito, con cuatro *chaskis*⁶⁵, miembros de comunidades indígenas, y se espera tener una respuesta positiva del oficialismo. Por otro lado, la dirigencia indígena ha denunciado la infiltración en la marcha de elementos de la policía armados, quienes se han hecho pasar por supuestos estudiantes. En los dos casos encontrados, los infiltrados han sido entregados a la Policía. Algunos dirigentes advierten y coinciden en las intenciones del Régimen “generar caos para intentar disolver la movilización”.

⁶⁵Chaski, en quichua, mensajero.

Jueves 15

Gobierno entrega recursos en las zonas por donde pasará la caminata de las organizaciones sociales. El ingreso a Chimborazo de la Marcha por la Vida, ha coincidido con un desembolso económico que el Ministerio de Finanzas realiza a la prefectura y a 10 alcaldías por la cantidad de USD 1,7 millones. Las bases indígenas acusan al prefecto Mariano Curicama, cuadro histórico de Pachakutik, de entreguismo al Régimen de Correa. Para los líderes indígenas esta oportuna entrega de recursos, es una estrategia del Gobierno para que las autoridades de la provincia se “mantengan callados”. Así mismo el Gobierno a través de funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entrega a los campesinos de Guamote, utencillos agrícolas. Chimborazo ha sido un motor de anteriores movilizaciones, en la actualidad los mandos están divididos. El prefecto no niega su cercanía con el Régimen, incluso advierte que planteará al presidente Correa que “si los dirigentes de la Conaie no quieren dialogar, que se lo haga con las bases”. Alianza País tiene un desafío en la provincia, pues en la Sierra centro y en Chimborazo principalmente, la población le dijo No en la última consulta popular.

El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) da a conocer un manifiesto en el que cuestiona al gobierno: “Inicialmente surgió como un proyecto de izquierda, pero en el camino perdió ese horizonte y estableció una política directa en contra del movimiento indígena y social del país, alejándose de quienes promovieron su candidatura y lo apoyaron”, dice, y critica “La utilización de las contramarchas con los denominados ‘grupos de choque’, [que] es un recurso peligroso para provocar enfrentamientos entre ecuatorianos”. Reclama, entre otros puntos, “el tratamiento urgente de la Ley de Recurso Hídricos, la Ley de Acceso y Posesión de la Tierra y Territorio, Ley de comunas incorporando los aportes de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales; y ejecutar conforme mandato constitucional la Consulta Previa establecida en los artículos 398; 57 numerales 7, 17 que garantizan el derecho de información y consulta oportuna a las comunidades para toda actividad que involucre cambios en su territorio, cultura y educación de los pueblos ancestrales”, la “reactivación de la Agenda Agraria”, una “justicia autónoma e imparcial” y “respeto a las organizaciones indígenas y sociales a sus procesos, para que no sean denigrados, intervenidos y fraccionados con ofrecimientos coyunturales”. Culmina expresando “nuestro apoyo a todas las acciones que realizaren las organizaciones y sectores sociales en defensa del agua, territorio en ejercicio de su derecho a la diferencia de pensamiento ideológico, político y social y demandamos respeto al derecho a la libre circulación por el territorio nacional, porque un gobierno sin oposición no tiene razón de ser en una democracia verdadera”.

Viernes 16

La marcha Plurinacional por la Vida llega fortalecida a Riobamba capital de Chimborazo. En las afueras de esta ciudad, alrededor de 2.500 indígenas se han sumado a la protesta este día, así como asambleístas opositores. Alrededor de 3.000 marchantes arriban a la Casa Indígena en el centro mismo de Riobamba. Luego del discurso de sus principales dirigentes, estos han mantenido una reunión con los asambleístas de Pachakutik Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema quienes liderarán la marcha en Tungurahua y Cotopaxi. Así mismo la dirigencia indígena coordina acciones con dirigentes del MPD, y con los movimientos Participación y Montecristi Vive. Por otro lado, a pocas horas de la entrada de la Marcha por la Vida a la provincia de Tungurahua, el Gobierno intenta otra vez opacar esta movilización mediante eventos masivos encabezados por sus ministros. Esta vez, el ministro de Deportes, Francisco Cevallos, entrega kits deportivos en las escuelas de la capital tungurahuesa.

Sábado 17

El enlace semanal de Rafael Correa se emite desde el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, llena de ecuatorianos migrantes. Correa descalifica la marcha indígena diciendo que no es una caminata y que no tiene convocatoria; dice que si el 22 de marzo entran 500 manifestantes a Quito, el gobierno pondrá 50.000 para “defender la revolución ciudadana”.

Lunes 19

Luis Cubillos, dirigente del movimiento Patria Altiva I Soberana (PAIS) en Guayas, dice que la marcha indígena “es parte de una estrategia golpista. No son los indígenas los que están a la cabeza

de esta estrategia, es la banca; son los sectores que han perdido los privilegios en este país, que están financiando la movilización indígena, que se han movilizad aquí en Guayaquil”. Insiste que “hay una posición de desestabilizar, porque son los intereses que han sido afectados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, ya los bancos no mandan en este país, y la única posibilidad que tienen de recuperar el poder es a través de un golpe de Estado”.

Grupos de Alianza País inician las “vigilias por la democracia” en las plazas de la Independencia (frente al palacio de gobierno) y San Francisco (tradicional sitio de reunión de las marchas del primero de mayo) y en el parque de El Arbolito (sitio donde desde hace más de una década se reúnen las marchas indígenas y otras manifestaciones de protesta social).

Martes 20

El Movimiento Popular Democrático (MPD) de Santo Domingo de los Tsáchilas denuncia que la intendencia de Policía ha prohibido la realización de una marcha que se había organizado para recibir a los adherentes de la marcha por la vida, que habían llegado desde la provincia de Esmeraldas, y que debía seguir a Quito. En Otavalo (provincia de Imbabura) se reúnen al menos tres centenares de indígenas pertenecientes a la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), para iniciar una caminata a Quito, donde se unirán con la marcha que avanza hacia Quito desde el sur del país y que hoy a pasado por Latacunga y Saquisilí (provincia de Cotopaxi) y se apresta a llegar a la provincia de Pichincha. Por su parte, el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, ratifica en Latacunga “que llegaremos el 22 de marzo desde dos frentes. Por el sur y por el norte de la ciudad. Queremos invitar a los quiteños y quiteñas a recibir la marcha porque es por la dignidad y libertad de los pueblos, para detener la prepotencia de un Gobierno autoritario”.

Miércoles 21

La Secretaria de Pueblos, Mireya Cárdenas, dice que está dispuesta a abrir un “diálogo de paz” con las organizaciones indígenas cuya marcha llega mañana a Quito: “Esperamos que el pueblo no se deje manipular”, dice. Por su parte, el subsecretario Édgar Frías afirma que “en una sociedad democrática todos tenemos derecho a opinar y a discrepar: pero de ahí a impulsar acciones de violencia hay un tramo muy largo”. Por su parte, la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Doris Solíz, dice que para dialogar con el gobierno no se necesita realizar marchas, que los manifestantes serán recibidos por la ministra Coordinadora de la Política, Betty Tola, pero que no se dialogará “con estas personas que no tienen un comportamiento democrático, un comportamiento de respeto”, refiriéndose a los asambleístas Lourdes Tibán (Pachakutik) y Jorge Escala (MPD), quienes –dijo– “estuvieron alentado a los conspiradores del 30S”⁶⁶.

Se realiza la audiencia de apelación a la orden de prisión contra diez personas detenidas el 4 de marzo en el barrio Luluncoto, de Quito, a los que el régimen acusa de planear actividades subversivas, de atentar contra la seguridad del Estado, de ser responsables de la colocación de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca, y de pertenecer al Grupo de Combatientes Populares (GCP).

Jueves 22

El presidente Correa, en entrevistas con la radio pública y con Ecuador TV (el canal oficial de televisión), reitera que informes de inteligencia indican que la marcha indígena es utilizada dentro de un plan de desestabilización contra el gobierno, pero que, “como se les derrumbó todo y nadie les hizo caso, vinieron desinfladísimos, y ahora dicen: «No a la minería, bajen los impuestos»”.

La marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que inició el 8 de marzo en El Pangui, arriba a Quito desde el sur y desde el norte. Participan organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, de trabajadores, mujeres, jóvenes y ecologistas. En su recorrido reciben el aplauso de miles de personas que se ubican a la vera de las calles por donde avanzan, muchos de los cuales se suman al recorrido hasta el parque El Arbolito, donde ingresan pasadas las tres de la tarde. Antes de esa hora, el parque estuvo ocupado por simpatizantes del gobierno, que escucharon un discurso del presidente Correa antes de dirigirse hacia las plazas de la Independencia y de San Francisco. Hacia las 6 de la tarde se producen algunos incidentes entre manifestantes y policías, cuando los dirigentes de

⁶⁶ Se refiere a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que el gobierno califica como intento de golpe de Estado y de magnicidio.

la marcha trataban de ingresar a la Asamblea para entregar un manifiesto a su titular, Fernando Cordero. Finalmente, a eso de las 7 de la noche, un grupo de 35 dirigentes son recibidos por Cordero, y le exponen las demandas de la marcha. La concentración en El Arbolito siguió hasta la noche, con la presencia de varios artistas. [Estimamos que al menos unas 40.000 personas se unieron a la marcha en su momento de mayor concurrencia.]

En Cuenca, más de 600 personas, encabezadas por mujeres de comunidades de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, realizan una marcha para expresar su solidaridad con los marchantes por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que llegan hoy a Quito. La marcha pasó por una de las esquinas del parque Calderón, frente a la Gobernación, donde se reunían manifestantes progubernamentales.

Viernes 23

En entrevista con Gamavisión, actualmente bajo administración estatal, el presidente Correa minimiza la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos: “A lo sumo hubo 7 u 8 mil personas con el respaldo del MPD, Sociedad Patriótica (PSP), medios de comunicación y de la peluconería de Quito”, dice, y añade que sólo dialogará con “personas honestas”; además exige que se aplique la ley a los responsables de los golpes sufridos por cuatro policías durante las refriegas de ayer en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.

Celestino Wisum, alcalde de Taisha (provincia de Morona Santiago), critica al presidente Correa por sus expresiones frente a la marcha indígena y de otros sectores sociales que culminó ayer en Quito. Correa dijo que la movilización “no movió ni 4.000 personas, pero nosotros, ¡nosotros somos 60.000!”. Wisum dice que “Muchas veces [...] vemos cómo nuestro presidente desconoce esta forma de manifestación de diferentes sectores sociales. Creo que todavía tenemos que tratar este tema de la democracia”, y asegura que para los sectores sociales no se trata de medir fuerzas, sino de demostrar “que no podemos permitir en el Ecuador una forma de gobierno que se precia de revolucionario pero persigue, criminaliza a los sectores sociales, a los líderes sociales que piensan distinto, que criminaliza a los medios que tienen otra opinión o punto de vista diferente que el oficialismo”.

Sábado 24

En su “enlace ciudadano”, el presidente Correa niega haber usado el término “pelagatos” para referirse a la marcha por el agua. Pero durante el enlace sabatino del 18 de febrero había dicho: “Ya verán cómo esa prensa corrupta va a sacar en primera página: Gobierno pierde apoyo, movilizaciones multitudinarias, indígenas, campesinos, montubios, clase media, izquierda, derecha, todos marchando por la libertad contra el Gobierno, así sean cuatro pelagatos, como siempre hacen, verdad, tratando de crear atmósfera de tragedia, tremendismo, para ver si nos logran desestabilizar”.

La ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, afirma que “Durante la marcha [de los movimientos sociales] ha habido una paulatina deslegitimización. Conocimos que uno de los intereses era presentar un candidato presidencial. Se develó también un interés desestabilizador cuando la presidenta de la UNE señaló que la convocatoria a la marcha era el inicio del fin del gobierno de Correa. Y un afán conspirativo cuando Blasco Peñaherrera señala su respaldo a la movilización de la UNE. El otro sector fue la Conaie, que en su carta al país deslinda responsabilidad con estos afanes electorales y conspirativos, y señala puntos sobre los cuales colocan una agenda de discusión y demandas sociales legítimas”.

Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, afirma que la marcha fue “un buen comienzo para profundizar los cambios” y que los objetivos primordiales de la marcha se cumplieron, pues “se logró movilizar a un importante número de indígenas, pero también a los movimientos sociales, que además se entregó el documento con los 19 puntos que exigen las organizaciones”. “Pese a que el presidente ni bien anunciamos la marcha empezó a hablar de desestabilización, nosotros queríamos demostrar que podemos responder al país de otra forma, con diálogo y paz”, añade. Por su parte, Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, dice que la recepción que los quiteños dieron a la marcha por el agua demuestra que “el racismo y las dudas que hemos tenido por siglos entre indígenas y no indígenas están desapareciendo, lo que facilitará la construcción del Estado plurinacional que queremos”, y añade que “los indígenas estamos unidos. Pero no solo los indígenas, también los movimientos sociales han sabido demostrar esa unidad”.

Sábado 31

El presidente Correa vuelve a referirse a las afirmaciones de que se criminaliza la protesta social: “En Ecuador no hay acusaciones (contra dirigentes indígenas), no hay juicios, no hay nada”, dice. Asegura que hay 42 casos que se ventilan en la justicia, de los cuales “38 casos están en investigación”, y sólo cuatro están judicializados: dos por instituciones privadas y dos por parte del Estado. “Uno ya lo perdió el Gobierno contra un dirigente indígena que cerró las carreteras cortando árboles”, dice, y el otro por la muerte del profesor indígena Bosco Wisuma, ocurrida en medio de protestas que se llevaron a cabo en septiembre de 2009. “¿Ustedes creen que un asesinato es protesta social?”, pregunta, y él mismo responde: “En un Estado de derecho, un asesinato no puede dejarse de judicializar”⁶⁷.

Abril

Martes 3

El gobernador de Morona Santiago, Juan Arcos, pide -a través de un comunicado- al Presidente de la República destituir a un grupo de funcionarios (directores de área) por no haber participado en la ‘contramarcha’ organizada por el oficialismo el 22 de marzo en Quito. El funcionario detalla en la comunicación que “el pasado martes 20 de marzo, en el gabinete provincial con la presencia de todos los directores institucionales se acordó ir a Quito y defender la revolución ciudadana de los intentos golpistas y desestabilizadores”.

Miércoles 18

La segunda sala de garantías penales de la provincia de Cotopaxi condena a un año de reclusión a siete personas por haber participado en la toma de la gobernación durante la sublevación del 30 de septiembre de 2010. Los condenados son cercanos al Movimiento Popular Democrático (MPD), y entre ellos se cuenta un concejal, un asambleísta alterno y el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC).

Jueves 19

La sala de Conjuces de la Corte provincial de Justicia de Morona Santiago rechaza, por dos votos contra uno, el pedido de nulidad del juicio que se sigue contra dirigentes shuar por la muerte de Bosco Wisuma, ocurrida en septiembre de 2009 durante enfrentamientos entre indígenas y policías. La defensa justificaba su pedido en que se restaron 68 días de los 90 que correspondían al proceso de instrucción fiscal, en que se aprobó una acusación particular de la procuraduría del estado cuando ya había concluido el tiempo de la etapa de instrucción fiscal, y en que se les negó el derecho a ser informados en su idioma y de aplicar la justicia indígena, pues los hechos ocurrieron en una zona mayoritariamente indígena.

Sábado 21

Grupos sociales, como el Frente Popular y la CONAIE, anuncian que buscarán reunirse con los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerles conocer los expedientes de los dirigentes que han sido acusados y enjuiciados por participar en acciones de protesta social.

Sábado 28

En su “enlace ciudadano”, realizado en el cantón Cascales, el presidente Correa se refiere a la consulta previa, y afirma que sus resultados “no son vinculantes”. “La consulta previa no es consulta popular”, dice: “Las ong buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante, eso significa que para dar cualquier paso vamos a tener que pedir permiso a la comunidad, eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías sino de la unanimidad, sería imposible gobernar así”.

⁶⁷http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-persiguen-delitos-no-personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63

Mayo

Jueves 3

Las diez personas detenidas, acusadas de supuestamente planificar atentar contra la seguridad del Estado, cumplen dos meses de estar detenidos. Los familiares de los detenidos anuncian que han acudido a los organismos de DD.HH, para denunciar supuestas anomalías en las investigaciones del caso. Los acusados fueron detenidos, días antes de iniciarse las movilizaciones de los sectores sociales en marzo pasado.

Viernes 4

Críticas a la Asamblea y al régimen en último informe de derechos humanos. Una baja producción de leyes en la Asamblea, incremento en la conflictividad en el país y la falta de políticas integrales de seguridad que desembocaron en el incremento de algunos delitos, son las conclusiones del informe de Derechos Humanos 2011, elaborado por el Programa Andino de Derechos Humanos en coordinación con la Universidad Andina Simón Bolívar. Según los coordinadores de la elaboración, la información recopilada fue obtenida de la web de la Asamblea, el Sistema de Información para la Gobernabilidad (SIGOB) y varios medios impresos.

Domingo 6

Pobladores del recinto Juan Montalvo, en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, se enfrentaron el pasado domingo a militares que buscaban inmovilizar la maquinaria que se utiliza en la minería. Los enfrentamientos, que dejaron además una mujer herida, ocurrieron dentro de un operativo simultáneo realizado el fin de semana pasado en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Napo y que dejaron un total de 5 máquinas inutilizadas, 235 incautadas y 2 detenidos, según el ministro del Interior, José Serrano. Dirigentes mineros de Esmeraldas afirman estar listos para defender su trabajo en las minas. Mineros artesanales aseguran haber sido víctimas de represión militar. Para inutilizar maquinaria con la que trabajan, cientos de uniformados llegaron el pasado fin de semana a San Lorenzo y Eloy Alfaro, además de otros cantones del país. Existe desesperación en los dirigentes y trabajadores, “no queremos salir a robar, no queremos ser nuevos integrantes de las bandas de delincuentes en el país, pero nos están llevando a eso. Somos más de 20.000 personas que no tenemos cómo alimentarnos porque el Gobierno nos ha quitado nuestra fuente de trabajo”, expresa Kiler Ortiz minero de San Lorenzo. Además añade que hubo enfrentamientos entre los comuneros y los militares a lo largo de toda la zona, “no estamos dispuestos a dejarnos quitar nuestras herramientas de trabajo, la gente ha estado en silencio por temor a que les metan presos”, dijo.

Viernes 11

Una cadena de la Secretaría de Comunicación (Secom) asegura que los planteamientos del informe sobre derechos humanos del Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar “no tienen ninguna base investigativa”, que “no son más que una recopilación de un boletín de prensa de la Conaie, de unas cuantas páginas de un sindicalista petrolero despedido por sus abusos” (“abusos”, que, por cierto, no se explican), “de un periodista informante de la embajada norteamericana que defiende la empresa como medio de comunicación”, “y de un informe del ex defensor del pueblo, que se refiere a temas particulares, a juicios privados”. “Una nueva vergüenza para la universidad ecuatoriana”, concluye⁶⁸.

Sábado 12

En su “enlace ciudadano” de los sábados, el presidente Correa se refiere al informe sobre derechos humanos publicado por el PADH: “Lo que dice ese informe y la fuente en la que se basa... ¡qué vergüenza!”, y, fiel a su estilo, añade: “Senescyt: [refiriéndose a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación], ¡tome cartas en el asunto! No podemos tener estos fraudes académicos”⁶⁹. El sábado 19 aún va a insistir: “compilación de pasquines sin ninguna

⁶⁸<http://www.youtube.com/watch?v=ITJVNIIPIow> (publicado el 14 de mayo).

⁶⁹http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32495:presidente-critica-informe-sobre-dd-hh-de-universidad-andina-video&catid=40:actualidad&Itemid=63

rigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al Gobierno”⁷⁰. En seguida dirigió sus dardos sobre el rector de la universidad: “Señor rector Ayala Mora, usted puede decir que esto no es en contra del gobierno pero ni usted mismo se lo cree, esto es una conspiración de pasquines sin ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al gobierno. [...] Que esto lo auspicie una universidad es una verdadera vergüenza, esto es deshonestidad académica, esto es un fraude académico. Incluso voy a revisar si nos podemos quejar con la Comunidad Andina porque la Universidad Andina Simón Bolívar es una universidad de la Comunidad Andina y no podemos tener una universidad que se dedique a hacer politiquería barata en vez de hacer academia”⁷¹. El gubernamental diario *El Telégrafo* también comenta el informe: En la edición del sábado 12 de mayo, decía un titular: “DD.HH. vistos por actores políticos”. El subtítulo ponía: “Un ex dirigente de un partido político de centro-derecha, un ex sindicalista de la estatal Petroecuador y un miembro de Acción Ecológica, ONG que fuera suspendida temporalmente en 2009, son coautores de informe sobre Derechos Humanos en el país”; luego especificaba: “Entre los académicos que participaron en la elaboración están un ex miembro de la Democracia Popular, (hoy de Pachakutik) y profesor universitario, Julio César Trujillo; un ex dirigente sindical de Petroecuador, que fue despedido, Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010. Otro coautor es Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica, que en 2009 fue suspendida, de la cual es parte Alberto Acosta, opositor al régimen”⁷². Y el domingo 13 de mayo insistía: “Entre los académicos que participaron están un ex miembro de la Democracia Popular, Julio César Trujillo; el ex dirigente sindical Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010; Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica y el opositor Alberto Acosta”⁷³.

Domingo 13

La Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia realizó “inteligencia” en la denominada marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, de marzo pasado, y a las organizaciones sociales que se movilizaron en contra del Gobierno. Un reporte de la Presidencia de la República sobre la información administrativa de Carondelet relacionada a la movilización de funcionarios, revela las múltiples solicitudes que hizo el mayor de Policía Santiago Mena Vallejo, integrante de la Unidad, para desplegar a personas a distintos puntos. El informe publicado el 2 de mayo, detalla los pedidos para el traslado de uniformados de la Policía a ciudades como Zamora, Loja, Riobamba, Latacunga, sitios por donde recorrió la marcha indígena para llegar a Quito, entre el 15 y 23 de marzo del 2012. El presidente de la Ecuarrunari, Delfín Tenesaca, califica de “indignate e inmoral” que esta dependencia haya infiltrado a su personal, nosotros solo pedíamos rectificaciones al oficialismo, dice.

Jueves 17

En rueda de prensa, Humberto Cholango, presidente de la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presenta 23 expedientes de dirigentes indígenas a los que se sigue juicio por participar en protestas contra el gobierno. “El presidente de la República ha preguntado qué dónde están los enjuiciados por sabotaje y terrorismo, y nosotros le decimos: Señor presidente, aquí están los expedientes de todos los enjuiciados por terrorismo, sabotaje, obstrucción de vías, aquí están los perseguidos por una justicia corrupta, los perseguidos por las empresas transnacionales”, dice, y añade que del resto de casos no se les ha brindado información por hallarse en “indagación previa” en la fiscalía. Los casos, planteados por terrorismo, sabotaje y asociación ilícita, fueron iniciados por las empresas Adelca, Cecal, Lafarge, Petroriental y Purocungo.

Viernes 18

El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) rechaza las críticas que el presidente Correa y la Secretaría de Comunicación (SECOM) han hecho al Informe de Derechos Humanos Ecuador 2011, publicado por el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH), que desarrolla la UASB. Dice que el texto no es un “panfleto de oposición al gobierno” ni un “fraude académico”, y

⁷⁰http://www.ecuadorenvivo.com/2012051991822/politica/correa- informe_sobre_ddhh_de_universidad_andina_es_una_compilacion_de_pasquines.html

⁷¹http://www.elcomercio.com/sociedad/Resumen-Tabacundo-Enlace-Presidente-Rafael_0_703129724.html.

⁷²http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39126&Itemid=2.

⁷³http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39203&Itemid=2.

remarca que “el gobierno actual tiene varios puntos a favor en la promoción de los derechos humanos; [...] no vivimos en el Ecuador una dictadura como se ha afirmado”, pero existen preocupantes signos de autoritarismo, especialmente al considerar las acciones de protesta social como terrorismo.

Martes 22

En conversación con la prensa, el presidente Correa resalta la recepción en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el informe del gobierno ecuatoriano sobre la situación de los derechos humanos en el país: “Los logros de un país han sido tan contundentes y categóricos que generaron una ovación inusual de todos los presentes que solo puede ser negada por los necios... Que 17 países expresaron su preocupación sobre la libertad de expresión. ¿Y cómo se enteraron? En base a lo que publican los medios sobre que no hay libertad de expresión. Ya caen en el ridículo, tratan de ocultar lo inocultable”. Añade que “El país no solo está avanzando hacia el desarrollo, a pagar la deuda social, combatir la pobreza, sino que en muchas cosas estamos a la vanguardia a nivel mundial, como en el caso de (la atención a las) discapacidades”.

Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuatoria de Derechos Humanos (CEDHU), se refiere a la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Dice que hay avances en el área social, aun con limitaciones de calidad, pero dice que se utiliza la justicia para fines políticos. “Esto es inaceptable”, señala al referirse a las demandas por terrorismo y sabotaje contra dirigentes indígenas, “terrorismo es como en Afganistán en donde mueren 60 o 70 personas, eso es terrorismo, aquí en el país no existen grupos terroristas y esa utilización es desproporcionada”.

Miércoles 30

El MPD y Pachakutik presentan en la Asamblea el pedido de amnistía para 31 dirigentes sociales procesados o detenidos. El pedido se anexa al realizado días atrás por Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, para amnistiar a 129 dirigentes sociales. El MPD y Pachakutik plantean, entre otros, los casos del exdirigente universitario Marcelo Rivera, de la expresidenta del magisterio, Mery Zamora, y de 10 detenidos días antes de la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, iniciada en la sureña provincia de Zamora el pasado 8 de marzo, que culminó en Quito el 22 del mismo mes. La CONAIE había planteado los casos de dirigentes acusados por empresas privadas como Cecal, Lafarge, Adelca, Petroriental y Purocungo, que utilizan también las figuras de terrorismo, sabotaje y asociación ilícita.

R

Guía práctica para descargar rápidamente (o no tanto) el Informe de la Defensoría del Pueblo sobre criminalización de la protesta social



Paso 1. Entre a la página web de la Defensoría: www.dpe.gob.ec

Paso 2. Al costado derecho de la página encontrará un espacio titulado “Informes dpe” (no malgaste su tiempo: allí no lo encontrará).

Paso 3. Un poco más abajo, sobre el mismo lado derecho, encontrará “Documentos 2011-2016”. Puede necesitar pinchar varias veces: no siempre se abre a la primera.

Paso 4. Al abrirse la nueva ventana, observará “Descargas”. Allí pinche en “Documentos producidos Período 2008-2011 Dr. Fernando Gutiérrez Vera”.

Paso 5. En la nueva ventana, pinche en “Descargas Informes Temáticos”.

Paso 6. Ese es el lugar en que encontrará “*Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador*”.

Paso 7. Pinche el pequeño cuadrado ubicado a la derecha del nombre del informe, y fíjese que quede marcado con un “visto” de color verde.

Paso 8. Sin abandonar esa misma ventana, baje el cursor hasta el último documento (“Movilidad, agua y comunicación”).

Paso 9. Abajo del mencionado documento encontrará “Continuar”. Pulse allí.

Paso 10. Se abrirá una nueva ventana de diálogo que dice “Aquí puede ver los archivos seleccionados para descargar” y, debajo de esa frase, una flecha azul. Pulse la flecha.

Paso 11. Ármese de paciencia y espere.

(Cuando escribo esto es martes 12 de septiembre a las 15:57, llevo 17 minutos de espera... y nada todavía.)

(La paciencia rinde sus frutos: el documento se descarga –han transcurrido 21 minutos).

Paso 12. Guárdelo en su computadora, o en un flash disk (tenga paciencia: es una operación que también puede tomar su tiempo).

Ahora bien, si prefiere no esperar tanto tiempo ni darse tantas vueltas:

Paso 1. Vaya a www.inredh.org.

Paso 2. Al lado derecho de la página encontrará un rectángulo de color verde con la leyenda: “No a la criminalización Defensor@s de Derechos Humanos y de la Naturaleza”. Pinche allí.

Paso 3. Se abrirá una ventana con el título del informe y el logo de la Defensoría, acompañados de un texto alusivo. Al final del texto, pulse en “Leer más”.

Paso 4. Se abrirá una nueva ventana, prácticamente igual a la anterior. Pulse donde dice: “Descargar documento en pdf”.

Paso 5. Guárdelo.

Una vez que lo haya guardado,

Paso 13 – o *Paso 6*, según corresponda–. Léalo. Estúdielo. No tiene desperdicio. Y compártalo. Es un documento que no merece quedar desconocido.

R

Los hijos de 1990

Marc Becker



En enero de 2012, Correa completó cinco años en sus oficios con los más altos ratings de aprobación para cualquier líder en América Latina. Todos los indicadores sociales parecían estar moviéndose en la dirección correcta: la pobreza se había desplomado, el empleo había ascendido, los salarios también estaban en ascenso, los indicadores de alfabetización y salud estaban en ascenso, y la brecha en inequidad se estaba achicando⁷⁴. Una ley de 2010 eleva el excedente de las provisiones petroleras

⁷⁴ La tasa de pobreza descendió desde casi 37% cuando Correa asumió en 2007 a un 32.8% en 2010 y cuatro puntos más en 2011, hasta los 28.6%, es decir, un total de nueve puntos durante sus primeros cinco años en el poder. El desempleo cayó del 6.1 a 5.1% en 2011, con un subempleo en descenso desde un 47.1 a 44.2%. El coeficiente de Gini que mide la desigualdad, también mejoró desde el 0.54 al 0.47 en 2011 (ver Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC), "Pobreza por Ingresos" http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35, 2012). La Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) informó que junto a Perú, Ecuador

gubernamentales del 13 al 87%, aumentando en dicho proceso los ingresos estatales a casi un millón de dólares. A su vez, el gobierno mejoró drásticamente su recaudación impositiva, significativamente vinculada a la renovación disponible de inversión en infraestructura y gasto social, sin generar un déficit presupuestario que lo debilitara. Fuertes gastos sociales en carreteras, hospitales y escuelas resultaron en una tasa de crecimiento del 8% para 2011, arriba del 3,6% del año anterior y por encima de la predicción gubernamental del 6.5%. La limitada tasa de crecimiento – la más alta en América Latina – se revirtió a pesar de las negativas e incontables presiones externas producidas en el marco de la crisis global del capitalismo, incluyendo las variaciones en el precio del petróleo y las reducciones en el crédito internacional así como en las remesas provenientes de las familias migrantes. Correa fue exitoso en superar los problemas persistentes de inestabilidad política, inequidad, y una economía débil que llevó al economista Jayati Ghosh a describir Ecuador como “el más radical y excitante lugar en la Tierra”⁷⁵.

Correa se mantiene como el político más popular en el Ecuador en décadas, debido en no menor medida a los positivos programas sociales que ha implementado. A su vez, la disparatada oposición carece de líderes tanto desde la izquierda como de la derecha que siquiera pudieran comenzar a acercarse el nivel de popularidad presidencial. En este sentido, Correa está posicionado para ganar las elecciones presidenciales de 2013 con poca dificultad.

Para los movimientos sociales, la potencialidad de Correa representaba un fuerte aliado porque golpeó a las enquistadas bases oligárquicas del poder, y tal vez era lo mejor que ellos podían esperar para esta coyuntura histórica. Sin embargo, como lo nota el sociólogo Jorge León, las relaciones de los movimientos sociales con Correa “han oscilado entre el completo acuerdo y la extrema oposición”⁷⁶. Muchos activistas continúan argumentando que Correa no era un verdadero izquierdista, y que ha traicionado aquellas promesas que le habían hecho ganar las elecciones. Una línea alternativa posicionó a Correa como parte de una izquierda urbana, blanca, que nunca tomó en cuenta los asuntos indígenas. Desde dicha perspectiva, la izquierda es tan mala como los gobiernos conservadores cuando estos se volvieron en defensa de los derechos de las comunidades marginalizadas o en lo referente a las consecuencias ecológicas del desarrollo. En respuesta, quienes apoyan a Correa acusaron a los movimientos indígenas de ser títeres, conscientes o no, de partidos locales de derecha y fuerzas externas del imperialismo. El estudioso peruano Alberto Flores Galindo advirtió de los peligros de los movimientos étnicos en su clásico texto *En busca de un Inca* cuando criticó las ideologías utópicas que invertían las relaciones

fue el más exitoso en reducir la pobreza en 2010. A pesar de los destacables aumentos en el gasto social per cápita, Ecuador aún se mantiene significativamente por detrás de los promedios regionales y no se acercó a la suma oficial de inversión social en Cuba (ver Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL), *Panorama Social de América Latina 2011* (Organización de las Naciones Unidas: Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, 2011, 12).

⁷⁵Jayati Ghosh, "Could Ecuador be the most radical and exciting place on Earth?" *Guardian*, 19 de enero de 2012.

⁷⁶Jorge León Trujillo, "Las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa", *Íconos* 37 (mayo 2010): 17.

de explotación en lugar de eliminar los sistemas de explotación en su conjunto⁷⁷. Como la antropóloga Nancy Postero advierte, imaginar utopías como una “visión política para el futuro, en vez de un infructuoso retorno a un pasado ficticio” implica “un duro trabajo de actores creativos en cada era”⁷⁸.

Fueran intencionales o no, muchas de las políticas de Correa trajeron una cantidad de beneficios desproporcionados para las empobrecidas áreas urbanas que formaron su base electoral, más que las comunidades indígenas rurales que en los 1990’s significaron algunos de los más fuertes retos a los gobiernos neoliberales. Los economistas Juan Ponce y Alberto Acosta cuestionan si las aparentemente positivas tendencias económicas son tan únicas en comparación a la historia reciente ecuatoriana o a más amplios patrones en América Latina, un punto que los datos de la CEPAL subrayan. En particular, los muy altos niveles de pobreza y extrema pobreza en las áreas rurales, y especialmente en las comunidades indígenas, tanto como las inequidades extremas entre áreas rurales y urbanas, molestan a Ponce y Acosta. Mientras que los niveles de pobreza urbana han caído en un 17%, en las áreas rurales continúan extendiéndose en un 50%. Ambos autores cuestionan si las políticas de inversión social y los aumentos salariales son llevados adelante escondiendo problemas estructurales que mantienen a las comunidades indígenas rurales en un estado de empobrecimiento⁷⁹.

Antes del impresionante ascenso de la izquierda al poder en la primera década del siglo XXI, muchos estudiosos y activistas celebraron la fuerza de los movimientos sociales, particularmente aquellos que demandaban por los derechos indígenas, como un primer engranaje detrás de una expansión de justicia social y derechos democráticos. Cuando una opción electoral repentinamente se convirtió en un camino real y viable al poder, varios observadores también descartaron el importante rol de los movimientos sociales en realizar estos mismos objetivos. Entretanto, activistas de los movimientos sociales y políticos de izquierda quedaron comprometidos con aquello que el periodista Benjamin Dangl llama “bailando con dinamita”⁸⁰. La relación entre Correa y los movimientos sociales fue parte de una mucho más larga danza entre diferentes caminos al poder en los cuales las estrategias e ideologías se pusieron en conflicto en la medida en que más coincidían, a menudo con acusaciones en torno a lo que parecía ser una cada vez más amplia y aparentemente insalvable división. Una dificultad constante para los movimientos sociales era cómo retar a Correa desde la izquierda sin fortalecer al enemigo común hacia la derecha. Una serie de protestas, conflictos y desarrollos políticos reflejan las actuales tensiones entre movimientos sociales y el gobierno de Correa.

⁷⁷ Alberto Flores Galindo, *Buscando un inca: Identidad y utopía en los Andes* (Lima: Instituto de Apoyo Agrario, 1987).

⁷⁸ Nancy Postero, "Andean Utopias in Evo Morales's Bolivia", *Latin American and Caribbean Ethnic Studies* 2, no. 1 (abril 2007): 21, 22.

⁷⁹ Juan Ponce y Alberto Acosta, "La pobreza en la “revolución ciudadana” o ¿pobreza de revolución?" *Ecuador Debate* 81 (diciembre 2010): 7-20; ECLAC, *Panorama Social de América Latina* 2011.

⁸⁰ Benjamin Dangl, *Dancing with Dynamite: States and Social Movements in Latin America* (Oakland: AK Press, 2010). También ver Gary Prevost, Carlos Oliva Campos, y Harry E. Vanden, ed., *Social Movements and Leftist Governments in Latin America: Confrontation or co-option?* (London: Zed Books, 2012).

Minga por el Estado Plurinacional

En la madrugada de 21 de junio de 2010, cientos de manifestantes indígenas arribaron a Quito luego de haber caminado durante once días desde el Puyo en el este amazónico. Ellos explicaban la marcha como una “minga” por el estado plurinacional, demandando la implementación de cambios progresivos prometidos en la nueva constitución de 2008. Los manifestantes desfilaban por las calles de la capital al despuntar la luz matinal con antorchas para guiarlos en el camino, y luego se reunieron en un día de acciones públicas para presentar sus demandas al gobierno. La minga arribó en el vigésimo aniversario del masivo levantamiento de junio de 1990 que colocó a las propuestas indígenas al frente y al centro de la conciencia política del país. La nueva y joven generación se llamó a sí misma los “hijos de 1990” porque estaban pretendiendo continuar con las demandas que les habían legado sus antepasados al llevar hacia las calles la protesta, dos décadas antes. Ahora estaban listos para asumir los roles de liderazgo y tomar gran responsabilidad en los movimientos. Los últimos veinte años habían sido un periodo de tremendas luchas y destacables avances, pero como la minga lo indicaba, los activistas aún estaban luchando para hacer oír sus voces en el ámbito público⁸¹.

En 2010 los manifestantes llevaban carteles que declaraban “No se construye el presente, si no se conoce el pasado”. Hablaban de continuar la lucha siguiendo el camino de los años 1990s, repitiendo el viaje que sus padres y abuelos habían hecho antes que ellos. “En esa época lucharon por la defensa de nuestros derechos y por nuestro reconocimiento”, dijo el presidente de la CONAIE, Marlon Santi. “Vimos su lucha y ahora la seguimos”⁸². En las comunidades a lo largo del camino, municipalidades, iglesias, y movimientos sociales proveyeron a los manifestantes de comida y hospedaje. En sus paradas, los participantes presentaron seminarios de historia de la resistencia indígena desde los 1990s hasta el presente, completándolos con exposiciones de fotos y videos. También organizaron asambleas para discutir propuestas para la construcción de un Ecuador plurinacional como estaba prometido en la constitución de 2008, instando al gobierno para que respete sus territorios y para incluir sus preocupaciones sobre el agua y la soberanía alimentaria que estaban en ese momento bajo consideración en la Asamblea Nacional. Su meta era la construcción de un verdadero estado plurinacional en el cual todos los sectores de la sociedad pudieran participar en los debates y en los procesos de toma de decisión política. También demandaban la limpieza de los ríos Amazónicos que las compañías transnacionales de petróleo, minería y madera habían contaminado.

Luego de arribar a Quito, los manifestantes se concentraron en el parque El Arbolito, el tradicional punto de encuentro para las protestas, y luego procedieron a un encuentro con los representantes de la Asamblea Nacional para discutir la legislación propuesta. La Asamblea respondió aprobando una resolución en “reconocimiento a la contribución histórica de las comunidades, pueblos y nacionalidades en su lucha de liberación de la opresión, colonización y el neoliberalismo, hacia la construcción del estado plurinacional e intercultural de Sumak Kawsay”. La resolución declaró el 21 de Junio como “una fecha cívica de

⁸¹ Marc Becker, “The Children of 1990”, *Alternatives* 35, no. 3 (julio-septiembre 2010): 291-316.

⁸². “La CONAIE celebra 20 años del levantamiento con una marcha”, *El Comercio* (Quito), 14 de junio de 2010, 4.

conmemoración, en reconociendo a los grandes aportes que ha dado el Movimiento Indígena a lo largo de estos 20 años”⁸³. Inicialmente los manifestantes esperaban presentar a Correa sus demandas de sistema de gobierno plurinacional que garantizara la equidad para todos, el respeto a los derechos indígenas al territorio y la incorporación de sus asuntos en las propuestas de leyes de agua y soberanía alimentaria. Los líderes de la CONAIE, sin embargo, decidieron que esto no tendría sentido y que incluso sería contraproducente intentar reunirse con Correa en el palacio presidencial⁸⁴. Entretanto, el énfasis de la CONAIE en el vigésimo aniversario de su histórico levantamiento de 1990 atentó contra la unidad que habían venido construyendo con otras organizaciones. La FENOCIN criticó públicamente la marcha y las demandas de remover a Correa de su cargo, en tanto la CONAIE negaba que esta hubiera sido alguna vez su intención⁸⁵.

Apenas luego de la Marcha por la Minga, los presidentes de Ecuador, Venezuela y Bolivia se reunieron el 24 y 25 de junio en una cumbre del ALBA en la ciudad norecuatoriana de Otavalo. Cerca de 300 delegados indígenas y afro-ecuatorianos participaron del encuentro. Cuatro comisiones discutieron los tópicos relativos a cultura, racismo, cambio climático y tratados internacionales entre los pueblos, con la prioridad de concentrarse en asuntos relativos a los pueblos indígenas y afro-descendientes. David Choquehuanca, el canciller de Bolivia que popularizó el concepto de *sumak kawsay*, abrió la Cumbre con el panel "Análisis de la transición desde el estado colonial hacia modelos de estado plurinacionales, interculturales y multiculturales". Alejandra Ocles, una mujer afro-ecuatoriana que era ministra de la Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC), quien había organizado la reunión, se dirigió al panel acerca del ejercicio de acciones interculturales; derechos económicos, políticos y sociales contra el racismo y la discriminación; e iniciativas públicas frente al cambio climático y los derechos de la naturaleza. "La creación de un estado plurinacional e intercultural va más allá del factor étnico y este requerirá de la contribución de todos los sectores de la sociedad", dijo. Este tipo de colaboración era necesaria para construir un mundo nuevo y mejor⁸⁶.

Los presidentes de izquierda firmaron la "Declaración de Otavalo" para promover los derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes. La Declaración prometía construir sociedades que sostengan sus derechos y protejan a la "Madre Tierra" a través de estrategias de desarrollo que respetaran el medioambiente. La declaración se comprometió a organizar un encuentro anual de autoridades indígenas y afro-descendientes en los marcos del ALBA como un mecanismo para construir un diálogo intercultural. Al momento de la firma, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo "Tenemos que deshacernos del capitalismo y proteger a la tierra, proteger a la naturaleza". Correa agregó que el principal desafío

83. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), "Pachakutik Denuncia Criminalización", Quito, 1 de julio de 2010, <http://www.conaie.org/component/content/article/26-pachakutik/74-pachakutik-denuncia-la-criminalizacion-de-las-actividades-del-movimiento-indigena>.

84. "La marcha llegará a Quito este lunes", *El Comercio* (Quito), 19 de junio de 2010, 5; "La marcha indígena llegó ayer a Quito", *El Comercio* (Quito), 20 de junio de 2010, 3.

85. "La FENOCIN cuestionó a dirigentes de la CONAIE", *El Comercio* (Quito), 18 de junio de 2010, 3.

86. "ALBA Summit Begins in Ecuador", Cuban News Agency, 24 de junio de 2010, http://www.cubaheadlines.com/2010/06/25/22270/alba_summit_begins_ecuador.html.

era sacar a los pueblos indígenas de siglos de pobreza y explotación. El encuentro finalizó con llamados por la unidad indígena por parte de los tres presidentes⁸⁷.

Más que celebrar la atención que el acuerdo prestaba a sus intereses, la CONAIE y sus organizaciones miembros se resentieron porque no habían recibido invitación al evento. Se quejaron de que los delegados indígenas que participaron en el acuerdo eran miembros del gobierno en lugar de líderes de movimientos sociales. La CONAIE reclamó que sus posiciones no estaban representadas en el encuentro y que los organizadores nunca les consultaron acerca del contenido de las discusiones. Parecía a la CONAIE que el acuerdo era un retroceso hacia la época *indigenista* de mediados del siglo veinte, en que se reunían funcionarios del gobierno, líderes religiosos y académicos para organizar encuentros sobre los indios y luego se asombraban frente al interés que los pueblos indígenas mostraban en las discusiones sobre sus propias vidas.

En lugar de participar en el acuerdo gubernamental, la CONAIE organizó una Asamblea Plurinacional alternativa, en la cual sostuvieron sus propias discusiones acerca del cambio climático, la lucha contra el racismo y la discriminación, los derechos de la naturaleza y la diversidad cultural. Como en la Minga, los líderes indígenas enmarcaron este encuentro como parte del legado del levantamiento de 1990. Tres mil activistas marcharon en las calles cantando y bailando canciones tradicionales del Inti Raymi que se celebra el 24 de junio (día festivo de San Juan) en Otavalo. Coreaban que Correa era un racista y un “falso socialista”. Docenas de policías a caballo intentaron bloquear el camino, lo que llevó al abogado Mario Melo a observar que “nuevamente, como hace quinientos años, las nobles patas de los caballos se levantaban para aplastar la voz de los pueblos ancestrales en su propio territorio”⁸⁸. Cuando los manifestantes llegaron a las puertas del encuentro, intentaron ingresar al recinto para entregar el acuerdo escrito a su “hermano indígena” Morales, pero la policía los hizo retroceder. El embajador boliviano salió de la reunión a pedir a los manifestantes que esperen hasta el final del evento para encontrarse con el presidente pero, cansados de esperar, después de dos horas se retiraron. La carta que querían darle a Morales denunciaba al gobierno de Correa y sus intentos de destruir a la CONAIE en un esfuerzo, ellos denunciaban, por mantener a la oligarquía y a los grupos transnacionales en el poder. Los activistas querían transmitir a Morales sus preocupaciones sobre las soluciones al cambio climático basadas en el Mercado, y su oposición a las industrias extractivas que ponían en riesgo a las comunidades indígenas. Llamaban, en vez, a una construcción de un verdadero estado plurinacional, construido en base a los principios del Sumak Kawsay que garantizara la armonía entre humanos y madre tierra⁸⁹.

87. Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), “Declaración de Otavalo”, 25 de julio de 2010, <http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6544>.

88. Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política: Organizaciones indígenas en indagación previa por el delito de terrorismo”, Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) (1 de julio de 2010), <http://alainet.org/active/39265>.

89. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), “Carta de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Ecuador a la Cumbre del ALBA”, Otavalo, 24 de julio de 2010, Servindi, <http://www.servindi.org/actualidad/27504>.

Luego de las protestas en Otavalo, el gobierno amenazó con procesar a los líderes indígenas por sabotaje y terrorismo. Un informe policial indicaba que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” irrumpió las líneas policiales fuera del encuentro del ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del orden público”, y que en el forcejeo resultante tomaron las esposas de un oficial. Melo sostuvo que las investigaciones penales fueron motivadas políticamente porque las protestas habían atraído la atención internacional hacia el hecho de que el gobierno de Correa había excluido de las discusiones políticas a quienes estarían más directamente afectados por sus políticas. Los cargos fueron designados, notó Melo, para “amedrentar y desmovilizar a las organizaciones y sus líderes”⁹⁰. Santi llamó a dichos cargos ridículos, y optó por responderle “No hemos actuado de alguna manera por la cual debamos ser acusados de nada”. El presidente de Ecuarrunari Delfín Tenesaca declaró: “Lo único que hemos hecho es demandarles respeto a los pueblos indígenas y a sus organizaciones”⁹¹. La CONAIE y Ecuarrunari declararon “que la demanda al no tener respaldo jurídico muestra claramente que se trata de una persecución política al Movimiento Indígena en general y a los dirigentes en particular, por el simple hecho de discrepar con las políticas del gobierno”. Le recordaron al gobierno que la constitución reconocía el “derecho a la resistencia” cuando los derechos fueran amenazados, y sostuvieron que “es ridículo e inadmisibles que dirigentes y luchadores sociales sean criminalizados por el simple hecho de pensar de manera distinta a los nuevos gobernantes de turnos”. Las organizaciones indígenas argumentaron que los procesos judiciales “no hace otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”⁹². Los cargos apuntaban a una profunda ruptura entre los movimientos sociales y el gobierno.

Correa respondió duro a estas críticas a su proyecto político. El presidente acusó a la CONAIE de “separatismo” y de jugar a favor de la derecha política. Justificó su accionar represivo argumentando que en los territorios de Zulia en Venezuela y la Media Luna en Bolivia, los grupos reaccionarios conspiraban contra la estabilidad de los gobiernos progresistas, y que los disidentes indígenas estaban inadvertidamente sosteniendo sus ataques. Los movimientos indígenas, y en particular la CONAIE, se habían convertido en aliados involuntarios de la derecha reaccionaria. El presidente venezolano, Hugo Chávez, criticó la protesta de manera similar, estableciendo que él no podía entender una protesta contra el gobierno de Correa y que debía tratarse de una infiltración de la CIA en las organizaciones que se definen a sí mismas como parte de la extrema izquierda. Los activistas negaron que este fuera el caso, y los militantes más políticamente juiciosos reconocieron el peligroso juego de creer que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. No obstante,

90. Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política: Organizaciones indígenas en indagación previa por el delito de terrorismo”, Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) (1 de julio de 2010), <http://alainet.org/active/39265>.

91. David Dudenhofer, “Ecuadorian Government Cracks Down on Native Leaders”, *Indian Country Today*, 9 de agosto de 2010.

92. Consejo de Gobierno de la ECUARUNARI y Consejo de Gobierno de la CONAIE, “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes”, Otavalo, 5 de julio de 2010, <http://www.conaie.org/home/125-la-revolucion-ciudadana-persigue-a-los-dirigentes-indigenas-y-sociales-del-pais?showall=1>.

la cuestión sí recordó quién tenía más que ganar con un presidente débil, y la respuesta no era precisamente el movimiento indígena.

El gobierno indicó que estaba investigando a más de treinta líderes de movimientos sociales por cargos de terrorismo y sabotaje, no solo por las recientes protestas en Otavalo sino también por protestas previas contra la minería de oro y cobre y contra la privatización del agua. También reabrieron viejos casos que habían sido previamente archivados. Entre los numerosos activistas que enfrentaron cargos por oposición a las políticas extractivas del gobierno, siete miembros de la comunidad Cochapata, en Azuay, fueron sentenciados a ocho años de prisión por sabotaje y terrorismo. En total, cerca de 200 activistas enfrentaron cargos por terrorismo, en buena parte por organizar protestas contra las políticas extractivas.

El caso más destacable fue el de los cargos que cuatro líderes indígenas –el presidente de la CONAIE Marlon Santi y el vice presidente Pepe Acacho, el presidente de Ecuarrunari Delfín Tenesaca, y el presidente de la FICI Marco Guatemal– enfrentaron por liderar marchas de protesta contra la ley de aguas propuesta en abril de 2010 y el Acuerdo del ALBA en junio de 2010. “Este gobierno ha declarado la guerra contra los pueblos indígenas”, declaró Tenesaca mientras denunciaba los cargos como un mecanismo de control social⁹³. Luego de pasar 17 días en prisión, el 10 de noviembre de 2011, Guatemal fue declarado inocente de los cargos. Saludando su liberación, Tenesaca declaró que el movimiento permanecería en alerta hasta que los otros 203 activistas que enfrentaban cargos fueran también sobreesidos⁹⁴. El rechazo del gobierno a reconocer los derechos de los pueblos indígenas como estaban codificados en la Constitución de 2008 generó la condena de Amnistía Internacional⁹⁵. Una profunda y creciente división emergió entre las políticas extractivas de Correa y los conceptos indígenas de *sumak kawsay*. Desde una perspectiva indígena, estos conflictos conciernen no solo a factores materiales de economías agrarias y problemas medioambientales, sino también a enfrentamientos ideológicos que amenazan a las cosmologías indígenas.

En respuesta a los cargos penales, Pachakutik comenzó a preparar una demanda contra Correa por “etnocidio, genocidio, xenofobia y racismo”⁹⁶. Reportes preliminares de una Comisión de la Verdad también mostraron un creciente número de abusos contra los derechos humanos bajo la administración de Correa. “En lugar de ayudar a poner sobre la mesa los puntos de diferencia sobre el manejo de los recursos naturales”, comenta la periodista Jennifer Moore, “la reciente ola de investigaciones penales contra líderes de movimientos sociales como Santi representa un mayor afianzamiento de estos conflictos”⁹⁷. Alberto Acosta sostiene

⁹³ "ONG: 189 indígenas están acusados de terrorismo y sabotaje", *Hoy* (Quito), 19 de julio de 2011.

⁹⁴ "La CONAIE vigilará los juicios en contra de 203 dirigentes", *El Comercio* (Quito), 11 de noviembre de 2011.

⁹⁵ Amnesty International. 'So That No One Can Demand Anything! Criminalizing the right to protest in Ecuador?' (London: Amnesty International, 2012); "Más críticas por la persecución a los indígenas", *El Comercio* (Quito), 17 de julio de 2012, 1, 4.

⁹⁶ "Indigenous justice is next bone of contention", *Latin American Weekly Report* WR-10-22 (3 de junio de 2010): 4.

⁹⁷ Jennifer Moore, "A New Wave of Criminalization Against Social Movements in Ecuador", *Upside Down World* (14 de Julio de 2010), <http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2590-a-new-wave-of-criminalization-against-social-movements-in-ecuador->.

que estas acusaciones de terrorismo y sabotaje contra los activistas son una “tremenda vergüenza”, y que “no tienen base en la justicia ni en un sistema judicial democrático”⁹⁸. Los activistas de los movimientos sociales negaron que fueran terroristas, y en lugar de ello argumentaron que era el gobierno de Correa el que utilizaba estrategias de las dictaduras militares fascistas, que usaban la represión para sembrar terror y paralizar la capacidad de la gente en organizarse para defender sus derechos. El resultado final de las acciones de Correa era detener a los procesos de cambio social⁹⁹.

“Lo que puede verse son las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edificio que aún no ha sido completamente construido” observó el periodista Raúl Zibechi. “Estas grietas están apareciendo porque existe una potente disputa de poder. Los pueblos originarios no tienen razón para aceptar el marco del Estado Nación, que es la base en que se edifica el Estado Plurinacional”. Zibechi criticó tanto a Correa como a Morales por caer en el mismo tipo de tácticas de acoso que los conservadores usaron en el siglo veinte para denunciar a los activistas de movimientos sociales como parte de una “subversión internacional comunista” que era financiada por el “oro de Moscú”. Zibechi argumenta que los presidentes están equivocados en creer que los activistas indígenas estaban siendo manipulados y que las influencias en ellos provenían desde fuera del país. Tales acusaciones tienen implicancias racistas de que los activistas indígenas eran incapaces de llevar adelante una lucha propia mientras al mismo tiempo distraen la atención de los problemas reales y urgentes de las inequidades económicas y del cambio climático¹⁰⁰. El ataque de Correa a los movimientos indígenas también llevó a un aumento de incidentes racistas, al mismo tiempo que las acciones del presidente animaron a sus seguidores a descargar sus frustraciones hacia los pueblos indígenas, quienes en las últimas dos décadas habían tan a menudo trastocado el funcionamiento de la sociedad con sus protestas sociales organizadas.

Correa vio la mayor amenaza a su gobierno y a las promesas de éxito de lo que él llamó el socialismo del siglo veintiuno, no proveniente desde la largamente desacreditada oligarquía conservadora sino desde los activistas de los movimientos sociales a quienes él repetidamente ridiculizaba como una izquierda fundamentalista e infantil que quería “todo o nada”. Para Correa, tal “absolutismo era el mejor aliado del *statu quo*”. Él condena a “los ambientalistas de izquierda” que “quieren detenernos de extraer nuestros recursos naturales”. Ha dicho que quieren reducir el Ecuador a “mendigos sentados en una bolsa de oro”¹⁰¹. El presidente de la CONAIE, Marlon Santi, contestó que “el socialismo del siglo 21 del cual habla Rafael Correa no es socialismo, sino un engaño; una réplica de las prácticas neoliberales y clientelares de los pasados gobiernos; ni la izquierda ni el socialismo pudieron acordar en incluir

98. Jeffery R. Webber, "Ecuador's Economy Under Rafael Correa: Twenty-First Century Socialism or the New-Extractivism? – An Interview with Alberto Acosta", *Upside Down World* (12 de Julio de 2010), <http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2586-ecuadors-economy-under-rafael-correa-twenty-first-century-socialism-or-the-new-extractivism--an-interview-with-alberto-acosta>.

99. Méthor Sánchez G., "El gobierno de R. Correa y los supuestos terroristas", *Ayni Solidaridad* 3, no. 37 (mayo 2010): 2.

100. Raúl Zibechi, "Bolivia and Ecuador: The State against the Indigenous People", *CIP Americas* (19 de julio de 2010), <http://www.cipamericas.org/archives/2810>.

101. "Still waltzing over Colombia", *Andean Group Report* RA-10-07 (julio 2010): 8.

a los pueblos indígenas, sino que ambos estuvieron de acuerdo en destruirlos”¹⁰². La CONAIE atacó directamente a la agenda desarrollista del presidente. “He oído el discurso de Rafael Correa”, dijo Santi “de que estamos sentados en una montaña de oro y que sería estúpido no explotarla. Pero este es un pensamiento de corto plazo, pensando solo en el presente. ¿Qué ocurre con el futuro?” La oposición sostuvo que las políticas de Correa difieren poco de sus predecesores. “Es un simple caso de cambio de máscara”, continuó Santi. “El socialismo del siglo 21 no es un socialismo comunitario que respeta los derechos indígenas. Es una copia del capitalismo occidental, que era claramente un fracaso. Es un nuevo tipo de capitalismo en América Latina. Y también está probando que será un fracaso”¹⁰³. En su lugar, Santi imagina un nuevo mundo construido en base al respeto de los derechos de la naturaleza.

Los notorios arrebatos cáusticos de Correa contra sus oponentes no ayudaron a la situación. En lugar de tomar seriamente las demandas indígenas, buscó culpar a otros por instigar a la disidencia. En particular, criticó a las ONG’s por generar problemas. “Vienen estos gringuitos con la panza bien llena a convencer a los indígenas de que no se puede extraer el petróleo, ni operar las minas” dijo Correa. “Le pasan plata a los indígenas, cuando logran su objetivo se van y los indígenas quedan más pobres que antes”. En particular, él criticó a la CONAIE por trabajar con grupos internacionales de oposición a la minería. Correa ha dicho que expulsará a cualquier ONG que ayude a organizaciones indígenas en su lucha contra la extracción del recurso¹⁰⁴. En julio de 2012, Correa continuó con sus amenazas y echó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), incluso a pesar de que grupos pro-Correa habían también recibido fondos para el desarrollo de sus organizaciones. La crítica a las ONG’s tiene un cierto grado de legitimidad. Los movimientos sociales estaban al tanto del peligro de que las ONG’s secuestren sus agendas radicales, a menudo por medio del control de sus fuentes de financiamiento. Es la misma crítica que la CONAIE también ha sostenido y denunciado a ese tipo de ONG’s, en este sentido que en el 2006 sacó una lista de ONG’s conservadoras y de derecha que promovían el TLC dentro de las comunidades. Una crítica común es que las ONG’s estaban más preocupadas por mantener su viabilidad institucional que por realizar transformaciones sociales radicales y las soluciones que los movimientos sociales demandaban. No fue sin bases que Correa temiera que las ONG’s pudieran dirigir a los movimientos sociales en un curso conservador y entonces socavar la dirección de izquierda en la cual él intenta llevar a la revolución.

102. "Chávez and Correa seek to build regional unity", *Latin American Weekly Report* WR-10-27 (julio 8, 2010): 5.

103. Jeffery R. Webber, "Indigenous Struggle, Ecology, and Capitalist Resource Extraction in Ecuador: An Interview with Marlon Santi", *GlobalResearch.ca* (13 de Julio de 2010), <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20118>.

104. "ONG's que intervengan en política serán expulsadas, dice Correa", *Hoy* (Quito), 10 de julio de 2010, <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ongs-que-intervengan-en-politica-seran-expulsadas-dice-correa-418108.html>.



Referéndum

El 15 de enero de 2011, en el cuarto aniversario de su presidencia, Correa propuso un referéndum constitucional con el fin de implementar reformas para profundizar su revolución ciudadana. El 7 de mayo de 2011, los votantes prácticamente aprobaron diez reformas constitucionales, judiciales, políticas y sociales. En las preliminares de la votación, más que una contienda sobre cada tema específico, varios observadores tomaron la elección como un plebiscito de los cuatro años de Correa en el poder, una prueba de su popularidad, y de sus perspectivas para ganar la reelección en 2013. Para Correa, una fuerte racionalidad política subyace a su decisión de llamar al referéndum. Continuando con el aumento de popularidad posterior al levantamiento policial fallido del 30 de septiembre, una contundente victoria en el referéndum reafirmaría la legitimidad presidencial y lo mantendría en el poder. Las encuestadoras inicialmente indicaban que Rafael Correa se había alejado de sus seis victorias electorales consecutivas. En lugar de ello, la estrecha victoria desafiaba el mito que se había alzado en torno a que Correa era un líder invencible de la marea rosada que estaba barriendo a lo largo de América Latina. La visibilidad del referéndum llevó las tensiones entre Correa y los movimientos sociales a la superficie¹⁰⁵.

¹⁰⁵ El voto por el Sí en las diez preguntas estuvo por debajo del 44.964% en la pregunta nueve sobre la regulación de los medios, por encima del 50.462% en la primera pregunta acerca de la detención preventiva. El voto por el No estuvo por debajo del 38.874% en la primer pregunta y por encima del 42.559% en la pregunta cuatro sobre la revisión del sistema judicial. Los porcentajes no alcanzan a

El referéndum comenzó como un particular asunto en torno a la reforma del código penal para extender el periodo de detención previa al juicio para criminales con el objeto de administrar los asuntos de seguridad pública, pero luego se expandió hacia diez temas más de amplio margen de significancia. Además de las reformas constitucionales diseñadas para revisar un sistema judicial que Correa vio como corrupto e ineficiente, y la limitación para que no coincidan propietarios de los grandes medios de comunicación con el sector bancario, un segundo grupo de preguntas intentaba prohibir las apuestas, y las corridas de toros y peleas de gallos. En particular, la pregunta sobre la propiedad de los medios de comunicación estaba vinculada con la continuidad de Correa en el poder porque la prensa se mantenía firmemente en manos de la oligarquía tradicional y era sólidamente opositora al gobierno.

En tanto el referéndum del 7 de mayo se acercaba, una variedad de campañas tanto a favor como en contra del mismo protagonizaron la escena. Aunque la oligarquía se opuso a cualquier cambio que hiciera Correa, algunos de los más serios opositores provinieron desde sus ex aliados quienes habían resultado crecientemente desilusionados con el creciente autoritarismo de su gobernante. Cuatro diputados y dos ministros de su gabinete, incluyendo a Alexandra Ocles, abandonaron la coalición política de Correa. Estos disidentes efectuaron un posicionamiento en el cual indicaban que mientras ellos acompañaban los cambios positivos en Ecuador, Correa “no puede exceder sus funciones: en el ejercicio del poder, nosotros debemos reconocer límites”. Por esta razón, ellos se opondrían al referéndum¹⁰⁶. Alberto Acosta organizó un movimiento llamado Montecristi Vive en alianza con la CONAIE y el MPD para oponerse al referéndum. En la ciudad costera de Guayaquil, el ex ministro del interior Gustavo Larrea creó un movimiento paralelo llamado Iniciativa Ciudadana. Estos ex aliados criticaron el referéndum por traicionar los principios de su proyecto político, mientras Correa los atacaba como oportunistas que se habían unido a la partidocracia, y denunciaba sus acciones como una traición personal hacia su gobierno. Acosta replicó que a pesar de que apoyaba los referéndums y coincidía con algunos de los temas a consultar, se oponía a los intentos de Correa de desdibujar las divisiones entre las tendencias del gobierno. En particular, debatía en defensa de la independencia de la Justicia. De manera similar, muchos movimientos sociales se opusieron al referéndum a pesar del hecho de que incluía algunos aspectos que deberían ser profundamente atractivos para la izquierda. Dos de las preguntas criminalizaban de la riqueza no justificada y requerían registrar a sus empleados en el Instituto de Seguridad Social, precisamente el tipo de políticas que beneficiaban a los sectores pobres y marginalizados. Al hacer el referéndum, en líneas generales la agenda de gobierno de Correa, con énfasis principalmente en políticas económicas y sociales diseñadas para beneficiar a los sectores más marginales y explotados de la sociedad, habría ganado el apoyo entusiasta de la mayoría de la población. Los opositores tanto hacia la izquierda como hacia la derecha temían que Correa estuviera utilizando las altas tasas de

sumar el 100% por los votos en blanco y nulos. Consejo Nacional Electoral (CNE), "Consulta popular resultados", <http://app2.cne.gob.ec/resultados/resultadosn.aspx>, 2011.

¹⁰⁶ "Referendum raises real disquiet over direction of Correa's Revolution", *Latin American Weekly Report* WR-11-05 (3 de febrero de 2011): 1.

crecimiento del crimen como una justificación para expandir su poder ejecutivo, incluyendo el intento de llenar las cortes judiciales con sus. Ellos apuntaron que la concentración de poder en sus manos solo serviría para retroceder en la expansión de democracia directa tal como figuraba en la progresista constitución de 2008. De todos modos, la derecha clásica como Jaime Nebot del Partido Social Cristiano y Abdalá Bucaram del Partido Roldosista Ecuatoriano pese a su anunciada negativa a la consulta, no se inscribieron en el Consejo Electoral para hacer campaña y callaron durante la misma. Para los movimientos sociales, el intento del gobierno para mejorar la seguridad pública significaba poco más que una criminalización del disenso, un temor que ya era una realidad para los activistas indígenas que enfrentaban cargos de sabotaje y terrorismo por oponerse a las políticas extractivas.

El interrogante que ganó la más amplia atención en el referéndum de mayo de 2011 era el que buscó limitar el control de la oligarquía sobre los medios de comunicación. Mientras los conservadores arremetieron con un enérgico alegato por la libertad de prensa, luego de haber perdido el control sobre el proceso político como ocurrió en Venezuela y Bolivia, el control oligárquico de los grandes medios representaba la más fuerte y estridente arma en su batalla contra las políticas gubernamentales. Estaban sólida e incluso irresponsablemente opuestos al actual gobierno, y se convirtieron en el principal vehículo para el avance de los intereses económicos de los más ricos. Los gobiernos de la nueva izquierda en América Latina aprendieron que la implementación de sus objetivos de política requería un uso creativo de los medios para comunicar sus mensajes al público. Chávez, por supuesto, tomó la delantera en Venezuela al responder en esta guerra informacional con *Aló Presidente*, y Correa continuó con su *Enlace Sabatino*. Correa fue particularmente agresivo en su uso de los medios, expandiendo drásticamente el número de medios propiedad del gobierno en un intento por emitir su mensaje. Esta expansión se alcanza gracias al significativo aumento de la inversión oficial en publicidad, desde dos millones de dólares bajo el período de gobierno anterior hasta 129 millones de dólares en 2012. En dicho proceso, Correa dejó sin oyentes a las estaciones de radio comunitarias e independientes tales como La Luna que habían jugado un rol tan central en las protestas callejeras de abril de 2005 cuando fue removido del poder Lucio Gutiérrez.

Críticos a los gobiernos populistas radicales se quejan de su decadente autoritarismo y de los aspectos represivos, aunque como nota Ellner estos críticos son demasiado exagerados¹⁰⁷. En Ecuador, el más notorio caso fue la demanda que Correa realizó contra *El Universo* por difamación y calumnias en sus editoriales contra sus acciones como presidente. Aunque el caso salpicó a la izquierda en la línea de si la libertad de expresión era igualmente defendible en estos casos, muchos en los movimientos sociales de izquierda reconocieron estas libertades individuales y liberales como un tipo de problema no estructural para la sociedad. Más que construir una alianza común en torno del tema de los desafíos que Correa alegaba contra la libertad de prensa, muchos de los izquierdistas de los movimientos sociales no tuvieron mucha paciencia con las críticas conservadoras al gobierno de Correa. Viviendo en un confortable exilio auto-impuesto en Florida, el editor de *El Universo*

¹⁰⁷ Steve Ellner, "The Distinguishing Features of Latin America's New Left in Power", *Latin American Perspectives* 39, no. 1 (enero 2012): 96-114.

Emilio Palacio difícilmente conquistó la venia de las comunidades marginales y los movimientos sociales organizados. En vez, estos temas solo subrayan los intereses privados de la saludable clase capitalista.

Marcha Plurinacional por la vida, el agua y la dignidad

Miles de marchistas indígenas llevando una gigante whipala arribaron a Quito el 22 de marzo de 2012 (Día Mundial del Agua) luego de dos semanas de la Marcha Plurinacional por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos. La marcha comenzó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el cantón de El Pangui al sur de la provincia de Zamora Chinchipe, viajando alrededor de 700 kilómetros hacia la capital. Se trataba de una marcha en oposición a los planes del gobierno de comenzar con minería a gran escala, tanto como para defender la nueva constitución contra los ataques neoliberales y presionar para que se aprueben las leyes de agua y revolución agraria. Los manifestantes sostenían que la minería agotaría y contaminaría las fuentes de agua, y que las comunidades no habían sido apropiadamente consultadas acerca de los impactos ambientales de los proyectos. El 5 de marzo, justo antes de que la marcha comenzara, Correa firmó un contrato por \$1.4 billones con la Compañía China Ecuacorriente para iniciar la explotación minera a cielo abierto de cobre. El Mirador minero planeado media dos kilómetros de largo y 800 metros de profundidad, y sería el primer proyecto minero a gran escala del Ecuador. Mientras Correa calificaba al contrato como uno de los mejores alguna vez negociados, los manifestantes estaban preocupados por las consecuencias negativas a nivel ambiental que implicaba expandir la extracción de recursos. Correa indicó que los proyectos mineros ayudarían a financiar proyectos de desarrollo, incluyendo carreteras, escuelas y hospitales. "No podemos ser mendigos sentados en sacos de oro", proclamó Correa cuando firmó el contrato¹⁰⁸.

El gobierno de Correa organizó una contra-demostración en ambas marchas, tanto la del 8 como la del 22 de marzo, con ambos lados dando estimativos aproximados y confusos sobre sus respectivas marchas, argumentando que las propias eran más grandes y significativas que las otras. Correa se jactaba de que el gobierno había vencido a la protesta indígena porque su marcha era mucho más grande, y que en el pasado las marchas de la CONAIE habían sido mucho más grandes que la actual. Correa alternativamente minimizaba la marcha de la CONAIE como insignificamente pequeña y la encuadraba como el más grande desafío a su gobierno. En lo que muchos manifestantes tomaron como una caracterización despectiva y racista, Correa denunció a la marcha como una de "plumas y ponchos". Cuando el gobernador de Azuay Paúl Carrasco recibió a la marcha en su provincia con una bebida simbólica para Salvador Quispe, uno de los líderes de la marcha y gobernador de Zamora Chinchipe, el periódico gubernamental *El Ciudadano* respondió con tonos racistas que luego de 520 años de colonización los pueblos indígenas aún eran motivados por el alcohol.

Para ser claros, la marcha de la CONAIE fue mucho más pequeña que muchas de aquellas masivas protestas de los años 1990s. Pero las promesas de Correa de movilizar cien veces más entre sus partidarios que los que movilizaba la marcha de

¹⁰⁸ Marc Becker, "Marching for Life, Water, Dignity", *Against the Current* 159 (julio/agosto 2012): 9-10.

la CONAIE, resultó finalmente mucho menor de aquella meta. En otro sentido, la marcha de la CONAIE fue mucho más significativa porque persistió durante dos semanas en vez de reunir sus fuerzas únicamente los días 8 y 22 de marzo como lo hizo el gobierno. Incluso, el gobierno pudo movilizar sus fuerzas gracias a la infraestructura gubernamental incluyendo la provisión de buses para el transporte de sus partidarios. En tanto, la CONAIE enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo el rechazo gubernamental de autorizar que los buses se desviaran de sus rutas asignadas para transportar a los manifestantes, controles policiales, infiltración policial en la marcha, y una fuerte propaganda ofensiva.

El 20 de marzo, organizaciones pacíficas, incluyendo a la FENOCIN, se agruparon en la Red Agraria y se presentaron ante la Asamblea Nacional con un petitorio en apoyo a su propuesta de legislación agraria que limitaría el tamaño de los latifundios con el objetivo de señalar los problemas con la distribución inequitativa de la tierra. FENOCIN se había vuelto crecientemente distante del gobierno por sus políticas agrarias y sobre el agua. FENOCIN planeaba sostener su propia demostración llamando a una revolución agraria, pero finalmente apoyó silenciosamente la marcha de la CONAIE.

El 22 de marzo, el gobierno organizó concentraciones en diferentes partes de la ciudad para oponerse a la marcha indígena, incluida la que se organizó en el parque El Arbolito, el tradicional punto de encuentro para las protestas indígenas en Quito. En el curso de un día, Correa dio discursos a sus partidarios en las plazas de la Independencia, en San Francisco y en Santo Domingo. Repitió los temas comunes: que la marcha era un fracaso, que sus partidarios habían derrotado a los golpistas y que estaban defendiendo la democracia, en tanto repetía el eslogan de la guerra civil española: *No Pasarán*. Correa clamó que los movimientos indígenas radicales eran aliados de la extrema derecha, de los banqueros y de la prensa corrupta. Todo su discurso implicaba que los manifestantes indígenas habían sumado sus fuerzas a grupos golpistas fascistas, si es que no estaban siendo ellos mismos los instigadores del golpe, al organizar una demostración contra el gobierno. Al homogeneizar a todos sus oponentes en vez de distinguir sus perspectivas políticas radicalmente diferentes, Correa intentaba desacreditarlos y distraer la atención de los problemas más serios.

El presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, negó categóricamente que la marcha estuviera tratando de desestabilizar al gobierno, o que fueran aliados de la derecha política. De hecho, la CONAIE se negó a colaborar con partidos políticos conservadores que también se oponían al gobierno. “Queremos decirle al presidente de la República”, declaró Cholango, “que nuestras luchas son luchas revolucionarias, auténticas del pueblo y no son financiadas absolutamente por ningún fascista ni ninguna empresa ya que jamás nos vamos a juntar con los sectores de la derecha ecuatoriana”¹⁰⁹. Más que desestabilizar al gobierno, el objetivo era forzarlo a escuchar sus protestas contra la minería y la defensa del derecho al agua. “No somos

¹⁰⁹“CONAIE and Social Movements Mobilize in Ecuador”, 5 de marzo de 2012, <http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/3498-1-conaie-and-social-movements-mobilize-in-ecuador>.

líderes de un golpe de estado, no queremos derrocar al gobierno”, reiteró Quishpe, “pero vamos a inundar Quito con gente que no quiere nuestra agua contaminada”¹¹⁰.

Una vez llegados a Quito, los manifestantes entregaron a la Asamblea Nacional un petitorio que concluía diecinueve demandas. En líneas generales, estas demandas fueron agrupadas en torno de cuatro temas: (1) resistencia a la minería y defensa del agua y de la vida; (2) oposición a la represión política y a la criminalización de las luchas sociales; (3) denuncia de las tendencias autoritarias del gobierno y demanda por consulta previa antes de iniciar la extracción minera en territorios comunales; y (4) la demanda por una revolución agraria. Ante todo, sin embargo, la marcha insistía en el cumplimiento de lo estipulado en la constitución para la defensa de los derechos de la naturaleza, algo que los activistas indígenas y medioambientalistas demandaban que el gobierno había violentado en favor de las políticas de explotación minera a gran escala¹¹¹.

Al organizar la marcha, la CONAIE intentó recuperar su alguna vez hegemónico rol de liderazgo de los movimientos de protesta social. En tanto no estuvo ni cerca de desafiar la solidez de Correa en el poder, sí asumió el importante rol que los movimientos sociales juegan en democracia: abrió el debate, colocó serios temas sobre la mesa, y presionó al gobierno a responder sobre aquellos asuntos de aquellos cuyas voces de otra manera no hubieran sido oídas. El hecho de que Correa fuera forzado a movilizar amplios recursos gubernamentales para responder a la marcha, indica que los movimientos sociales fueron capaces de articular los intereses de las poblaciones marginadas. En este sentido, CONAIE recuperó de hecho su histórico rol político alzando temas de agenda política que son importantes para el país, y en el proceso también lograron devolver la central importancia que tienen los movimientos sociales para llevar al país por encima de las políticas económicas neoliberales.

Bailando con dinamita

En una conversación con el politólogo Jeffery Webber, el reconocido referente de la lucha por los derechos indígenas Luis Macas señaló la importancia de equilibrar la defensa de las identidades étnicas con la necesidad de profundizar los cambios estructurales en la sociedad. “Ninguna lucha es aislada”, dijo Macas. Más que eso, el éxito requiere de “una diversidad de procesos sociales, de procesos políticos históricos”. En particular, llevar adelante estos cambios requiere tanto trascender las mentalidades coloniales como acabar con el modelo capitalista. “Si no destruimos ambos”, declaró Macas, “alguno de ellos perdurará”. Desafortunadamente, “Correa no ha superado su mentalidad colonial”. El problema de acuerdo a Macas no era el racismo, o en todo caso el problema era mucho más profundo que la raza. Correa quería liquidar al movimiento, no porque fueran indios quienes lo condujeran sino porque se pusieron en el camino del modelo de desarrollo que él quería implementar en el Ecuador. Él fue incapaz de imaginar un modelo diferente, uno que no estuviera basado en la explotación de recursos naturales sino en la vida en armonía con el mundo que lo rodeaba. El imperialismo

¹¹⁰ Luis Ángel Saavedra, “Mega-miningtakes off”, *Latinamerica Press* (15 de marzo de 2012).

¹¹¹ “Marcha por la Vida”, marzo 2012, <http://marchaporlavida.net/>.

necesita ser destruido, argumenta Macas, pero ¿qué sentido tiene la destrucción del imperialismo si es únicamente reemplazado por un tipo similar de modelo de desarrollo geopolítico eurocéntrico y antropocéntrico que ahora surge del sur global en lugar de hacerlo desde el norte industrial, pero que aún continúa enriqueciendo sólo a unos pocos en lugar de enriquecer a toda la sociedad? “El imperialismo solo alcanzará la muerte a manos de las luchas sociales”, declaró Macas. Pero la criminalización de las luchas sociales indica que el gobierno de Correa fue fundamentalmente más cercano a la derecha populista que a una izquierda popular¹¹².

Algunos analistas dudaron que las divisiones en la izquierda pudieran ser fácilmente reparadas. El historiador Pablo Ospina señala cinco factores que llevan hacia la ruptura entre Correa y los movimientos sociales organizados, y ninguno de ellos podría ser fácilmente resuelto. Primero se encuentra la insistencia de Correa en basar sus planes de desarrollo en industrias extractivas. Muchas organizaciones no estaban clamando por el fin de la extracción petrolera, sino que se oponían a los nuevos planes de minería a gran escala que aparentemente contradicen lo que la constitución sostiene en torno del Sumak Kawsay. En segundo lugar, estaban estancados los planes para las nuevas políticas agrarias. El gobierno prometió implementar una revolución agraria, pero no hizo ningún progreso en esa dirección. En tercer lugar, las políticas laborales, y las actitudes de Correa que ven a los sindicatos de trabajadores como opuestas a la eficiencia, la modernización y a la meta mejorar la calidad de los servicios públicos. Cuarto, los diferentes conceptos de estado, y en particular sobre el rol de la participación social en las decisiones de política pública. Finalmente, estaban las acciones hostiles de Correa frente a las movilizaciones sociales independientes. Ospina nota que la tensión no estaba dada inicialmente por las declaraciones antagonistas de Correa, sino por las consecuencias de contar con doscientos activistas de base enfrentando cargos de terrorismo y sabotaje por oponerse a las políticas extractivas del presidente. Correa parece estar decidido a destruir cualquier movimiento social organizado que pudiera potencialmente encarnar una oposición a su gobierno. Con casi la totalidad de la clásica y ortodoxa izquierda unida a varios movimientos sociales en abierta revuelta contra el gobierno de Correa, la marxista chilena Marta Harnecker arribó a Quito en agosto de 2011 y abogó por la unidad. Ella temía que estas divisiones internas solo fortalecieran y abrieran el espacio para la oligarquía conservadora, y que el proceso político que se desarrollaba en Ecuador enfrentaría el mismo final trágico que el gobierno de Salvador Allende encontró en Chile en 1973¹¹³. Un peligro constante para los movimientos sociales era que ellos consintieran que lo perfecto fuera el enemigo de lo bueno.

Emir Sader advierte a los movimientos sociales de lanzar ataques frontales hacia gobiernos amigables, y equivocarse un aliado vacilante con un enemigo. A pesar

112. Jeffery R. Webber, "Indigenous Liberation and Class Struggle in Ecuador: A Conversation with Luis Macas" *Upside Down World* (17 de julio de 2010), <http://upsidedownworld.org/main/ecuador-archives-49/2594-indigenous-liberation-and-class-struggle-in-ecuador-a-conversation-with-luis-macas>.

113 Pablo Ospina Peralta, "La unidad de las izquierdas" <http://lalineadefuego.info/2011/09/08/la-unidad-de-las-izquierdas-por-pablo-ospina-peralta/>, 8 de septiembre de 2011.

de sus moderadas y contradictorias políticas, Sader sostiene que estos nuevos gobiernos son demostrablemente mejores que sus predecesores neoliberales de derecha, al menos por la razón de que han rechazado los tratados de libre comercio y por su acercamiento a políticas de redistribución social. Él urge a los movimientos sociales a reconocer los avances positivos, y a aliarse con el sector progresista de estos gobiernos con el objetivo de fortalecer a estos sectores y concentrar el ataque a la hegemonía del capital financiero. Sader denuncia una posición doctrinaria y ultraizquierdista que infinitamente critica a los gobiernos de centro izquierda sin captar la realidad concreta. La tarea, reclama Sader, es criticar al gobierno por sus errores pero también apoyarlo en sus maniobras positivas y hacer un frente común contra la derecha. En tanto reconoce la importancia de la resistencia de base, Sader también señala la necesidad de comprometer a las estructuras de poder. Aunque estas luchas políticas son difíciles y están minadas por complejos compromisos y contradicciones, Sader reclama que si los movimientos sociales retroceden hacia lugares anónimos se aislarán y auto marginalizarán hasta la irrelevancia¹¹⁴.

Las contradicciones y las soluciones de compromiso que los activistas ecuatorianos enfrentaron fueron parte de un más amplio dilema que buena parte de la izquierda de América Latina, tanto como otras alrededor del mundo, confrontó. Una dificultad constante era cómo presionar al ala izquierda de Correa hacia una más inclusiva y participativa forma de gobierno sin fortalecer al enemigo común a la derecha. Al promulgar muchas políticas favorables, incluyendo más significativamente a una nueva y progresiva constitución que encarna el largamente sostenido objetivo de la CONAIE de declarar al Ecuador como un Estado Plurinacional, Correa indiscutiblemente hizo más por las comunidades marginalizadas que ningún otro presidente en la historia del Ecuador. Esto lleva a la irónica situación en la cual la CONAIE siente una falta de influencia y pelea por ser oída en un gobierno que aparentemente debería ser su mejor aliado. El diálogo nunca fue una de las fortalezas de Correa, pero continúa posicionado para traer otros beneficios a los movimientos sociales del Ecuador. Frente a una situación aparentemente irresoluble, subyace en la responsabilidad de ambientalistas, comunidades rurales, movimientos sociales, y la izquierda en general el presionar a Correa en una dirección positiva para construir formas de gobierno más inclusivas y participativas.

R

¹¹⁴ Emir Sader, *El nuevo topo los caminos de la izquierda latinoamericana* (Buenos Aires: Siglo XXI, CLACSO, 2009).



Vínculos

Correspondencia de Prensa

Colectivo Militante - Agenda Radical

Gaboto 1305 - Montevideo - Uruguay

redacción y suscripciones: germain5@chasque.net

VIENTO SUR
www.vientosur.info

Revista bimensual por una izquierda alternativa. Estado Español.

www.vientosur.info

www.inprecorsur.fr

Revue d'information et d'analyse publiée sous la responsabilité du Bureau exécutif de la IV^e Internationale.

Punto de Vista Internacional

<http://www.puntodevistainternacional.org/>

CADTM

Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo

<http://www.cadtm.org/Espanol>

Movimento operaio

La pagina di Antonio Moscato

<http://antoniomoscato.altervista.org>

Vínculos

Izquierda Anticapitalista del Estado Español



<http://www.anticapitalistas.org/>

Revolta Global. Esquerra Anticapitalista. Catalunya



<http://www.revoltaglobal.cat>

Partido Revolucionario de los Trabajadores. México



<http://www.prt.org.mx>

LINEADEFUEGO

comunicación no alineada

<http://lalineadefuego.wordpress.com/>

R

<http://www.revistar-ecuador.com>

**La batalla electoral / Carta a Alberto Acosta
La misa de los sábados / El “socialismo del buen vivir” /
Alianza Correa / Criminalización y buen vivir
Movimiento indígena: Los hijos de los 90**



R octubre de 2012 – año 4 número **10**

Quito, Ecuador